



# META

## Análisis de conflictividades y construcción de paz







# META

## Análisis de conflictividades y construcción de paz





# META:

## Análisis de conflictividades y construcción de paz



### Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Fabrizio Hochschild  
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Arnaud Peral  
Director de País

Inka Mattila  
Directora adjunta

Alessandro Preti  
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Jenny Galvis  
Coordinadora Territorial

Olga González Reyes  
Asesora de Análisis



Documento elaborado por:

Consultor  
Omar Gutiérrez Lemus



*El análisis que se presenta a continuación se basa en la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related Development Análisis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.*

Intervenciones de tres tipos: Estatal, Intergremial y Social-Popular

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva, ni los Estados miembros.

Diciembre de 2014

# Contenido

<b>Introducción</b> .....	7
<b>Resumen ejecutivo</b> .....	9
<b>1. Territorio, conflicto y actores</b> .....	13
<b>Territorio y sociedad</b> .....	13
<b>Las microrregiones</b> .....	15
<b>Economía y conflicto</b> .....	16
<b>Espacio y conflicto: 1985-2002</b> .....	21
<b>Política y conflicto: 1982-1998</b> .....	22
<b>Conflicto, negociación y política: 1999-2002</b> .....	24
<b>La restauración del orden y la parapolítica: 2002-2006</b> .....	25
<b>Seguridad y justicia en el Meta: 2002-2013</b> .....	27
<b>Violencia política y actores armados</b> .....	28
<b>Efectos del conflicto en la población civil: 1997-2011</b> .....	30
<b>Mapa de actores regionales</b> .....	32
<b>Organizaciones sociales</b> .....	33
<b>Instituciones oficiales</b> .....	36
<b>Partidos y movimientos políticos</b> .....	38
<b>Instituciones no gubernamentales</b> .....	40
<b>Los gremios económicos</b> .....	41
<b>2. Intervenciones y respuestas de los actores regionales</b> .....	45
<b>Los Consejos Seccionales de Desarrollo Rural (CONSEA)</b> .....	46
<b>Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR)</b> .....	47
<b>Consejos Territoriales de Planeación (CTP)</b> .....	47

<b>Los Comités Municipales Ambientales</b> .....	47
<b>Los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada</b> .....	47
<b>Los Consejos Municipales de Paz</b> .....	48
<b>El Comité Inter-gremial del Meta</b> .....	48
<b>Intervenciones: estatal, intergremial y social-popular</b> .....	49
<b>Algunas acciones de los actores para la creación de paz</b> .....	50
<b>3. Análisis de vacíos y brechas – posibles estrategias y recomendaciones</b> .....	53
<b>Organizaciones sociales</b> .....	53
<b>Instituciones oficiales</b> .....	54
<b>Partidos y movimientos políticos</b> .....	55
<b>Organizaciones no gubernamentales</b> .....	56
<b>Gremios económicos</b> .....	57
<b>Actores armados</b> .....	58
<b>Anexos</b> .....	61
<b>Anexo 1</b> .....	61

## Introducción.

Este documento está escrito en cinco secciones que corresponden a los acuerdos establecidos para la ejecución de una consultoría que aplicará la metodología de análisis sobre conflictividades y capacidades de construcción de paz (CDA), en el departamento del Meta. En primer lugar, se presenta un resumen ejecutivo del análisis realizado. Luego se hace un recuento de los antecedentes, las causas estructurales, los impactos, las dinámicas, los escenarios y los actores de los conflictos. Al mismo tiempo se aborda la tarea de caracterizar el territorio, teniendo en cuenta los cinco componentes de la metodología (político, seguridad/justicia, social, económico y ambiental) y se precisan los indicadores más importantes. Como tercer componente, se propone un mapeo conceptual de los actores estratégicos del territorio y se valoran sus potencialidades para la construcción de paz. Esto supone, además, indagar por las intervenciones y las respuestas de estos actores a las situaciones de conflicto y construcción de paz. En cuarto lugar, se hace un balance de las situación y de las propuestas de los actores, señalando vacíos, discontinuidades y complementariedad para elaborar una serie de recomendaciones de intervención. Finalmente se anexa la metodología seguida en los talleres y consultas regionales.

La metodología CDA se aplicó durante un mes de trabajo intenso, a través de la lectura y análisis de estudios, investigaciones e información del departamento en los últimos treinta años. Además, se acudió a mecanismos participativos (talleres, entrevistas, recorridos, conversaciones, consultas) con algunos de los principales actores sociales e institucionales.

En Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, La Macarena y Puerto Rico se realizó el trabajo de campo. En sentido complementario, fue clave la experiencia y las publicaciones precedentes<sup>1</sup> del investigador encargado de la consultoría. De forma rápida pero documentada se hizo, además, una mirada a propuestas de desarrollo y paz, a partir de las cuales, como se mencionó, se sugieren algunas recomendaciones.

<sup>1</sup> El Ariari, entre la integración y la violencia (2012) y Meta: entre la riqueza y el conflicto (2012a)





## Resumen ejecutivo.

El departamento del Meta tiene un pasado reciente como unidad político-administrativa. Su definición como departamento data apenas de 1959. Antes de esta fecha fue un conjunto de territorios con distintos grados de integración al centro del país. Villavicencio, su capital, fue un centro de acopio y de transporte de productos agrícolas que tenían como destino a Bogotá. Esta característica de disgregación territorial hace parte de su historia y ha condicionado su vida económica, social y política. El Piedemonte Llanero, los alrededores de Villavicencio, en una franja de territorio que se extiende bordeando la Cordillera Oriental, y las cercanías al nacimiento del río Meta (confluencia de los ríos Guatiquía, Guayuriba y Humea), han sido las microrregiones más integradas a las dinámicas del centro del país; tanto como epicentros de migración (empresarial y campesina) como puntos de despensa y de comunicación fluvial con el Llano adentro. Otras microrregiones se han debatido entre la integración y la violencia (Ariari, Duda-Guayabero) o se han visto marginadas (San Martín-Mapiripán).

Entonces, el Meta puede caracterizarse como un territorio fragmentado. Esta fragmentación alude a la forma misma como ocurrió su poblamiento, a la división partidista de sus municipios,

la violencia política y a los patrones de control Estatal que se impusieron. Aun hoy se percibe la huella de este pasado y se puede identificar como un elemento central dentro de la dinámica del conflicto armado y también como un componente básico de cualquier propuesta de desarrollo que pretenda afectar a zonas rurales marginales o vinculadas desde mucho tiempo a la producción de coca y de cocaína.

De esta forma, en el departamento se pueden identificar espacios con diversos grados y características de integración a la economía -nacional e internacional-, con dinámicas demográficas diferenciadas y con niveles desiguales de consolidación institucional, social y estatal. No es, entonces, un espacio homogéneo donde las interacciones económicas, la presencia gubernamental, las relaciones sociales y los puntos de encuentro entre ciudadanos y Estado estén conectados en una única red institucional formal que funcione sin distinciones cualitativas, relativas a los grupos e intereses colectivos que componen esta sociedad. De hecho la persistencia, en los últimos 30 años, de distintas formas de violencia, crimen organizado, conflicto armado y economía ilegal advierten sobre la validez de tales distinciones espaciales.

En reconocimiento de estas distinciones se acude a la delimitación de por lo menos seis microrregiones (agrupación de municipios) para la descripción y el análisis del conflicto armado, las tendencias del desarrollo territorial y las propuestas de paz. Es este un recurso metodológico que pretende facilitar la labor de establecer regularidades y caracterizaciones en los temas abordados. Por esta razón puede no coincidir con propuestas de planificación que parten de supuestos diferentes y aspiran a otros resultados. Además dicho recurso pretende acumular cerca de 30 años de historia en el territorio del Meta, aspecto que tampoco resulta fácil debido a los notables cambios de la sociedad, la economía y la política en el mismo periodo. Cabe resaltar que, desde 2002, la explotación de petróleo ha marcado un cambio sustancial en la configuración espacial en el Meta, municipios que antes se consideraban marginales (Puerto Gaitán, Uribe, Macarena) se han colocado en el centro del interés de inversionistas internacionales. Este hecho advierte sobre la aparición de nuevas delimitaciones dentro del territorio. Los intereses y actores en lucha han construido distintos y diferentes tipos de apropiación del espacio que, con el paso del tiempo, han dado paso a modelos de desarrollo, parcial o totalmente apoyados por el Estado.

La ocupación campesina ganadera y empresarial, antes incluso que gubernamental, se remonta a mediados del siglo XIX. Estas formas de apropiación de territorio han reñido por el acceso a la tierra y a otros recursos naturales. Tanto la empresarial como la gran propiedad ganadera, han predominado y tratado de marginar a las otras, la campesina o indígena (Le Grand C., 1988). Este hecho ha marcado el devenir de los conflictos y la edificación de la estructura social agraria en el Meta (Gutiérrez, O., 2012a).

Hoy en día, como se mencionó, se constata que el renglón agropecuario ha perdido peso frente a otras ramas de la actividad económica, y la minería alcanza un lugar importante seguida de la manufactura, la construcción, el turismo y el comercio. Esto recalca la importancia de Villavicencio en la economía del departamento (Gutiérrez, O., 2012a). En el Piedemonte se concentraron las mayores actividades económicas, sociales, gubernamentales y políticas. Hacia el Sur y el Oriente, estas actividades disminuyen en intensidad pero se advierte también el empuje de la actividad minero-energética, a cargo de particulares (empresas extranjeras y contratistas nacionales). La estructura actual de la propiedad y el cambio físico y humano de los países rurales son buenos indicadores de estas tendencias.

Esta estructura rural ha variado significativamente en los últimos diez y es de carácter inequitativo. Apenas el 7,19% de las propiedades registradas por áreas entre 50 y 100 hectáreas y

el 3, 33% de las mayores de 100 hectáreas tienen uso agrícola. En contraste, el 80,61% y el 88,40% de los rangos respectivos tienen uso pecuario. Tan solo el 4,86% tiene uso agrícola frente a 86,11%, dedicado a actividades pecuarias (Gutiérrez, O., 2012a). El auge de la minería sin duda también ha introducido variaciones significativas en la propiedad y uso del suelo. Sobre estas variaciones se esperan todavía estudios, diagnósticos y recomendaciones de entidades especializadas<sup>2</sup> (Incofer, IGAC) que manejen información empírica actual.

Los grupos armados ilegales han encontrado en el Meta el territorio propicio para sus acciones armadas y el control de corredores estratégicos para el tránsito de armas, drogas y cobro de impuestos a comerciantes, productores y propietarios. Los antecedentes de esta injerencia están vinculados al proceso de colonización y los periodos de violencia en Colombia. Desde las guerrillas liberales de los años cincuenta, hasta la organización de las Farc-ep-ep en grandes estructuras militares, en la década de 1990, son sucesos que narran una historia profunda de relaciones de las guerrillas con los demás ámbitos del territorio metense. Las características topográficas de algunas microrregiones, la presencia de centros urbanos o su cercanía a otros de gran importancia y su historia de levantamientos armados dieron gran relevancia al Meta como territorio de concentración guerrillera.

Paradójicamente, estas mismas características sitúan al Meta como un escenario propicio para hablar de paz en la actual coyuntura política y generar alternativas que materialicen los avances que en este tema se puedan suscitar en la Mesa de Conversaciones en La Habana, sin perder de vista los alcances e impactos respecto a los intereses de otros actores del escenario político y militar del territorio.

De otra parte, los vínculos entre algunos políticos y grupos de paramilitares y narcotraficantes, en coyunturas y procesos electorales específicos, también han hecho parte de la historia de este territorio en los últimos 30 años. Esto sucede con mayor intensidad entre 1997 y 2005. Así, en los últimos diez años (2003-2013) el escenario político-electoral del Meta ha conocido transformaciones significativas, producto de estos vínculos y como consecuencia de la aparición de otros partidos. De hecho, los partidos y movimientos políticos han variado sus representaciones, dinámicas, estrategias y actuaciones en un contexto de conflicto armado y de cambios en las políticas de guerra y paz. Igualmente han readecuado sus nexos con nuevas o antiguas estructuras de poder económico y social (gremios de la producción, expresiones ciudadanas, empresas multinacionales, tendencias internacionales, países limítrofes etc.).

2 Son trabajo costosos y de manejo de información privilegiada.

También se ha vivido en el territorio un lento proceso de afianzamiento del poder Estatal. Y precisamente allí donde este afianzamiento es precario, aparecen fenómenos asociados a la ilegalidad y al conflicto armado. Sin embargo, no se debe olvidar que en estas zonas desprotegidas por el Estado vive una población civil con aspiraciones, sueños y esperanzas. Es esta población la que debe convertirse en objetivo y en actor principal de las políticas públicas que pretendan superar el conflicto armado. Una nueva visión sobre el territorio, su población y la institucionalidad instalada debe guiar estas políticas. Es una visión que está por construirse, dados los reiterados fracasos de planes y programas gubernamentales que subestiman las capacidades de los habitantes organizados en los municipios más pobres y afectados por la violencia.

Ciertamente, el conflicto armado y la violencia parecen focalizarse hoy en el territorio de algunos municipios del Meta. Es en éstos donde debe ponerse en práctica toda política de paz, no en los centros de poder político y administrativo de siempre (Villavicencio, Granada, San José del Guaviare, Florencia). De ahí precisamente el énfasis del trabajo de campo en la aplicación de la metodología CDA, que se realizó primero con un grupo de organizaciones sociales e instituciones en Villavicencio pero se trasladó luego a los municipios del área de Serranía de La Macarena (Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, La Macarena), principal escenario del conflicto armado en el Meta. Allí también se interactuó con comunidades, autoridades locales y funcionarios estatales.

Los cinco componentes de la metodología CDA (político, seguridad/justicia, social, económico y ambiental) examinados en el Meta requieren todavía de un trabajo arduo de caracterización. Lo que aquí se menciona es apenas un punto de partida y está inspirado en los avances institucionales ocurridos en el país desde 2010 o Aun antes, en la década de 1990. Estos avances, sin embargo, no se han puesto en marcha en la mayoría de los municipios del Meta. Están los casos de los Consejos Territoriales de Planeación, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Comités Municipales Ambientales o, más recientemente, los Comités Municipales de Atención a Población Desplazado o los Consejos Seccionales de Desarrollo Rural. También se da gran importancia al apoyo y visibilización de las organizaciones comunitarias que han dado prueba de haberse mantenido en el territorio, a pesar de la brutalidad del conflicto, las Juntas de Acción Comunal y Asojuntas, o de las propuestas organizativas que puján por un ordenamiento territorial acorde a los intereses y necesidades de las víctimas de la violencia y el conflicto (Mesa Humanitaria, Zonas de Reserva Campesina, etc.). Como se ve, un ineludible énfasis en temas rurales, que se debe, en gran medida, a las fuentes consultadas. Se advierte, sin embargo, la necesidad de explorar propuestas en problemáticas urbanas y ahondar el trabajo con jóvenes en los barrios.



# 1 Territorio, conflicto y actores.

En esta sección se lleva a cabo un breve recuento de los antecedentes, las causas estructurales, los impactos, las dinámicas, los escenarios y los actores de los conflictos, tal y como se mencionó en la introducción. También se aborda la caracterización del territorio a partir de los cinco componentes de la metodología (político, seguridad/justicia, social, económico y ambiental). Toda la información se sustenta en indicadores básicos.

## Territorio y sociedad

El departamento del Meta está compuesto por 29 municipios donde habitan 783.168 personas de los cuales el 72.92% (571.055) viven en las zonas urbanas y solo el 27.08% (212.113) se localizan en las zonas rurales. La composición familiar tiene un promedio de 3,90 personas por cada uno de los 179.624 hogares registrados por el censo DANE del año 2005. En Villavicencio se concentra el 48,5% de la población total, que a su vez aglomera el 1.83% de la población nacional y el 1,79% de la población urbana. Como puede verse, una población mayoritariamente “urbana” o por lo menos residente en las cabeceras municipales.

La población Metense muestra un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) similar al índice nacional que llega al 32,5% y que equivale a una población de 254.438 individuos en el departamento. La zona rural concentra la población más vulnerable, no solo por las causas atinentes al conflicto armado, sino también por el alto INBI que llega al 60,5%. Es decir, que en el Meta 128.291 personas campesinas viven su cotidianidad sin los bienes y servicios necesarios para resolver sus necesidades primarias y garantizar una vida digna. En el área urbana el INBI, como la constante en todas las urbes de Colombia, es más bajo, se sitúa en el 22,2%, pero representa un número de 126.884 personas con carencias, muy similar al registrado en las zonas rurales del Meta y superior por 6 quintiles a la media nacional que se ubica en 21,6%.

La crisis agraria que vive el campo Colombiano ha generado empobrecimiento y el abandono de las varias generaciones campesinas. Cientos de jóvenes no encuentran hoy oportunidad alguna en el sector agropecuario. La ausencia de una política pública campesina y de subsidios que permitan la competitividad de los mercados locales y regionales excluye a más de 60% de la población rural de la posibilidad de resolver sus principales necesidades (ver tabla 1).

**Las necesidades básicas insatisfechas en el Meta**

	NBI departamento	NBI Nacional (promedio ponderado)	Número de personas con NBI departamento	Número de personas con NBI nacional	Concentración de población con NBI con respecto a NBI nacional
<b>Total</b>	32,50%	32,50%	783.168	12.943.023	1,80%
<b>Subtotal urbano</b>	22,20%	21,60%	126.884	6.903.308	1,80%
<b>Subtotal Rural</b>	60,50%	63,10%	128.291	6.940.854	1,80%

Fuente: DANE, Censo 2005. Defensoría del Pueblo

El análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Colombia y el Meta en el periodo 2001 a 2005 muestra que los habitantes del departamento sufrieron, durante más de cinco años, alteraciones ocasionadas tanto por las acciones armadas y las violaciones a los Derechos Humanos como cambios estructurales, sociales y económicos, en sus condiciones generales de la vida. Así lo corroboran las cifras de los tres componentes del IDH: a) El Índice de Logro Educativo, relativo al nivel de acceso a la educación formal, la profesionalización y especialización de la demanda laboral y su relación con el acceso a los sistemas de oportunidades para escalar en el estatus social y el bienestar; b)

El índice de Esperanza de Vida que contempla el mejoramiento de las condiciones de vida, el acceso al agua potable, la cobertura en salud, la seguridad, el saneamiento sanitario, la calidad de los alimentos y el tiempo libre, mostrando el grado en que las sociedades pueden prolongar su existencia amenazada por otros aspectos del componente como el conflicto armado y la inseguridad; c) El Índice de Producto Interno Bruto, medida que expresa el valor de la producción de bienes y servicios en el departamento durante un tiempo determinado. La siguiente tabla 2 muestra los detalles del IDH del periodo mencionado:

**IDH por componentes Nacional y Departamental 2001-2005**

Depto.	Índice de Logro Educativo					Índice de Esperanza de Vida					Índice de PIB ajustado					IDH				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
Nacional	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	0,69	0,67	0,70	0,72	0,70	0,77	0,77	0,78	0,79	0,78
Meta	0,85	0,84	0,86	0,84	0,86	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72	0,71	0,69	0,71	0,74	0,71	0,75	0,74	0,76	0,77	0,76

Como se ve, el componente educativo en el Meta tuvo su índice más bajo en los años 2002 y 2004 cuando llegó a 0,84, similar al índice nacional en los años 2001 y 2002. El índice de esperanza de vida también llegó a su nivel más bajo en los años 2001 y 2002, con el 0.71, en ambos años para el Meta, y de 0.78 en el 2001, para el nivel nacional. Igualmente el índice del Producto Interno Bruto presentó una baja significativa en el año 2002, tanto en el país como en el Meta; en el primero llegó a 0,67 (subiendo al 0.70 en el 2005) y en el segundo alcanzó a 0,69 (nivelándose en el 2004 a 0,74). Aquí se sostiene que la contracción en las condiciones de vida que se presenta en los años 2001 y 2002 tiene claras relaciones con los ciclos de guerra y paz, el fin de las negociaciones del Caguán y el inicio de la política de seguridad del primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue también 2002 el año en que se disparan

los desplazamientos y homicidios en el Meta, lo que afectó los componentes educativos, la esperanza de vida y el valor del PIB en el Meta.

La población más vulnerable ha mostrado una tendencia pendular que, por momentos, traspasa la delgada línea que separa a la pobreza y la indigencia. En el año 2002, la línea de pobreza fue de 47,9% y una línea de indigencia de 15,5%, en una población total de 729.023 habitantes, la más alta en la primera mitad de la década del 2000. La pobreza y la indigencia inician un leve descenso en el año 2003 que llevo a que el 12.4% de los 743.596 habitantes vivieran en la indigencia y el 44.3% viviera en la pobreza. Para el 2004 estos indicadores marcaron el 11.2% y 42,5%, respectivamente. En 2005 la indigencia ascendió al 12,2% y la pobreza al 44,8% del total de población (ver tabla 3).



**Población bajo líneas de Pobreza e Indigencia (%)  
Departamental. 2002-2005**

Departamento	2002			2003			2004			2005		
	Población	% LI	%LP	Población	% LI	%LP	Población	% LI	%LP	Población	% LI	%LP
Meta	729.023	15,5	47,9	743.596	12,4	44,3	758.315	11,2	42,5	771.863	12,2	44,8

Fuente Dane

Se supone que el estado de vulnerabilidad de amplios sectores sociales debería desatar procesos de movilización, acción colectiva y activación comunitaria para la exigibilidad de derechos y la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas a través de la ayuda mutua, la cooperación y la organización social. Puede decirse que ciertamente en muchos territorios del Meta los procesos organizativos se han convertido en la garantía de los derechos humanos, el desarrollo económico, la esperanza de vida, el acceso a la educación y la participación política. En el Meta la vida social y organizativa conforma un mapa significativo en sus dinámicas comunitarias, sus procesos, iniciativas y respuestas frente a los conflictos estructurales de la realidad social y las posibilidades de lograr la paz en la nueva coyuntura de negociación.

**Las microrregiones<sup>3</sup>**

Los acontecimientos de orden social que tiene lugar en el departamento, entre 1985 y 1996, originaron un mapa “geopolítico” (ver mapa 1). De acuerdo con un análisis anterior (Gutiérrez, O., 2012), se ensaya esta territorialización (ver tabla 4):

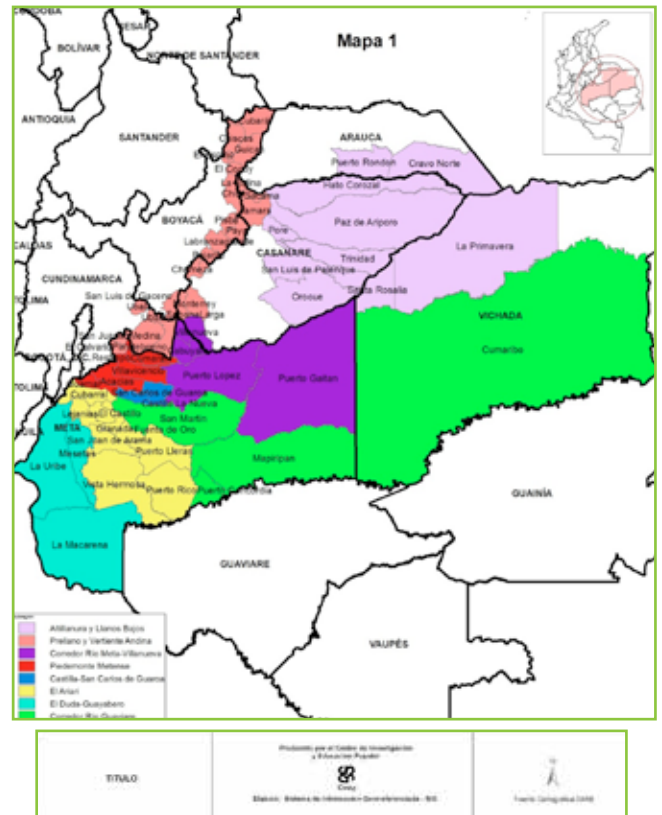
Microrregión	Municipios
Piedemonte Metense	Villavicencio, Acacias, Cumaral, Guamaral y Restrepo
Prellano y Vertiente Andina	El Calvario y San Juanito
Meta Petrolero	Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa
Corredor Río Meta	Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto Gaitán, Puerto López y Villanueva (Casanare)
Río Ariari	Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Lejanías, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa
Duba-Guayabero	Mesetas, La Macarena y Uribe
Corredor Río Guaviare	Mapiripán, Puerto Concordia, San Martín y Cumaribo (Vichada)

Fuente: ODECOFI. 2007.

3 Inicialmente, esta propuesta de división territorial fue hecha por el autor para un proyecto de investigación en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Ver: *Conflicto y territorio en el Oriente Colombiano*, Varios autores, CINEP, 2012.

Es importante señalar que la división territorial ha sido dinámica y ha dependido de factores como: el poblamiento rural, la influencia y filiación partidista, la presencia diferenciada o estratégica del Estado, el origen y sentido de expansión de los grupos armados, la geografía natural y el paisaje económico. La delimitación se debe a los efectos del conflicto y la violencia (Gutiérrez, O., 2012).

**Mapa 1  
Microrregiones Oriente Colombiano**



Esta agrupación de municipios permite localizar los eventos de conflicto y violencia de una manera más precisa en el territorio debido a que, por años, algunos municipios no registran ningún hecho o cuando éstos ocurren la referencia que de ellos encontramos no es siempre precisa. La clasificación sugerida contribuye también a relacionar tiempos (años) y espacios (microrregiones).

### Economía y conflicto<sup>4</sup>

El Meta ha sido un territorio de colonización campesina y su ocupación productiva se remonta a mediados del siglo XIX. Las diferentes formas de colonización han reñido por el acceso a la tierra y a otros recursos naturales. No han pervivido en armoniosa integración, una, la empresarial o la gran propiedad ganadera, ha predominado o tratado de marginar a la otra, la campesina o indígena. De hecho, buena parte de las tierras más fértiles del Piedemonte quedaron en manos de los “empresarios territoriales” y terratenientes, ya fuera mediante argucias de ellos mismos frente las disposiciones legales, a través de decisiones del Estado o los gobiernos locales de turno, por procedimientos de compra-venta en condiciones de desventaja (asimetría) para una de las partes o por las limitaciones de recursos (capital, tecnología, crédito, trabajo) de los pequeños productores (Le Grand C., 1988). Este hecho ha marcado el devenir de los conflictos y la edificación de la estructura social agraria en el Meta (Gutiérrez, O., 2012b).

De alguna forma, la incompatibilidad social y económica entre los modelos de gran propiedad, “empresarial” y campesino de desarrollo marca el eje central del conflicto en este territorio. A la misma característica se agregan las disputas por la tierra entre colonos “blancos” y comunidades indígenas en el extremo oriental (microrregión del Río Meta) o sur (Duda-Guayabero). Se puede ver aquí una disputa social por el acceso a los recursos naturales y de producción. Entonces hay una oposición histórica entre colonos y campesinos, decididos a mantener su independencia y los terratenientes dependientes de la fuerza de trabajo y de las tierras de los pequeños propietarios. En síntesis, a la disputa social por recursos, en ocasiones brutal, se agregó un conjunto de leyes e instituciones gubernamentales que, en distintos momentos y grado, determinaron o condicionaron las variantes que asumían tales disputas, lo mismo que las tácticas y alianzas de cada sector en su lucha por la tierra u otros recursos (Gutiérrez, O., 2012b).

El paisaje productivo cambia según el medio natural. En ciertas zonas del Ariari, el avance de la colonización campesina logró el establecimiento de la gran propiedad ganadera o agro-industrial o agro-comercial. Las familias originalmente establecidas no podían estabilizar sus nexos con la tierra o las economías de mercado local y regional. La tendencia se intensifica en lugares apartados y rurales donde el cultivo de coca frena la descomposición de la colonización campesina y suministra un excedente acumulable a cientos de familias (Gutiérrez, O., 2012b).

<sup>4</sup> Esta sección está basada en el texto: Meta: entre la riqueza y el conflicto, en: Regiones en Conflicto, Cuadernos del Informe de Desarrollo Humano, 2011. Bogotá. Se cita como: Gutiérrez, O., 2012b

Entre tanto, en algunos puntos del Piedemonte o de la Serranía de la Macarena la economía campesina independiente, aunque un tanto aislada, parecía remarcar su importancia en la producción de alimentos y de otros productos comercializables (frutas, café, cacao). En estos mismos lugares la producción de coca o amapola no prospera. El latifundio y la ganadería tradicional se imponen en otras zonas alejadas de tierras menos fértiles y pobladas. Entonces por segmentos territoriales se perciben distintos modelos de estructura agraria: colonización campesina trashumante; capitalismo (agro-industrial, agro-comercial); latifundio ganadero tradicional y economía campesina de relativa estabilidad e integración. Desde el 2000 la actividad minera, en especial hidrocarburos (petróleo y gas), ha tomado importancia. Esta actividad se centra, hasta 2002, en municipios como Villavicencio, Castilla La Nueva, Acacias y Puerto Gaitán; y luego se expande a otros, Cumaral, Puerto López, San Martín (Gutiérrez, O., 2012b).

El sector agropecuario pierde peso frente a otras ramas de la actividad económica y la minería alcanza un lugar importante, seguida de la manufactura, la construcción, el turismo y el comercio. Esto recalca la importancia de Villavicencio y su zona de influencia directa en la economía legal del departamento (Gutiérrez, O., 2012b).

Pero en el Meta es perceptible que el problema de la tierra está ligado a las particularidades de la fragmentación del dominio que el Estado ejerce sobre el territorio. El paisaje económico y social que se observa en el campo fue repujado por los actores armados más que por las decisiones de política gubernamental. Sobre el piedemonte, cerca de Villavicencio y Granada se concentraron las mayores actividades económicas del departamento y se asentó la mayoría de la población. En el piedemonte y en el río Meta nacieron núcleos importantes de actividad agro-industrial y financiera, integración vial, crecimiento urbano, dotación de servicios públicos, presencia del Estado, dinámica comercial y de servicios, agrupación político-electoral, dotación de recursos naturales, acción de la justicia y vigilancia policial y militar (Gutiérrez, O., 2012b).

Hacia el Oriente y Sur-Occidente, la densidad demográfica disminuía y los ejes de propagación de la ocupación eran las cuencas hidrográficas y el curso de los ríos más caudalosos. Esto sucedió sobre el Ariari, el Manacacías, el Guayabero, el Duda, el Güejar y el Guaviare, territorios que escaparon durante largo tiempo al control de los representantes del Gobierno central y fueron asiento de comunidades indígenas y de núcleos de colonos. Con suelos de menor fertilidad para la agricultura pero de notable biodiversidad, adolecen hasta hoy de modelos racionales de explotación de recursos naturales (basados en la

aplicación de procesos científicos y tecnológicos), poblamiento (democráticos e incluyentes) y gobierno civil (donde gobernantes y gobernados constituyan comunidades políticas amparadas en modernos referentes constitucionales, legales, de participación y comunicación) (Gutiérrez, O., 2012b).

Entonces, mientras que las élites del departamento y la creciente población urbana se han orientado a las zonas de mayor integración al mercado y a la vida política nacional, en los territorios de frontera la población rural ha estado un tanto dispersa y desprendida del influjo oficial. De otra parte, en este departamento las formas organizativas y las movilizaciones de colonos y campesinos tuvieron un rápido auge durante los años 70 (por influencia de la ANUC) pero la violencia de los años ochenta desarticuló buena parte de lo construido. En años posteriores, las exigencias de estos sectores frente al Estado central han girado, casi siempre, en torno a las exigencias de asistencia técnica, créditos, carreteras, obras de infraestructura, escuelas, puestos de salud, etc., y no tanto en el acceso y propiedad de la tierra, en oposición a las pretensiones de grandes propietarios o “empresarios territoriales”. Por último, desde la década de 1970, la influencia de los grupos armados irregulares en el ordenamiento descrito ha sido variada: muy fuerte en el caso de los paramilitares en algunos municipios (San Martín, Cubarral, El Dorado, Puerto López, Granada), muy débil o sectorizada por las guerrillas, en zonas distantes de otros municipios (Uribe, Mesetas, Puerto Rico, La Macarena, Vista Hermosa), en especial, zonas productoras de coca (Gutiérrez, O., 2012b).

La estructura actual de la propiedad rural es un buen indicador de las tendencias históricas descritas. Sin duda, muestra que el modelo imperante favorece a la gran propiedad, pero al mismo tiempo, en algunos casos, cuestiona su eficiencia productiva y su genuino carácter de empresas capitalistas. La observación de campo ratifica lo anterior y subraya cierta tendencia a la propagación de los cultivos permanentes (palma de aceite, cacao, caucho, yuca, caña), bajo la figura del monocultivo sobre las mejores tierras (Gutiérrez, O., 2012b).

Según el IGAC, hay gran concentración de la propiedad rural<sup>5</sup>. La estructura a lo largo de los años ha variado muy poco y es de carácter inequitativo. Apenas el 7,19% de las propiedades registradas por áreas entre 50 y 100 hectáreas y el 3,33% de las mayores de 100 hectáreas tienen uso agrícola; en contraste, el 80,61% y el 88,40% de los rangos respectivos tienen uso

pecuario (con frecuencia ganadería extensiva). Con todo, apenas el 4,86% tiene uso agrícola frente a 86,11%, dedicado a actividades pecuarias (Gutiérrez, O., 2012b).

Desde otro punto de vista, el Meta tiene solo 51 años de creación oficial. Es por eso que se ha vivido un lento proceso de afianzamiento del poder Estatal. Todavía hoy la integración espacial y económica de territorios y la centralización o la modernización del control político en los municipios creados en zonas de colonización interna son asuntos de primer orden (Gutiérrez O., 2004). Frente a este panorama el Estado central ha encontrado aliados o detractores según el momento histórico. En las zonas de frontera del Meta han existido distintos grados de apoyo o resistencia a la instauración del monopolio de la dominación y el ejercicio legal del poder del Estado, lo anterior es más perceptible en periodos de violencia. Al anterior panorama se han sumado la influencia de la violencia desatada por los grupos de narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares. El Estado ha actuado, algunas veces, por medio de la represión abierta a estos grupos o con los intentos de negociación e incorporación institucional. Esto último ha implicado el reconocimiento social y político de ciertas minorías en los ámbitos regionales y municipales (Gutiérrez, O., 2012b).

La historia política del Meta ilustra bien el proceso de instauración de la dominación del Estado central sobre grupos sociales al margen de su influencia y la incorporación de territorios de frontera a la vida económica y política de la Nación. Ha sido un proceso con altibajos, mediado por múltiples intereses particulares y donde la violencia ha sustituido muchas veces a los procedimientos democráticos y participativos (Gutiérrez, O., 2012b).

En zonas rurales del Meta, el periodo de colonización y producción campesina se reemplazó por el predominio agro-comercial y agro-industrial, a la que se le suma con fuerza, en la actualidad, la explotación minera (petróleo y gas). Así, se da continuidad a un ciclo de prosperidad económica y fiscal en la Orinoquia que completa casi 30 años. Una variable central que se agrega a la forma particular de configuración y construcción del Estado en el orden departamental y local; a la vida política y electoral y al conflicto armado, precisamente en el momento en que los paramilitares tomaban mayor visibilidad. Efectos que de alguna manera descentraban lo previsto en la Constitución y en las leyes para el manejo de las regalías, el pago de impuesto y la inversión social (p.j. generación de empleo y bienestar) en los municipios y departamentos productores. Este marco normativo prevé la destinación de los recursos petroleros al desarrollo territorial y social, pero la dinámica creada en los departamentos de la Orinoquia enfatizaba en la captura particular de rentas

5 Medido por el coeficiente de Gini que se establece por medio de una escala entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a “1” indica mayor concentración en la propiedad de la tierra.

## Meta: análisis de la conflictividades y construcción de paz

públicas, su desvío a objetivos distintos a la inversión social y la constitución de oscuros mecanismos fácticos y “carteles” de la contratación directa y la ejecución de contratos (Gutiérrez, O., 2012b).

Para 2002, el Meta era el tercer departamento productor de petróleo, después de Casanare y Arauca. Desde ese año, empresas multinacionales (Petrobras, Lukoil, Hupecoll), en contratos firmados con Ecopetrol, han realizado exploraciones en territorio de Castilla La Nueva, Barranca de Upía, Puerto López y Puerto Gaitán. En ese momento se calculaban las reservas de crudo probadas en 349.3 millones de barriles. Los municipios que recibían mayor beneficio por regalías eran Acacias, Castilla La Nueva, Puerto Gaitán y Villavicencio. Los recursos crecieron de manera considerable desde el 2000, momento que coincide con un periodo de gran violencia, escándalos (para-política) y crisis regional por las negociaciones con las Farc-ep. Es un mal momento y, por lo tanto, no sorprende que parte de las rentas fueran a parar a manos de jefes paramilitares a través de los mecanismos directos de contratación para obras civiles, los sistemas de salud o el pago de nóminas (Gutiérrez, O., 2012b).

Para el periodo 1995-2002, el sector agropecuario ocupa el primer lugar seguido de la minería. La destinación principal de los recursos parece dirigirse a la construcción y mejoramiento vial, recreación, deporte, cultura, etc. La destinación a la cobertura y la calidad de algunos servicios públicos básicos y sociales es más discutible (Gutiérrez, O., 2012b).

En los años siguientes (2003-2010), Meta se establece como productor de petróleo superando a otros departamentos de tradición como Casanare y Arauca (ver mapa 2). Llegan más empresas para la exploración y explotación, se incrementaron los campos hasta ser 39 y también aumentó el número de municipios que recibieron regalías por ese concepto (Gutiérrez, O., 2012b).

Actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura han perdido peso en los últimos años dentro del PIB departamental ante la minería y la construcción. Mientras las primeras son el 36% del PIB en 1994, las segundas son el 10,1% y el 4,7%, respectivamente, como se ve en la tabla 5.

### Participación Porcentual en el PIB por Ramas de Actividad Económica (Precios constantes de 1994)

Departamento del Meta/Año	Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca	Minería	Electricidad, Gas y Agua	Industria Manufacturera	Construcción	Comercio, Reparaciones, Restaurantes, Hoteles	Transporte, Comunicación, Almacenamiento	Servicios Financieros e Inmobiliarios	Servicios Sociales, Comunales y Personales
1994	35,8	10,1	1,3	4,7	4,7	9,6	10,7	6,5	14,3
1995	34,0	10,4	1,2	5,1	5,1	9,0	11,8	6,4	14,5
1996	35,7	12,2	1,4	4,7	5,0	8,3	7,8	6,6	16,0
1997	34,8	13,3	1,6	4,4	3,7	8,1	8,8	6,5	16,7
1998	32,0	15,1	1,8	4,6	3,3	8,4	8,9	7,1	17,6
1999	32,7	15,8	1,4	5,2	2,1	7,1	8,8	7,1	18,4
2000	35,6	13,8	1,0	4,9	3,1	7,3	7,6	6,9	18,0
2001	38,0	11,3	0,7	4,7	3,1	7,4	7,7	8,0	17,5

Fuente: DANE

En las dos últimas décadas, es evidente el cambio en la economía departamental. A 2013, teniendo en cuenta cifras preliminares, cerca del 70% del PIB corresponde a minería (petróleo y gas) y apenas el 5,5% a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Adicionalmente, sobresalen

actividades como la construcción, la hotelería, el comercio y los servicios inmobiliarios y se percibe el crecimiento urbanístico de Villavicencio y otros municipios, aumento en turismo, la diversificación del comercio y la diversificación en la oferta de servicios, como se aprecia en la tabla 6.

**Participación Porcentual en el PIB  
por Ramas de Actividad Económica  
(Precios constantes de 2000)  
Departamento del Meta**

Año	Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca	Minería (petróleo, gas)	Electricidad, Gas y Agua	Industria Manufacturera	Construcción	Comercio, Reparaciones, Restaurantes, hoteles Hoteles	Transporte, Comunicación, Almacenamiento	Servicios Financieros e Inmobiliarios	Servicios a Empresas	Administración Pública	Servicios de Enseñanza	Servicios Sociales, Comunales y Personales
2002*	17,4	20,4	1,1	7,2	3,2	12,3	6,9	6,0	2,8	9,8	3,9	5,0
2003*	18,5	18,8	1,1	7,4	3,8	12,8	7,0	6,3	3,0	8,3	3,9	5,1
2004*	18,1	18,2	1,5	6,5	4,2	13,0	6,8	6,6	3,4	9,0	4,6	4,9
2005*	17,4	17,5	1,3	6,3	6,6	12,7	7,1	6,4	3,7	8,3	4,1	5,2
2006*	15,5	16,9	1,1	6,3	9,5	13,0	7,4	6,2	3,6	8,2	4,1	5,1
2007**	11,8	32,2	2,1	5,4	8,9	8,9	6,6	7,7	6,5	3,3	3,1	
2008**	11,0	46,2	1,6	4,2	7,3	6,3	4,8	6,0	5,1	2,5	2,4	
2009**	10,9	46,5	1,4	3,6	8,5	6,0	4,7	5,9	5,2	2,4	2,4	
2010**	8,0	58,6	1,1	2,8	6,7	4,7	3,7	4,7	3,9	1,8	1,8	
2011**	6,2	69,2	0,8	1,9	5,6	3,4	2,5	3,3	2,8	1,2	1,3	
2012 p**	5,8	69,7	0,9	1,9	5,5	3,3	2,4	3,4	2,8	1,3	1,4	
2013 pr**	5,5	69,7	0,8	1,7	6,6	3,2	2,1	3,3	2,7	1,3	1,3	

Fuente: DANE

\*Precios constantes base 2.000

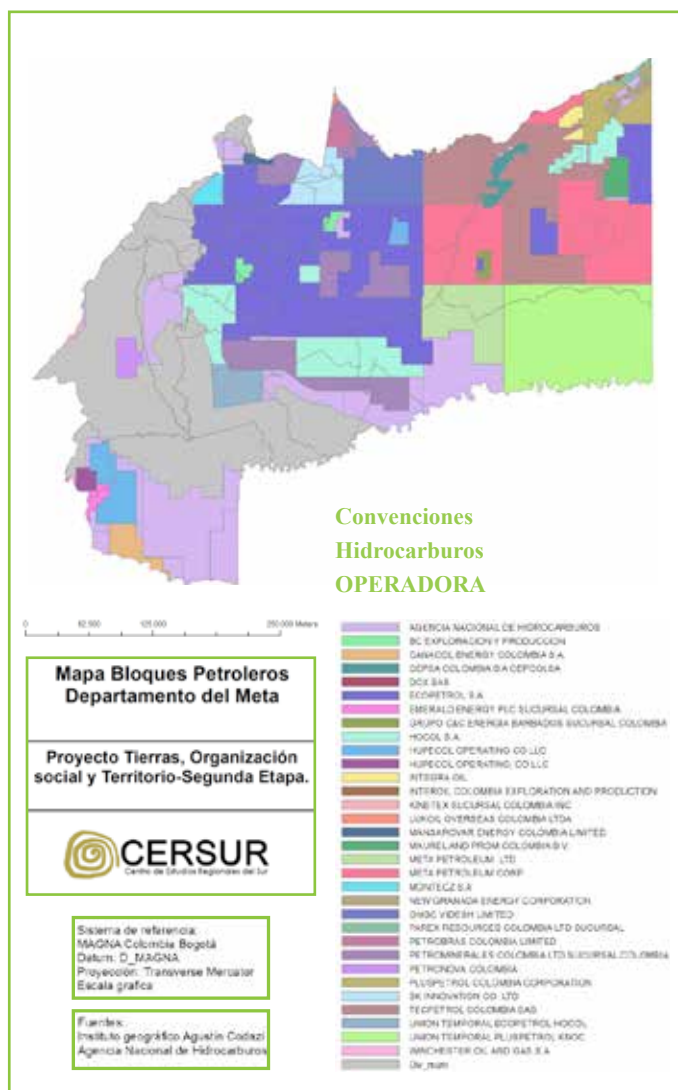
\*\* Precios corrientes base 2.005

El cuanto al desempeño fiscal de algunos municipios, se observa que no es muy adecuado para el manejo de las regalías. Desde el 2000, se han detectado grandes limitaciones en municipios como Acacias, Castilla La Nueva, Puerto Gaitán y Villavicencio, y en la Gobernación para dar cumplimiento a las normas que regulan dichos recursos. Las decisiones y compromisos políticos de

los gobiernos de turno parecen ser la guía en las destinaciones de los recursos, es decir, los criterios de manejo técnico en las administraciones han estado subordinados a las directrices de manejo político y de corto plazo de sus respectivos gobiernos. El petróleo ha logrado integrar a esta región al resto de la Nación (Gutiérrez, O., 2012b).



**Mapa 2**  
**Bloques Petroleros en el Meta**



**Distribución y Presupuesto de Regalías por Beneficiario (pesos corrientes) Departamento del Meta**

Beneficiario	Presupuesto 2013-2014	Distribución 2012
Gobernación de Meta	1.370.820.576.160	990.835.127.066
Villavicencio	15.587.563.774	12.807.227.579
Acacías	31.938.145.118	40.044.023.447
Barranca de Upía	2.211.912.844	4.088.736.864
Cabuyaro	13.294.893.677	12.812.093.302
Castilla la Nueva	26.595.368.687	25.166.853.203
Cubarral	1.007.273.033	430.913.364
Cumará	1.608.100.348	670.952.483
El Calvario	495.913.085	217.089.813
El Castillo	950.172.355	439.434.477
El Dorado	579.884.116	273.727.224
Fuente de Oro	1.605.031.670	687.214.650
Granada	3.392.671.669	1.372.122.612
Guamal	3.373.606.434	957.097.274
Mapiripán	2.409.524.942	1.071.342.301
Mesetas	1.809.053.775	842.869.303
La Macarena	3.946.290.089	1.672.224.177
Uribe	1.961.183.261	836.340.747
Lejanías	1.247.483.024	556.176.090
Puerto Concordia	2.781.789.048	1.219.479.801
Puerto Gaitán	144.238.337.867	106.376.142.499
Puerto López	3.907.962.382	3.153.289.425
Puerto Lleras	1.446.510.791	666.928.109
Puerto Rico	2.609.018.902	1.175.298.449
Restrepo	1.115.548.843	687.628.453
San Carlos de Guaroa	1.214.022.384	521.012.792
San Juan de Arama	1.197.361.278	537.892.146
San Juanito	576.730.343	252.298.606
San Martín	3.815.067.395	1.014.943.420
Vistahermosa	2.917.490.313	1.213.299.373

Fuente: DNP. 2014

Según el Presupuesto 2013- 2014 del Sistema General de Regalías, a la Gobernación del Meta se le asignan 1.37 billones de pesos, mientras que a Puerto Gaitán se le adjudican más de 144.238 millones de pesos y el 51,5% del total de los recursos (279.834 millones) se distribuyen en los 29 municipios. En 2012, el porcentaje del monto total (221.765 millones) recibido por Puerto Gaitán fue de 47,9%.

Entre 2013 y 2014, se destacan también por el monto de regalías recibidas municipios como otros municipios como Acacías (11,4%); Castilla La Nueva (9,5%); Villavicencio (5,6%); Cabuyaro (4,8%); Puerto López (1,4%); San Martín (1,4%); La Macarena (1,4%) Guamal (1,2%) y Granada (1,2%), como se observa en la tabla 7.

Es importante tener en cuenta que el auge de recursos públicos en muchos de los municipios del Meta, ante la explotación petróleo, el desarrollo de la industria, la agroindustria o los servicios, entre otros, tiene relación directa con el aumento de las reivindicaciones laborales, el malestar y las movilizaciones, lo que ha hecho que en los últimos años los conflictos laborales sean una nueva realidad del departamento, siendo Puerto Gaitán el símbolo de estos nuevos conflictos sociales entre trabajadores y empresarios del sector minero-energético y la demanda al



derecho al empleo, a la asociación y al ejercicio sindical. En estos conflictos los protagonistas y/o partes involucradas han sido los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Pacific Rubiales Energy.

Para la USO, en los campos de explotación petrolera de Puerto Gaitán de esta empresa hay una política “antisindical, de mano de obra barata, de tercerización, de bajos salarios, de jornadas de trabajo de más de 12 horas y de acoso laboral”, despidos masivos,

lo que ha provocado movilizaciones, huelgas en varias ocasiones (como la ocurrida entre julio y octubre de 2011 cuando cerca de 7.000 trabajadores se declararon en asamblea permanente en los campos de Rubiales y Quifa), pliegos de peticiones y, en algunos casos, represiones con el uso de la fuerza.

Adicionalmente a este conflicto es el impacto ambiental de la actividad de extracción en el medio, como lo denuncian habitantes de Acacías y Cubarral, quienes afirman con insistencia la contaminación de fuentes hídricas con petróleo, situación que genera mayor alerta ante el hecho de que aun la población consume agua de aljibes, quebradas y ríos que puede estar contaminada.

Si bien Puerto Gaitán es el modelo de los conflictos laborales, otros similares podrían presentarse en Acacías, Guamal, Cabuyaro, Puerto Rico y Vista Hermosa, donde también has denuncias, malestares y pronunciamientos ciudadanos.

### Espacio y conflicto: 1985-2002

Espacio y conflicto son variables básicas e interrelacionadas en este análisis. En especial, los municipios del Alto Ariari (Cubarral, El Dorado, El Castillo y Granada) han sido escenario de fuertes contiendas electorales y de violencia político-social. Los municipios del Medio Ariari (Lejanías, San Juan de Arama y Fuente de Oro), han sido atraídos por el auge económico del departamento en los últimos treinta años. El Bajo Ariari (Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa) vivió una situación distinta porque allí se instauraron los cultivos de coca y ocurrió un fuerte disputa entre grupos guerrilleros y paramilitares. Los municipios de la zona del Duba- Guayabero han conocido una situación similar, aunque tardía, desde 2002.

La violencia política, surgida luego de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep, en 1985, marcaría buena parte de la vida de estos municipios. En este contexto, El Ariari fue una zona de expansión para esta guerrilla, hasta mediados de los 90, mientras que el Duda-Guayabero fue su zona de refugio

estratégica, por lo menos hasta la implementación del Plan Patriota, en 2002 (Gutiérrez, O., 2012). Durante estos mismos años (1985-2002), en cercanías a Puerto López y Puerto Gaitán se fortalecieron los grupos paramilitares. En Villavicencio, en cambio, se respiraba una relativa calma, derivada de la presencia policial y militar, y sustentada en cierto crecimiento de las actividades económicas urbanas (construcción servicios, turismo, agro-industria, etc.). Aun así, desde 2003 se conoció una crisis de “gobernabilidad” a nivel departamental. Toda esta violencia fue atizada por las disputas entre narcotraficantes o “esmeralderos” y algunos frentes de las Farc-Ep. Estas disputas tuvieron diferente contenido, por periodos; unas veces más política, otras más económica y territorial.

La historia de la violencia y el conflicto reciente se remonta a las primeras reformas políticas del Estado durante los gobiernos de Betancourt y Barco (1982-1989) dado que abrieron escenarios de competencia por el poder político a nivel local y departamental que fueron intervenidas por el conflicto armado. La alianza entre la UP y la Farc-Ep en el Ariari fue vista como una amenaza que podía deshacer las ilusiones electorales de los candidatos liberales y conservadores. Lo anterior provocó que grupos con marcados intereses políticos y económicos crearan una fuerte resistencia (institucional y extra-institucional) para frenar la expansión electoral y militar de la guerrilla. Así surgen los primeros grupos paramilitares en cercanías de Puerto López y San Martín (Gutiérrez, O., 2012).

Otras dos variables entrelazadas son los territorios marginales (zonas de colonización) y la expansión de los cultivos de coca. Ciertamente, una economía ilegal basada en la siembra y procesamiento artesanal del alcaloide llevó a la estructuración de un ordenamiento territorial rural en donde los centros poblados alcanzaron un dinamismo, en ocasiones superior, a las cabecera municipales (Gutiérrez, O., 2012). Los recursos generados en las zonas productoras de coca atrajeron intereses muy variados (financieros, electorales, militares), algunos ilegales, otros relativamente integrados a la legalidad. Prueba de esto fue que buena parte de la economía de los municipios del Sur y Oriente del Meta, incluidas las finanzas públicas, se soportaba en una economía ilegal. Ninguna autoridad local o departamental negaba esta realidad. Aun así, en las épocas de mayor auge de esta economía (1996 y 2004) la extensión total de los cultivos de coca no sobrepasó las 12.000 hectáreas.

No obstante el aniquilamiento de la Unión Patriótica, la crisis recurrente del proceso de paz, hasta su rompimiento en 1989, y el crecimiento de los cultivos de coca, poco parecía cambiar en las zonas más distantes del Meta. Pero en 1996, el conflicto armado sufre un cambio, las Farc-Ep avanzan hacia los centros urbanos

más importantes de los Llanos Orientales (Villavicencio, San José del Guaviare, Granada) y del centro del país (Bogotá). Hasta 2002, año en que rompe el proceso de negociación entre el Secretariado de las Farc-Ep y el gobierno de Andrés Pastrana, la guerrilla lleva la iniciativa en el conflicto, a pesar de la entrada al territorio del Bloque Centauro de la AUC, hecho que ocurre en 1997.

### Política y conflicto: 1982- 1998

En el Meta, la violencia política tuvo un origen anterior al conflicto armado, por lo menos en el periodo analizado. Sectores de izquierda (Unión Nacional de Oposición, ANAPO Socialista, el Partido Comunista, Movimiento Liberal Independiente) habían alcanzado cierta figuración electoral en los años 70 en Villavicencio, San Martín, Puerto López, Granada, Puerto Lleras, El Castillo, Lejanías, San Juan de Arama, Mesetas, San Carlos de Guaroa. Si bien no era un caudal que pudiera disputar la hegemonía a los liberales o conservadores, aparecía como parte del escenario político y electoral del departamento. Además, la izquierda ganaba espacios institucionales y, por momentos, parecía alejarse del viejo esquema de violencia dominante a mediados del siglo XX. En este escenario, tal vez el hecho más sobresaliente fue su permanencia en la Asamblea del Meta entre 1970 y 1982.

Sin embargo, las cosas cambian hacia 1982. Las primeras bandas paramilitares ahuyentaron a la izquierda del centro del Meta y tendieron a marginarla en las zonas de colonización (Gutiérrez, O., 2012). Así, la violencia se expande de municipios como San Martín, Granada y Puerto López hacia otros más lejanos como El Castillo, San Juan de Arma y Vista Hermosa. Poco después, 1986, aparece la Unión Patriótica (UP) y se hace fuerte precisamente en los lugares más apartados del Meta. Por esta época eligió al senador Pedro Nel Jiménez y mantuvo un puesto en la Asamblea con Eusebio Prada Díaz. El asesinato del primero, el atentado contra el segundo y decena de hechos de sangre similares, entre 1986 y 1994, repercuten hondamente el proceso de negociación con las Farc-ep y en la historia política del departamento. Para este último año, la UP mantiene alguna presencia en municipios rurales del Alto y Bajo Ariari (Mesetas, Lejanía, El Castillo, Vista Hermosa).

El peso de la desaparición forzada de esta colectividad política en el posterior fortalecimiento de las Farc-ep en el Meta es un hecho por aclararse. Algunos de los futuros comandantes de las fueron militantes de la UP y alcanzaron a tener cierta figuración electoral a nivel local antes de alzarse en armas. Lo que vino después fue el intento de las élites políticas de silenciar este periodo de violencia. A mediados de los años noventa la UP

había desaparecido y el departamento pareció encaminarse por un sendero de crecimiento económico y de modernización administrativa y tecnocrática. Los partidos Liberal y Conservador, en sus diversos matices y coaliciones, siguieron turnándose los principales cargos políticos del Meta. Sus representantes aparecían en escenarios públicos abanderando grandes proyectos de inversión. La guerrilla parecía circunscrita a las zonas productoras de coca y su influencia política se consideraba mínima.

Eran impresiones un tanto engañosas. El Meta estaba dividido territorialmente en dos segmentos. Uno arriba del Ariari, donde gobernaba el Estado; otro al sur de este río donde la guerrilla controlaba la mayor parte de las actividades económicas y sociales de la población. Incluso, para estos años, 1995-1998, data la recordada ofensiva militar de las Farc-ep que se mantendría a todo lo largo del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). Con todo, el crecimiento de las Farc-ep estuvo acompañado de una relativa presión sobre la población civil; así intentaba “homogenizar” socialmente sus zonas de mayor influencia. Al mismo tiempo, el secuestro y extorsión alcanzaban niveles considerados escandalosos. En algún momento y con poco éxito, la guerrilla promueve paros y marchas en el Ariari. Con mayor acierto monta retenes o hace presencia en poblados durante días enteros. Los funcionarios públicos o concejales son víctimas de presión. En algunos municipios las Farc-ep atacaron a políticos liberales y conservadores sospechosos de apoyar a los paramilitares (Gutiérrez, O., 2012).

Se podía sostener que la lucha contra los carteles de la droga favorecía la expansión de las Farc-ep en el territorio y facilita su influencia en asuntos electorales y de destinación del gasto y la inversión pública en buena parte del Ariari y el Duda- Guayabero. Sin embargo, estaba a punto de visibilizarse una reactivación del narcotráfico, en consonancia con el arribo de otros grupos paramilitares con aspiraciones más definidas (Gutiérrez, O., 2012). Fue entonces cuando crecieron los rumores sobre la existencia de grandes cantidades de recursos para la compra de votos en el Meta. Todas estas interferencias sembraron las bases para una nueva ola de violencia y conflicto cuyo motivo sería el mismo: influir, alcanzar y mantener el poder regional. En 1997 ocurre la primera masacre en Mapiripán, perpetrada por las Autodefensas de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño (Gutiérrez, O., 2012).

Como se sabe, la incursión de las AUC a Mapiripán fue el inicio de una nueva fase de conflicto y violencia en el Meta. En esta acción actuaron como aliados antiguos paramilitares de San Martín y Puerto López, lideradas por Víctor Carranza; las autodefensas del Casanare, al mando de Héctor Buitrago y, como

se dijo, unidades al mando de Carlos Castaño. Los objetivos eran: 1) Militarmente debilitar a las Farc-ep; 2) Alejarlos de las capitales; 3) Aumentar su influencia en los gobiernos locales y departamentales; 4) Poner en marcha un modelo basado en la inversión agro-industrial y minera. Con todo, la alianza entre “paisas”, “urabeños” y “llaneros” tuvo altibajos y retrocesos. Con la brutalidad de las acciones contra la población civil, los paramilitares inauguraron una nueva forma de sentirse “empresarios”. Amasaron enormes fortunas personales que usaron para influir en las elecciones y en la contratación pública o para “invertir” en grandes proyectos productivos. Ejemplo de este actuar fueron Miguel Arroyave, Daniel Rendón, Manuel de Jesús Pirabán y Daniel (El loco) Barrera. Este actuar de los jefes paramilitares y sus vínculos con la “clase política” no eran nuevos en el departamento. Lo importante del fenómeno fue que los nuevos jefes tuvieron, en muy poco tiempo, más visibilidad que sus antecesores (Víctor Carranza, Gonzalo Rodríguez) y no jugaron un papel muy determinante en la lucha contra la guerrilla.

En la campaña electoral de 1997 ya eran perceptibles las interferencias de los grupos paramilitares, por lo menos a nivel municipal. Las Farc-ep también estaban empeñadas en obstaculizar dichos comicios. En estas circunstancias, lo eventuales sufragantes se sentían constreñidos. Aun así, los medios subestimaron esta situación. Paradójicamente, las listas de candidatos para Asamblea y concejo de aumentaron. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva contra el secretariado de las Farc-ep, denominada “Destructor”. La guerrilla responde causando grandes bajas y daños a unidades del Ejército y de la Policía.

Este año (1997) es elegido Alan Jara Urzola como gobernador. Su elección estuvo impulsada por el sector de Unidad Liberal Popular en el Meta y por el Movimiento Alianza para el Desarrollo del Meta. En los municipios más importantes, en términos electorales (Villavicencio, Granada y Acacias), la jornada electoral transcurrió en calma. El nuevo gobernador se propuso a “re-institucionalizar” el Meta colocando el poder civil por encima de los factores generadores de violencia y lanzó un novedoso programa de desarrollo social. El nuevo gobernador nombró alcaldes por decreto en los municipios donde la guerrilla impidió elecciones. Aun así, el Meta se sumió en una situación de ingobernabilidad que se prolongaría hasta 2006 (Gutiérrez, O., 2012).

En 1998 crecieron los rumores sobre los acuerdos entre integrantes de la policía y el ejército con grupos armados. Asesinatos y atentados afectaban a empresarios, comerciantes y propietarios. Diariamente había acciones de la guerrilla sobre

la carretera Villavicencio- Bogotá. Los paramilitares irrumpen en Puerto Alvira (Mapiripán) y perpetran una nueva masacre con apoyo aéreo. Sin embargo, proliferaron las listas para las elecciones de Cámara y Senado a celebrarse en marzo. Las Farc-ep propusieron diálogos regionales al gobernador mientras arremetían contra dichas elecciones. Representantes de diversas corrientes del liberalismo y el conservatismo alcanzaron las mayores votaciones para Cámara<sup>6</sup>. Ninguno de los candidatos del Meta al Senado alcanzó curul. Por esta época se visibiliza una franja de opinión que reclamaba la paz en la que sobresalían la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Trabajo por la Paz y Redepaz. Entonces se realiza la “Gran viacrucis por la paz” en pro de la paz y el gobernador reafirma su voluntad de hacer contacto con los alzados en armas (Gutiérrez, O., 2012).

Pero los acercamientos entre autoridades y guerrilleros en el Meta fueron lentos y débiles. Además estuvieron interferidos por grupos paramilitares. Las Farc-ep no quisieron negociar con el gobierno de Samper. Durante el último semestre del 1998 hubo una medición de fuerzas entre guerrilla y gobierno para crear una zona desmilitarizada. Esta situación se convirtió en el debate central de la campaña electoral que enfrentó Horacio Serpa y Andrés Pastrana. Éste último se adelantó y ofreció desmilitarizar una zona para realizar negociaciones con esta guerrilla. Ambos expresaron la disposición de negociar con las Farc-ep y el ELN pero ninguno habló sobre el tratamiento que se daría a los grupos paramilitares (Gutiérrez, O., 2012).

En este contexto, la creación de la zona de despeje en cuatro municipios del Sur-occidente del Meta fue un reconocimiento del gobierno al poder alcanzado por las Farc-ep. Este reconocimiento implicó negociar en medio de la guerra y pasar por alto la opinión de los habitantes de estos municipios. Estos dos hechos tendrían hondas repercusiones sociales y políticas en los años venideros dentro del departamento. Además, los alrededores de esta zona convirtieron en escenario de violencia y conflicto armado. Eran frecuentes las noticias sobre ejecuciones extrajudiciales e incursiones paramilitares. Dentro y fuera de ella, aumentó el desplazamiento de población civil. En algún momento, el tema no resuelto del paramilitarismo se convierte en un fuerte obstáculo al avance de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla (Gutiérrez, O., 2012).

### Conflicto, negociación y política: 1999-2002

Mientras el Gobierno y las Farc-ep negociaban en el Caguán, la política en el Meta se transformaba. Sucedió una recomposición

<sup>6</sup> La abstención alcanzó el 58,52%.

electoral en la que los narcotraficantes y paramilitares se beneficiaban. Frente la amenaza de la guerrilla, las alianzas entre políticos de trayectoria y paramilitares tomaban forma. El rumbo de las conversaciones por momentos se estancaba; las Farc-ep buscaban reconocimiento como ejército beligerante a través de mecanismos como el “canje de prisioneros”; la alusión a los cambios institucionales estructurales se diluían o se crían poco realistas en lo inmediato; la negociación en realidad no despegaba y el pretendido “laboratorio de paz” en la zona de despeje no cuaja. Al mismo tiempo, el Meta cambiaba su perfil económico: crecía la actividad minera; la industria manufacturera mostraba algún desempeño; la construcción era más dinámica; los servicios financieros se expandían y el turismo mostraba nuevas alternativas. La terminación de la moderna vía Villavicencio-Bogotá posibilitó nuevas inversiones, se dinamizó el mercado de tierras y aumentó el valor de las propiedades más cercanas a Villavicencio (Gutiérrez, O., 2012).

El Gobierno nacional estaba dispuesto a extender la vigencia de la zona desmilitarizada y a avanzar rápido hacia una desmovilización de la guerrilla. Para lo anterior, esperaba materializar un acuerdo político y jurídico con la dirigencia de las Farc-ep. La Gobernación del Meta alentaba una iniciativa de paz ciudadana en el Alto Ariari. Los alcaldes de El Castillo (UP), El Dorado (Conservador), Lejanías (Alianza Social Indígena) y Cubarral (Conservador) habían emprendido acercamientos que los llevaría a crear un proyecto de integración territorial y desarrollo bautizado como Asociación de Municipios del Alto Ariari (AMA).

Los funcionarios del alto gobierno promocionaban al Plan Colombia como parte de una nueva política de paz. El Plan de Desarrollo Departamental establecía como fundamental crear las condiciones de desarrollo que afianzaran la paz. Se esperaba entonces que la guerrilla levantara exigencias gruesas al Estado que incluyeran el manejo político-administrativo del territorio; el destino de los recursos de regalías, una reforma política, una reforma agraria, etc. En otras palabras, se podían descubrir diferentes percepciones e intereses políticos y sociales frente a la iniciativa del Gobierno nacional de adelantar la negociación con la guerrilla.

Durante los años que duraron las negociaciones de paz, la tensión más fuerte se vivió en el plano electoral. Las negociaciones de paz se convirtieron en una interferencia permanente para adelantar campañas políticas en cerca de medio departamento. A esto se sumó la persistencia de las acciones militares de las Farc-ep en los alrededores de la zona desmilitarizada, donde presumían que se concentraban algunos grupos paramilitares o comunidades cercanas a éstos. Las presiones económicas de la guerrilla sobre

los ganaderos provocaron el abandono de semovientes y tierras. Con esto último, la guerrilla buscaba forzar la salida de grandes propietarios de sus zonas de influencia. En los medios de comunicación se publicaron noticias de secuestro y extorsión; se acusó a los frentes de las Farc-ep de adelantar ejecuciones extrajudiciales. Mientras se tejía este entramado, en la mesa de negociaciones otros temas más complejos no avanzaban. Las acciones eficaces del Gobierno contra los grupos paramilitares no se concretaban. La guerrilla rehusaba discutir algunos puntos sobre Derecho de la Guerra mientras no se le reconociera como fuerza beligerante (Gutiérrez, O., 2012).

La misma indefinición sobre los acuerdos en los temas abordados y las reiteradas interrupciones de los diálogos, a lo cual se sobreponían “prórrogas” de la zona desmilitarizada, generaron un ambiente de impaciencia y negativismo sobre el proceso de paz con la guerrilla. Quienes manifestaban estas actitudes eran los sectores más pudientes y organizados del departamento, a lo que la prensa regional hacía eco. La negociación propiamente dicha no arrancaba. El Gobernador comenzó a ser blanco de numerosas críticas por supuesta indiferencia frente a lo que ocurría en esta parte del Meta. Lo anterior, según los críticos, consolidaba la presencia de la guerrilla en el sur del departamento; el despeje pasaba de ser algo transitorio a convertirse en un medio que facilitaba los objetivos estratégicos de esta guerrilla.

Durante los años de la negociación se mantuvo un ambiente de malestar político. Cada día nuevos elementos parecían desprestigiar la zona desmilitarizada. Las Farc-ep llevan a la mesa de negociación una agenda basada en reivindicaciones de carácter estructural pero sin decir nada de desmovilización y desarme. En opinión de algunos medios, la guerrilla llevaba la iniciativa sobre el gobierno civil, a través de controles más precisos sobre la población y su vida económica y social. Fuera de la zona y en sus alrededores, era evidente la vigilancia de las Fuerzas Armadas, apoyadas por asesores estadounidenses. Era clara la subordinación de las autoridades civiles de los municipios a las decisiones de la guerrilla, así como la internacionalización del conflicto armado. Los gobiernos departamental y nacional parecían maniobrar con dudas e imprecisiones. A los encuentros y el abordaje de los temas más complejos se sumaban los presagios de des-institucionalización y los anuncios de la aplicación de nuevas estrategias en la lucha contra-guerrillera. Por su parte, el Bloque Centauros de las AUC arreció la obstrucción económica contra los cinco municipios despejados; amenazó a productores y comerciantes; realizó atentados contra las redes de energía; mantuvo retenes en las proximidades de estos municipios y ejecutó civiles (Gutiérrez, O., 2012).



En este contexto se realizan nuevas elecciones en 2000. Sus resultados para la gobernación, las alcaldías y los concejos muestran los efectos de la vigencia de la *zona desmilitarizada*. En algunos municipios no se celebraron elecciones o tuvieron un calendario *atípico*. Esta vez la guerrilla no impidió los comicios para gobernación y concejos y “aprobó” la participación de ciertos candidatos para alcaldía. En Villavicencio fue elegido Omar López Robayo, quién sería asesinado pocos años después dentro de las disputas de la *parapolítica*. A la Gobernación fue elegido Luis Carlos Torres Rueda, liberal. Torres Rueda se convertiría en una figura central y controvertida de la política en el Meta en los años venideros. Los resultados electorales para Cámara mostraron un relativo repunte. En este momento ya era perceptible la presencia del Bloque Centauros de las AUC y su influencia en las elecciones.

Al comenzar 2001, el ambiente estaba aun más enrarecido en el Meta. Se comentaba del inicio de una contraofensiva contra las negociaciones, encabezada por los jefes paramilitares, en alianza con reconocidos políticos regionales. En este año se intensifican las llamadas *pescas milagrosas* en cercanías de Villavicencio. La autoridad del nuevo Gobernador se pone en entredicho. La negociación en la zona *despejada* y la violencia en sus alrededores estaban desestabilizando al departamento, el orden regional amenazaba con colapsar. Fue un año vivido bajo la incertidumbre y el temor respecto al rompimiento de las negociaciones. Los habitantes del Ariari dan por hecho la finalización del *despeje y ruegan a las Fuerzas Armadas no confundirlos con guerrilleros. El mayor temor lo generaban los paramilitares que merodeaban la zona. La Defensoría del Pueblo, las Parroquias, los Alcaldes y los Concejos crearon comités y representaciones civiles en los municipios para enfrentar los cambios que se avecinaban. Desde enero se vivió una situación de aislamiento aéreo y terrestre, también de desabastecimiento alimentario. La guerrilla comenzó una escalada de sabotaje y se enfrentó al Ejército en distintas zonas. Cuando el presidente Pastrana interrumpió la vigencia de la zona desmilitarizada (20 de febrero), ya en el Ariari y el Duda-Guayabero, se percibía el inicio de una nueva etapa del conflicto armado* (Gutiérrez, O., 2012).

La nueva etapa de conflicto generó el aumento del desplazamiento forzado. Desde 1997 se percibía un crecimiento de este fenómeno, como consecuencia de las incursiones paramilitares. Esta tendencia se mantuvo entre 1999 y 2001, como efecto de la creación de la zona desmilitarizada, y se disparó entre 2002 y 2007. Terminada la negociación, las Fuerzas Armadas avanzan lentamente sobre el territorio. Además, se mantiene la estigmatización a organizaciones y autoridades, en especial en las zonas más apartadas y rurales; son frecuentes las detenciones

masivas y sin pruebas, la ejecución de civiles no se detiene. Los bombardeos de la Fuerza Aérea ocurren en zonas pobladas, destruyen bienes y aterrorizan. La autoridad civil de alcaldes y gobernadores se subordina a las decisiones de la Política de Seguridad Democrática. Los grupos paramilitares penetran en antiguas zonas controladas por la guerrilla y aterrorizan. Aun más a la población. Por la misma época, el Ariari tuvo los primeros lugares en tasas de homicidio hectáreas en cultivos ilícitos y eventos por minas-antipersonales en todo el país. La población conoció la parte restrictiva del Estado; la guerrilla hacía una resistencia por todos los medios y sin precedentes al avance de las tropas (Gutiérrez, O., 2012). Al mismo tiempo, la oficina de Acción Social de la presidencia y la Gobernación anunciaban nuevos planes y programas (vivienda rural, subsidios educativos, ayudas a mujeres cabeza de familia, estímulos para erradicar cultivos de coca, etc.).

### La restauración del orden y la parapolítica: 2002-2006

Finalizada la zona desmilitarizada, el Meta parecía conocer una nueva etapa de crecimiento y prosperidad económica. Entonces se argumentó que el incremento de la presencia militar en sitios neurálgicos y en las cabeceras municipales era el sustento de este repunte. Las elecciones para Congreso, en marzo, y las presidenciales, en mayo de 2002, transcurrieron sin mayores contratiempos en los principales municipios. Aun así, en un vasto sector del departamento (Sur y Sur-Occidente) la situación continuó tensa. Las actividades económicas, las relaciones públicas, las comunicaciones a larga distancia y los vínculos políticos se recomponían con lentitud. En este sector las elecciones de ese año fueron poco concurridas, se votó tan solo en las cabeceras municipales. Con respecto a las elecciones se señalan dos hechos. Primero, la ratificación del Meta como un territorio “uribista”. Segundo, el ascenso de políticos de larga trayectoria en el departamento. Así, fueron elegidos a la Cámara de Representantes, Jorge Carmelo Pérez A. (liberal), Omar Armando Baquero S. (conservador) y Germán Velásquez S. (liberal). La votación para Senado favoreció a Germán Hernández Aguilera (liberal). Tanto liberales como conservadores parecían fortalecidos.

Sin embargo, el conflicto armado dividió nuevamente el territorio del Meta. Ocurrió una defensa de territorios y un renovado afán por influir en la población civil. Las Farc-ep no cedieron con facilidad frente al avance de las tropas del Gobierno. Todavía en 2005 las acciones conjuntas de la fuerza pública y los paramilitares en algunos municipios no habían debilitado la capacidad militar de los principales frentes de la guerrilla. La proliferación de cultivos de coca después de 2002 fue más un indicador de la intensidad del conflicto y el despliegue de tácticas

para influir en la población civil rural. Además de estimular el cultivo de coca y de incrementar el precio por el gramo de base, los paramilitares tuvieron en la mira a los alcaldes, los concejales y a los personeros municipales. Muchos de estos funcionarios y servidores públicos fueron amenazados por paramilitares y obligados a obedecer. Las presiones dividieron el territorio en el interior de los municipios, las cabeceras asemejaban islas muy custodiadas por los defensores del *orden central*. La guerrilla optó entonces por amenazar a las mismas autoridades. Las presiones de los paramilitares y la reacción indiscriminada de la guerrilla hicieron renunciar un buen número de alcaldes; éstos terminaron *despachando* desde Villavicencio o Bogotá y viajando ocasionalmente a sus municipios bajo estrictas medidas de seguridad. Se incrementan los homicidios y el desplazamiento de civiles durante una *retoma* del territorio que no fue solo obra de las Fuerzas Armadas. La guerrilla establece *restricciones* a la movilidad de civiles en zonas rurales y *prohíbe*, bajo pena de muerte, a los cultivadores de coca vender la *base* a emisarios de grupos paramilitares. Los habitantes recuerdan estos años (2002-2006) como un periodo de terror, pese a la mayor presencia de fuerza pública.

En 2003 entran nuevos partidos en escena (Movimiento Equipo Colombia, Oxígeno Verde, Movimiento Nacional, Movimiento Formamos Ciudadanos). El gobernador elegido, Edilberto Castro, representa a Cambio Radical. Sin embargo, en las elecciones de ese año destacan otros líderes como Euser Rondón (Movimiento Equipo Colombia). Se podría decir que hubo cierto cambio en la vida política del departamento que se vio empañado disputas violentas y alianzas por el poder entre facciones de la denominada clase política y grupos de paramilitares y narcotraficantes. Durante las elecciones para alcaldías y Asamblea se apreció también el relativo ascenso de estos u otros nuevos partidos; algunos antiguos políticos liberales o conservadores aparecían ahora encabezando estas colectividades. El fenómeno de figuración electoral de los nuevos partidos fue visible incluso en las elecciones para concejo en los municipios de inveterada presencia guerrillera. No obstante, parecía que, para aquél año, los candidatos de elección popular en los principales municipios del Meta requerían el aval del Bloque Centauros.

Incluso, el efecto paramilitar se mantuvo después de la desmovilización de algunas facciones. La entrega del grupo al mando de Vicente Castaño (2005) en zona rural de Yopal y la del grupo de Manuel Pirabán, alias “Jorge Pirata”, y Pedro Guerrero, alias “Cuchillo”, en Casibare (2006), no marcaron el final delictivo de todos los antiguos jefes paramilitares. En los años siguientes (2006-2010) uno de los capos emergentes resultó ser precisamente alias “Cuchillo”, otro sería Daniel “El Loco”

Barrera. Éstos mantuvieron alianzas temporales y se enfrentaron a alias “Don Mario”, y, se presume, estuvieron detrás de la muerte de Miguel Arroyabe (2004) y los dos atentados fallidos contra Víctor Carranza (2009 y 2010). Como se verá, para este último año, parecía existir una lucha de carteles en el Meta. En este escenario, la gobernabilidad se ha ido recuperando lentamente, hasta 2011 se celebran lecciones atípicas en distintos municipios y en el departamento.

Aun así, la influencia social, política y militar de la guerrilla era todavía fuerte. Su presencia armada es notoria en las zonas rurales y mantiene redes de apoyo en el Sur del Meta. Además sigue siendo un factor importante en procesos electorales. Las organizaciones sociales tampoco pueden apartarse de su interferencia. Con la muerte de “El Mono Jojoy”, en 2010, se desvía un poco esta influencia, pero en 2012 parece más intensa que tres años antes. Detrás de las cifras sobre reducción de ataques guerrilleros o muerte de sus integrantes; de los controles de la fuerza pública sobre la infraestructura regional o local; de la desarticulación de las bandas paramilitares y del crimen asociado al narcotráfico; de la reducción de la producción de base de coca y de la refinación y tráfico de cocaína etc. se esconden otras realidades más significativas en los planos político y social como es la evidente desconfianza o incredulidad de sectores de la población civil frente a algunas instituciones del Estado, en especial las Fuerzas Armadas. Sin importar lo avances de la política de consolidación, la población civil local continúa involucrada en el conflicto no solo por la acciones de la guerrilla sino por el comportamiento de funcionarios del Estado.

Además, la competencia por el poder político tiene un nuevo incentivo: la riqueza petrolera del Meta. Después de rotas las negociaciones de paz las perspectivas de explotación de hidrocarburos ha ido en ascenso; así lo muestra el comportamiento del PIB departamental. En estas circunstancias, los conflictos sociales y laborales se podrían vincular a las disputas entre grupos armados por acceder a los recursos generados por las regalías. La restitución de bienes a las víctimas del conflicto no es clara y han aflorado conflictos por propiedades rurales. Entre los habitantes de los municipios más apartados, los anuncios de una nueva bonanza económica suscitan inquietudes dado que se intuye tras de ellos, también, podría sobrevenir un nuevo periodo de violencia. En opinión de estos mismos habitantes el ciclo de la coca ha tocado su fin; no hay quién compre *la mercancía* que otrora se vendía en la misma entrada del fundo. La venta de base de coca arrojaba unos ingresos que, en parte, eran revertidos en el desarrollo local, a manera de sustituto a la inversión que dejaba de hacer el Estado. En este escenario se observa el nacimiento de nuevos liderazgos locales que aspiran a obtener la confianza comunitaria para acceder a concejos y



alcaldías. Con el agotamiento de un ciclo de violencia política, el conflicto armado pierde intensidad pero se vive todavía con dramatismo en algunas zonas del Meta.

### Seguridad y justicia en el Meta: 2002-2013

La seguridad humana se ha convertido para Colombia en el nodo principal de la política pública nacional, departamental y municipal como respuesta a los conflictos sociales que se manifiestan en una creciente violencia que se hace cada más difícil de controlar por los medios tradicionales. El discurso de la seguridad ha sido concebido desde la óptica del control y la eliminación de la amenaza, la erradicación de la ilegalidad o, en términos más críticos, de la oposición, lo que ha generado un paradigma político argumentado en la posibilidad de eliminar el enemigo y ganar la guerra a la insurgencia, los paramilitares y las bandas criminales. Su mejor representación o, por lo menos, la más radical fue la política de defensa y seguridad democrática (2002) y su continuación, la política de consolidación de la seguridad democrática (2007), que convirtió la estrategia de acción integral en Política Nacional de Consolidación Territorial. Este fue quizá el último movimiento en la estrategia de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez que logró convertir en política nacional su paradigma de seguridad. Sin embargo la elección de este paradigma implicó la emergencia de antiguos repertorios del control social propios de las estrategias contrainsurgentes que perciben a la sociedad civil como el aliado o enemigo en la guerra, ya sea a través de la vinculación a las redes de informantes y cooperantes o como redes de apoyo de la insurgencias en zonas de conflicto.

El departamento del Meta fue uno de los escenarios priorizados para la seguridad democrática, más exactamente fue el proyecto piloto de la política de seguridad con el Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) que comprende, hasta el 2013, los antiguos municipios de la zonas de distensión, mal llamados la retaguardia de las Farc-ep. Una mirada de larga duración muestra al Sur del Meta como un escenario sobre el cual la paz y la guerra se sitúan de acuerdo con los planes militares y antinarcóticos (Plan Colombia, Plan Patriota, PCIM) o los procesos de negociación y cese al fuego (La Uribe 1984, Caguán 1998, Habana 2011). En ciertas latitudes del departamento los conflictos por la tierra y el territorio han desatado confrontaciones violentas entre campesinos y terratenientes con ejércitos privados (incluso desde las legendarias historias caucheras y quineras de las haciendas Colombia y San Martín, hasta los relatos más recientes de los esmeralderos en armas que harían llamar “Carrancistas”). En otras regiones, como el interfluvio del Ariari – Güejar – Meta, la presencia de los grupos paramilitares y neo paramilitares generaron otras dinámicas que

pasaron de la extorsión, el control territorial, el narcotráfico y la contrainsurgencia hacia la cooptación de las estructuras del Estado a escala municipal y departamental, así como inhumanas formas de violación a los Derechos Humanos que cometieron contra las organizaciones sociales, los líderes de gremios y las juntas de acción comunal. Tal como se evidencia en líneas siguientes, el mapa de actores en general y armados en particular se fue reconfigurando de acuerdo con los ciclos de violencia y las correlaciones y confrontaciones de los grupos y la emergencia de las organizaciones sociales que no desaparecieron por los efectos de la guerra en la última década de la consolidación del Estado.

En la actualidad, el discurso de la seguridad ha dado giros significativos que han propiciado un proceso de paz, aunque existe la amenaza permanente de sectores que reiteran el regreso a la situación de conflicto, aceptando solo la tesis de la derrota, la rendición y entrega. Con todo, cada vez más se levanta más el entusiasmo de muchos actores por vivir en un país en paz. Muestra de ello son el sinnúmero de respuestas e iniciativas que han surgido en el tiempo de las negociaciones (2012-2014). Movilizaciones, foros, mesas de trabajo, constituyentes por la paz, cientos de propuestas enviadas desde todo el país a los negociadores de la Habana y el apoyo internacional manifiesto por los representantes de los países amigos son indicadores de un sentimiento que reclama un paradigma de la seguridad humana.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia rural, razones para la esperanza, publicado en el año 2011 por el PNUD, logró dar saltos importantes en una concepción de la seguridad humana que contempla aspectos estructurales como la igualdad, la reforma agraria, la distribución de la tierra, la vida digna, la pobreza y la defensa del territorio. Este informe se apoya en algunos análisis regionales que sugieren una pauta clara sobre el giro que deberían dar de las políticas públicas de seguridad ciudadana hacia los aspectos más humanos que originan la violencia. Desde esta perspectiva la educación, la longevidad, el nivel de vida según ingresos y el acceso a servicios, el enfoque de género, de derechos y territorial, se posicionaron como ejes nodales de la seguridad humana. En este marco de política, las estrategias de prevención, de reinserción social, los escenarios de concertación y la construcción de una cultura de paz se proyectan como las iniciativas que pueden contribuir a una realidad del posconflicto en el Meta.

La importancia de este giro en la mirada hacia la seguridad humana se revela cuando comprendemos las dimensiones de la crisis humanitaria que vive este departamento y reconocemos las iniciativas y respuestas de los actores que definen el rumbo de los conflictos, sus ciclos, enfoques de actuación y posibles soluciones en un nuevo contexto.

### Violencia política y actores armados

Los grupos armados ilegales han encontrado en el Meta el territorio propicio para sus acciones armadas y el control de corredores estratégicos para el tránsito de armas, drogas y cobro de impuestos a comerciantes, productores y propietarios.

Los antecedentes de los ejércitos en el Meta son de largo alcance y están vinculados a la historia de colonización y los procesos de guerra y paz en Colombia. Desde las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo y los armisticios del 53, la incursión de las guerrillas comunistas comandadas por “Richard” en el Alto Duda y Guayabero, la influencia de Juan de la Cruz Varela y sus guerrilleros en el límite del Sumapáz, que demarca a Cundinamarca y el Meta, pasando por las conferencias guerrilleras de las Farc-ep, acontecidas en la mayoría en los territorios del Sur del Meta, todos son sucesos que narran una historia profunda de relaciones de las guerrillas con los demás ámbitos del territorio metense. La consolidación de las Farc-ep como un aparato militar y sus planes de avanzar sobre los centros de poder, manteniendo su accionar en los campos colombianos, con posiciones estratégicas y movimientos de columnas, con amplia capacidad bélica, llevaron a considerar al Meta como lugar privilegiado de presencia. Las características topográficas de algunas microrregiones (Ariari, Duda y Guayabero), la presencia de centros urbanos o su cercanía a otros de gran importancia (Bogotá, Villavicencio, Neiva, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán) y su historia de levantamientos armados, dieron gran relevancia al Meta como territorio de concentración guerrillera. Paradójicamente, estas mismas características sitúan al Meta como un escenario propicio para hablar de paz en la actual coyuntura política y generar alternativas que materialicen los avances que en este tema se puedan suscitar desde la Habana, sin perder de vista los alcances e impactos respecto a los intereses de otros actores del escenario político y militar del territorio.

Como se ha mencionado, los grupos de autodefensas, paramilitares o ejércitos privados en el Meta tienen una profunda historia y capacidad de actuación política y militar desde los años 50 y, más tarde, en el decenio de 1970, con la creación de grupos para confrontar a guerrilleros y bandoleros en los municipios de San Martín, Granada, El Dorado, Cubarral y el Castillo. Estos últimos grupos fueron conformados por antiguos disidentes de las guerrillas liberales y militares, retirados y activos, del Ejército:

*“El comandante de la Guarnición Militar sería el jefe del campamento quien organizaría las actividades y la defensa. Se procedería a la*

*repartición de tierras y ganados abandonados, existentes en la región. Los colonos estarían obligados a efectuar bajo el mando del comandante militar operaciones de limpieza de bandoleros...”, decía el manual del coronel Sierra, según lo ha citado el proyecto Colombia Nunca Más, que es una iniciativa de 17 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales que buscan recuperar la memoria de las víctimas de la de violencia política”<sup>7</sup>*

En los años 80 se conoció la incursión de otros actores que crearon ejércitos privados y autodefensas: los esmeralderos, los narcotraficantes y los acaparadores de tierras. También se tuvo noticia de la llegada de otros grupos armados, denominados “Los Macetos”, que incursionaron hacia 1986, impulsadas por Henry Pérez, quien comandaba las autodefensas de Puerto Boyacá, y Gonzalo Rodríguez Gacha. Estos grupos actuaron en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales a través de operaciones contra líderes políticos de izquierda y de amenazas o señalamientos que propiciaron desplazamientos y contribuyeron a la concentración de tierras, a cargo de figuras como Víctor Carranza. Los territorios de San Martín y Puerto López fueron los primeros epicentros de este accionar que se expandió luego a El Castillo, Vista Hermosa, Acacias y Cabiona. Este último lugar, refugio y base paramilitar conocido como “Hato Cabiona”, donde Juan de Dios Toro, alias “Martín”, libró una guerra a muerte con los guerrilleros de las Farc-ep venidos desde el Vichada, en 1989, para expulsar los paramilitares y destruir la base. Por su parte, “Los Macetos” terminaron reducidos bajo el mando de José Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres”. Este individuo había pertenecido, en San Martín, a un grupo paramilitar comandado por Manuel de Jesús Piraban alias “Pirata” quien, a su vez, sería uno de los principales jefes del Bloque Centauros. En 1994, “Guillermo Torres” reagrupó, en Puerto Gaitán, a sus hombres bajo el apelativo de “Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada” (ACMV); sin embargo, éstos serían conocidos en el departamento como “Los Carranceros,” aunque nunca se logró probar legalmente la vinculación de Víctor Carranza con los paramilitares.

El mencionado Baldomero Linares, al mando de las ACMV, se desmovilizó con 209 combatientes, el 6 de agosto de 2005. Un mes después, el 3 de septiembre de 2005, se desmovilizó el Bloque Centauros, al mando de José Vicente Castaño Gil, con 1.135 combatientes que actuaron en el Casanare y Cundinamarca

7 Ver Verdad Abierta Así creció el paramilitarismo en los llanos orientales en: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/3056-asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales> consultada Dic/2013.

e incursionaron en el Norte del Meta. Los Frentes Héroes del Llano y Héroes del Guaviare, al mando de Manuel de Jesús Piraban y Pedro Olivero Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”, se desmovilizaron el 17 de abril de 2006, con 1.765 combatientes; tuvieron como centro de operaciones el municipio de Puerto Lleras. Alias “Cuchillo” continuó su carrera delictiva creando el denominado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC). Aunque éste último fue abatido por las autoridades en el año 2010, la estructura que creó continúa delinquiendo y librando varias guerras; desde el año 2006 con los denominados “Macacos”, por controlar los corredores estratégicos del Meta y el Vichada. Esta estructura, conocida también como “los Cuchillos”, organizó varias fracciones que en la actualidad ejercen control territorial y desatan operaciones contra la población civil; en especial, en la microrregión del Ariari (Puerto Lleras, Puerto Concordia y Mapiripán). Dos nuevas estructuras aparecen como disidencia del ERPAC tras la muerte de “Cuchillo”, el Bloque Meta que conforman la denominada “Resistencia del Llano” y “libertadores del Vichada”, al mando de Martín Farfán alias “Pijarbey”, quien sale de la cárcel en el año 2012 con el propósito de rearmarse para ocupar los corredores que conducen del Vichada al Caquetá.

Las bandas criminales (Bacrim) y/o los grupos neo paramilitares continúan ejerciendo la violencia y controlan territorios estratégicos para los narco cultivos y la agroindustria en el Meta. Este es el caso del corredor Vichada – Guaviare – Caquetá – Casanare, un escenario geoestratégico para todos los actores armados. La permanencia de estos grupos es, quizás, una de las principales amenazas en un contexto que puede ser favorable a la paz. La existencia de estructuras con profundas redes de poder político y criminal pueden repetir la historia de exterminio que se vivió por más de una década (1985 a 1996) con la Unión Patriótica. Aun así, los intereses de los ejércitos neo-paramilitares e insurgentes son políticamente diferenciables. Esto se evidencia con tan solo revisar los tipos de acuerdos firmados con el gobierno; de una parte, en el Caguán y la Habana, y, de otra, en Santa Fe Realito, Tierra Alta o Casanare. No obstante, los intereses económicos de ambos bandos son menos diferenciables; el cobro del gramaje, las extorsiones a comerciantes, el tránsito de drogas, armas, gasolina y víveres hacen que el control territorial sea una actividad lucrativa para todos los ejércitos. La ausencia de gobernabilidad oficial genera los escenarios propicios para este fenómeno.

En este orden de ideas, las redes criminales en el Meta son una expresión de la ilegalidad dentro de procesos históricos, imbricados en los conflictos contemporáneos a escala local, nacional e, incluso, internacional. De la misma forma, sus estructuras organizativas, repertorios, territorialidades y redes

de poder se han configurado a partir de dos tendencias generales. Una, que se constituye a partir de los proceso de configuración espacial de las ciudades, marcadas por el fenómeno de migración del campo a la ciudad; sus características principales fueron la exclusión y la desigualdad en la ocupación y redistribución del suelo urbano. Ciertamente, la falta de un Estado consolidado y sus frágiles administraciones departamentales y municipales fracasaron en la planificación de la urbanización, dando paso a extensas olas de ocupación informal y la ruptura de la frontera rural de municipios como Villavicencio, San Martín o Granada. Otra, en el seno de la informalidad, la marginalidad y la pobreza surgieron las expresiones delincuenciales que a nuestros días se presentan como peligrosas redes criminales de los centros de poder como Villavicencio.

Las diversas tipologías del delito, construidas por la historiografía criminal, muestran a la ciudad como escenario de la ilegalidad de los actores que fueron perfeccionando sus accionar: de “robagallinas” y “cuatrerros” pasaron a ser “escapistas”, “cosquilleros”, “contrabandistas”, “asaltantes”, “homicidas”, “extorsionistas”, “expendedores o jibaros”, “pandilleros”, “milicianos”, “paramilitares” y “bandas criminales”; entre otras muchas formas de pillaje y pandillismo propios de las ciudades marginales de América Latina. La constante en las urbes del Meta y de Colombia en general fue la generación de cordones de exclusión donde la ilegalidad y la ingobernabilidad propicio la conformación de bandas criminales.

En muchos casos, como el de Villavicencio, la configuración espacial del delito sobre las cuencas o caños que escurren agua desde la Cordillera Oriental hacia los ríos Guaitiquía y Ocoa, es una muestra del desarrollo de la ilegalidad en la marginalidad de la urbe como morada contemporánea. Los Caños en Villavicencio son territorios del delito, desde allí se conciertan todo tipo de ilegalidades, sirven como “ollas” de expendio de sustancias psicoactivas y puntos la comercialización de objetos robados, además de presentar un alto número de hurtos y homicidios. Entre las principales ollas se destacan cinco cuencas o caños de alta peligrosidad denominados: Caño Parrado, Caño Gramalote, Caño Maizaro, Caño la Cuerera y Caño Buque. Estos sitios muestran la relación de los espacios de la ilegalidad y el surgimiento de organizaciones y estructuras criminales que llevan décadas delinquiendo.

Desde la década de 2000 las bandas y pandillas existentes en Villavicencio, San Martín, Acacias y Granada fueron cooptadas por los grupos paramilitares, durante la “retoma” de los centros de poder económico y político en los Llanos Orientales. Son bien conocidos los casos de reclutamiento de jóvenes, asesinatos selectivos y la mal llamada “limpieza social”, utilizada por los

“Macacos”, el ERPAC, “Los Cuchillos” y todos los grupos armados ilegales, incluyendo la insurgencia, con el fin de ganar legitimidad y controlar el territorio. Así crearon la necesidad de seguridad privada y connivencia con los armados. En otras palabras, los espacios de la marginalidad y el delito sirvieron para la consolidación del proyecto paramilitar en el Meta y la generación de estructuras delictivas que operan como redes superpuestas en la actuación criminal que, por lo regular, se subordinan de acuerdo al “señor de la guerra” predominante, en cada periodo de la violencia paramilitar descrito anteriormente.

Ahora bien, la ubicación privilegiada de Villavicencio como eje entre los llanos y la cordillera ha servido para la generación de un corredor de armas, coca, actores armados y otros contrabandos que utilizan las rutas del Oriente, donde controlar el paso por la capital del Meta hacia el Distrito capital se convierte en un botín de guerra.

### Efectos del conflicto en la población civil: 1997-2013

Los efectos de estos procesos de violencia y de la consolidación de los actores ilegales son tan profundos que afectan de manera estructural la seguridad humana y el bienestar social. Entre estos se destacan los niveles de violencia e intolerancia así como las graves violaciones a los Derechos Humanos en un estado degenerativo de permanente vulnerabilidad de los sectores menos favorecidos y marginales del campo y la ciudad. Los homicidios en el Meta así como el desplazamiento forzado intermunicipal e interurbano coinciden con los ciclos de la violencia y las variaciones de los actores armados en las zonas rurales y centros poblados como puede percibirse en el cuadro que relaciona desde el año de 1997 al 2013 las cifras de desplazamientos individuales y masivos por recepción y expulsión, con las cifras de homicidios durante el mismo intervalo de años.

Las cifras de desplazamiento son elocuentes. En el transcurso de estos años (1997-2013) el departamento del Meta recibió 184.012 desplazados y expulsó 179.404 personas, así mismo registró 8.886 homicidios. Si observamos en detalle las cifras y consideramos las dinámicas del conflicto armado percatamos como en la época de consolidación del accionar paramilitar, que perduró hasta el 2005, con las primeras desmovilizaciones del Bloque centauros, aunado a el inicio de la política de consolidación y rehabilitación en 2002 y el fin de la zona de distención, se generó una tendencia de crecimiento del fenómeno, donde la recepción de desplazados pasa de 4.931 en 1999 a 17.017 en el 2002; la expulsión asciende de 5.997 en 1999 a 18.557 en 2002 y los asesinatos pasan de 359 a 591, en los mismos años. El 2002 fue en el Meta un tiempo de crisis humanitaria. A pesar de las denuncias e investigaciones en derechos humanos y de

las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales la crisis humanitaria en el Meta continuó su crecimiento con la puesta en marcha de la política de acción integral que avanzaba en su retoma del área de la Macarena. A partir del año 2005 y hasta 2008 las cifras de recepción y expulsión alcanzaron toques de 22.278 para expulsión y de 20.988, para recepción. En el caso de los homicidios, para el 2006 los homicidios alcanzaron la cifra de 730. Esta tendencia se mantuvo hasta 2009 cuando se logra un descenso gradual hasta 2013 (ver tabla 8).

### Desplazamiento y homicidio en el Meta

VIGENCIA	PERSONAS EXPULSADAS	PERSONAS RECIBIDAS	HOMICIDIO
1997	2.621	1.818	486
1998	4.871	5.143	417
1999	5.997	4.931	359
2000	8.334	10.596	333
2001	8.869	9.185	526
2002	18.557	17.017	591
2003	13.061	12.659	783
2004	12.932	13.514	706
2005	21.540	20.988	535
2006	22.278	18.865	730
2007	17.227	16.594	599
2008	14.612	16.560	584
2009	8.105	9.818	438
2010	5.770	7.084	430
2011	4.533	6.170	399
2012	4.846	6.842	217
2013	4.346	5.374	327
Sin información	33	107	

Fuente: Policía Nacional y Registro Único de víctimas

La vulneración de los derechos humanos en general es el primer indicador de la violencia y la seguridad en el Meta, allí se conjugan las realidades de la pobreza, la violencia política y el conflicto armado que afecta la vida civil e impiden las garantías de un Estado social de derecho, el desarrollo, la paz y la dignidad de los Metenses y sus aspiraciones de construir una sociedad democrática.

Los asesinatos selectivos son ocasionados por todos los actores armados –guerrilla, paramilitares, policía y ejército, entre otros– que se registran como desconocidos de acuerdo con los registros realizados por el CINEP en su banco de datos de derechos humanos y violencia política del CINEP, Justicia y paz, el comité permanente por la defensa de los derechos humanos CPDH y la revista Noche y Niebla, que afirman que de 1981 al año 2012 se han presentado 954 asesinatos selectivos en el Meta.



Los ataques a la población civil se presentaron en el Meta con mayor intensidad en los años de 1992, 1996, 1997, 1998; en esta década de 1991 a 2001 ocurrieron 37 ataques a centros poblados en medio de enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc-ep y el Ejército colombiano, según la misma fuente.

Los civiles muertos en acciones bélicas son otro indicador de las violaciones a los derechos humanos y al DIH en el Meta, donde se registran desde 1990 a 2011 un número de 102 muertes víctimas de acciones armadas y 40 civiles muertos en combates.

Las Víctimas de Masacre desde 1981 a 2012 reportan en el Meta 458 víctimas en 73 masacres, realizadas por grupos paramilitares en mayor medida, seguidos de la fuerza pública y la guerrilla de las Farc-ep.

Las víctimas civiles de municiones y artefactos de guerra sin explotar (MAP-MUSE), desde 1998 a 2013, registra 418 casos en el Meta y 663 de la Fuerza Pública, según la estadísticas oficiales. El conflicto armado, como se ha señalado, ha tenido un fuerte impacto en la población civil del departamento, situación que la ha puesto en riesgo, entre otras razones, ante la intensidad de las operaciones militares y los enfrentamientos de la guerrilla y las Fuerzas Armadas, especialmente en los municipios que registran mayores acciones y movilizaciones reclamando el respecto a los derechos humanos. Si la intensidad del conflicto se mide por el número de enfrentamientos armados se puede decir que dicha intensidad ha disminuido -especialmente en los municipios cercanos a Villavicencio (Cubarral, Restrepo, San Juanito, El Calvario, Acacias, etc.) - pero sigue siendo alta. Según estadísticas oficiales (Ministerio de Defensa) entre enero de 2006 y octubre de 2014 hubo 91 acciones bélicas por iniciativa de las Farc-ep, la mayoría en los municipios del Sur y Occidente del Meta y solo 3, en Villavicencio y Puerto Gaitán, como se observa en la tabla 9.

**Acciones Bélicas por Iniciativa de las Farc-ep  
Departamento del Meta**

Municipio	Acciones Bélicas
Uribe	18
Puerto Rico	17
Vista Hermosa	15
Mesetas	10
La Macarena	5
Puerto Concordia	5
Lejanías	4
Mapiripán	4
El Castillo	4

Puerto Lleras	3
Fuente de Oro	2
Puerto Gaitán	2
San Juan de Arama	1
Villavicencio	1
<b>Total</b>	<b>91</b>

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Con relación a las acciones bélicas que fueron por iniciativa de las Fuerzas Armadas se observa que es casi tres veces el contabilizado para la guerrilla, tal y como se evidencia en la tabla 10.

**Acciones Bélicas por Iniciativa de las Fuerzas Armadas  
(Microrregiones Ariari y Duda-Guayabero)  
Departamento del Meta**

Año	Acciones Bélicas
2002	30
2003	19
2004	9
2005	14
2006	20
2007	28
2008	31
2009	29
2010	32
2011	36
Total	248

Fuente: CERAC

Es claro que con el aumento del nivel de enfrentamientos armados se incrementa también el desplazamiento y los homicidios y la afectación a la población civil.

Frente a las crisis y situaciones de Derechos Humanos las organizaciones de la sociedad civil han desplegado toda una serie de estrategias para no sucumbir frente al estado de vulnerabilidad, la desaparición de sus líderes y desestructuración de sus procesos y proyectos de vida, sus iniciativas son auténticas propuestas de paz y convivencia que resurgen y crecen en la nueva coyuntura de movilización social y protesta campesina.

*“Debe anotarse que a pesar de todo este trabajo que se ha hecho en la región por las organizaciones sociales, las comunidades siguen*

*siendo estigmatizadas por lo cual se producen las detenciones masivas, los montajes judiciales, los falsos positivos, las falsas capturas; entonces es una situación muy delicada la que se está viviendo en estos territorios y porque no decirlo, en Colombia. Es Colombia la que está sufriendo con los millones de campesinos que se están desplazando. Villavicencio tiene más de 70 mil campesinos que se han desplazado de los campos hacia estas ciudades. Ahí podemos ver los sitios de hacinamiento que tiene Villavicencio. Es el caso de la Victoria, un sitio donde hay 1.377 familias abandonadas por el Estado, viviendo a la intemperie y esto ha producido una descomposición en la misma cabecera departamental. Esto es toda una problemática muy grave”<sup>8</sup>.*

### Mapa de actores regionales

Los Llanos Orientales han sido escenario de confluencia de distintos actores sociales, económicos y políticos, llegados de otras partes del país o del extranjero. La migración ha definido el rumbo de la historia de esta región natural. Una lectura de larga duración (200 años) permite ver que en el territorio de lo que hoy se conoce como departamento del Meta han coexistido modelos diferentes de ocupación, construcción y uso de espacios. El momento histórico, la tecnología, las capacidades (conocimiento, capital), el apoyo estatal, las circunstancias de paz o de guerra, los obstáculos físicos y naturales, etc., han condicionado y/o determinado el grado apropiación y administración del territorio. Así ocurrió desde la época de colonia con la incursión de las primeras expediciones y compañías que llegaron buscando “El Dorado”. Desde entonces ha predominado un modelo “extractivista” de recursos naturales y una lucha por tierras y espacios sociales y económicos y políticos. Los primeros productos fueron la quina, las pieles, exóticas especies de aves y mamíferos, la coca; hoy es el petróleo y el gas, y posiblemente vuelva ser el oro o, tal vez, el coltán. Desde la llegada masiva de campesinos al piedemonte, a principios del siglo XX, comenzó, también, un largo enfrentamiento por la tierra entre colonos y empresarios que fue atravesado luego por el conflicto armado. A esto se suma la concentración de población en Villavicencio, tendencia que da origen, a finales del mismo siglo, a un proceso de urbanización acelerado y escasamente planificado; jalonado por construcción de la nueva carretera a Bogotá. El conflicto armado, en su etapa más tardía (1997-2005), también afectó este

<sup>8</sup> Entrevista a Dirigente de MUCAPOC, Villavicencio – Meta, diciembre de 2013.

proceso de urbanización, creando, en barrios y zonas marginales, asentamientos de desplazados y distintas formas de criminalidad. La irrupción con fuerza de la actividad petrolera, desde 2002, ha cambiado el paisaje económico y demográfico de algunos municipios (Puerto Gaitán, Puerto López, Acacías, San Martín, Granada). Hoy en día persisten, en lo básico, los conflictos por la tierra, por el espacio y/o servicios urbanos, y de orden laboral; gestados hace largo tiempo en zonas rurales, surgidos durante el acelerado proceso de crecimiento de Villavicencio y otros municipios, u originados en el seno de las nuevas actividades económicas.

Las continuidades de algunos actores y la aparición de otros, en la medida que avanza los conflictos inherentes a la economía, el espacio, la riqueza, la política y la cultura, recrea en nuestros días un complejo mapa de actores que se superponen, cooperan, confrontan y capturan las redes y los territorios. Una lectura de estos actores regionales desde una perspectiva del poder, entendido como “*la capacidad para perseguir y alcanzar objetivos mediante el dominio del medio en el que se habita*”<sup>9</sup>, pueden ofrecer una imagen de la vida social y las estructuras de actuación pública de las organizaciones sociales, las instituciones oficiales y no gubernamentales y los gremios, instalados en el territorio.

Un análisis de los intereses, las actuaciones e intervenciones y las potencialidades de los actores debe concebir varios criterios que intervienen en sus procesos de configuración local y departamental. Un primer criterio es histórico y espacial. Éste evidencia la existencia de actores con intereses que se han ido configurando a partir de las continuidades y transformaciones que han tenido los mismos conflictos en que se han visto inmersos. En este sentido, las actuaciones de los actores están condicionadas por su capacidad de adaptación a las transformaciones estructurales y coyunturales que se puedan presentar en una realidad territorial, social, económica, cultural o política determinada. Estas adaptaciones inducen, además, nuevas identidades colectivas. Así, actores y conflictos son parte de una misma dinámica auto-transformadora, en escenarios y situaciones que objetivan dichos cambios. Un segundo criterio se sitúa en la percepción escalar del espacio-tiempo; es decir, la visión que considera las relaciones locales del actor y su tiempo. Este criterio considera a los actores como sujetos de poder que tienen como medios de actuación *la concentración territorial y la diplomacia geopolítica*.<sup>10</sup> El primero de estos medios se refiere al momento y la capacidad de concentrarse y organizarse

<sup>9</sup> Mann, Michael. Las fuentes del poder social I una historia del poder de los comienzos hasta 1760 d.c. Pág. 21

<sup>10</sup> Ibid.



cuando los objetivos sociales se persiguen reguladamente en un territorio de fronteras definidas. El segundo medio indica el carácter transnacional y geoestratégico del poder de los actores que tejen redes de actuación con otros actores inter-regionales, intermunicipales e internacionales. Un tercer criterio son los contextos que deben considerarse, con especial atención, en tiempos de negociaciones, guerra y paz. Éstos se constituyen a partir de dinámicas de corta, media y larga duración, desde donde emergen coyunturas que abren el sistema de oportunidades a los diferentes actores y se puede redefinir el rumbo de la historia por periodos indeterminados.

El anterior análisis de actores tiene una relación básica con el proceso de negociación del conflicto armado interno que ha tenido rupturas concretas en tiempos y espacios específicos. Desde La Uribe (1984) a La Habana (2013) los contextos (nacionales e internacionales) parecen ser favorables al fin del conflicto, sin embargo, la actuación de los actores (regionales y/o nacionales) han contravenido, en ocasiones, las oportunidades que en varios momentos han representado la posibilidad para el cese al fuego y la construcción de la paz en Colombia. Debe decirse que ciertos actores subterráneos, aquellos que en palabras de Clausewitz hacen parte del “establecimiento profundo” que emerge cuando los intereses dominantes se ven amenazados por otras alternativas de mundos posibles o por otros actores que detentan el poder en disputa. Es por esto que los criterios señalados arriba, en el análisis de actores, más que ser tipificaciones teóricas, se convierten en rasgos inherentes al conjunto de actores regionales que confluyen en el Meta que aparecen y desaparecen del escenario político en los contextos de guerra y paz, las coyunturas de negociación armada y la confrontación entre estilos de desarrollo que se superponen en un territorio común.

Desde esta perspectiva se identifican en el Meta tipos de actores con redes que actúan a escala municipal y regional, a partir de intereses concretos y posibilidades de actuación a favor o en contra de la paz en Colombia. Así es posible definir nodos de actores regionales tales como: instituciones oficiales, organizaciones sociales, gremios económicos, partidos y movimientos políticos, instituciones no oficiales. Todos ellos comparten los criterios anteriormente expuestos e interactúan desde la cooperación, la confrontación y/o la captura del poder. Vale la pena mencionar que desde todos los actores han surgido respuestas e intervenciones en los aspectos que consideran estructurales para lograr las transformaciones necesarias en el territorio, siempre a favor de sus intereses sectoriales, también como respuesta a la fragmentación política, social y cultural que ha marcado las relaciones de la historia de violencia en Colombia, dejando como efecto la imposibilidad de construir un

imaginario de Nación.

En este contexto, que intenta cerrar un ciclo que va de La Uribe a La Habana, deben contemplarse con detalle los diferentes tipos de respuestas que pueden potenciar un escenario de cese al fuego, paz y posconflicto. Allí es donde la sociedad colombiana mirará con valor todas las iniciativas que parecen anónimas, desinteresadas o incluso perseguidas por los intereses profundos del establecimiento, pero que en realidad, como la analogía de la hormiga, han estado construyendo las bases, las mesas, los comités, consejos, redes y encuentros que puedan dar una ruta para la construcción de paz desde el Meta y la Orinoquía para toda Colombia.

### Organizaciones sociales

Los últimos ocho años han sido una demostración del resurgimiento de la organización social y la movilización política en la mayoría de los municipios, vinculándose a las jornadas nacionales de protesta. En una escala más local adquieren gran dimensión los procesos sectoriales de mujeres, jóvenes, madres comunitarias, trabajadores, estudiantes y campesinos que promueven transformaciones de impacto veredal, municipal y regional, en áreas estructurales como la tierra, el desarrollo endógeno, la paz y la participación política. Es esta una representación dialógica de una sociedad que resurge hacia la participación política y al tiempo propone las transformaciones de los conflictos estructurales que originaron la guerra y coloca a la sociedad en el centro del debate sobre qué tipo de país podemos construir en una realidad del pos-conflicto.

El estado de vulnerabilidad de los sectores sociales desata procesos de movilización, acción colectiva y activación comunitaria para la exigibilidad de derechos y la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas a través de la ayuda mutua, la cooperación y la organización social. Puede decirse que en muchos territorios del Meta los procesos organizativos se han convertido en la garantía de los derechos humanos, el desarrollo económico, la esperanza de vida, el acceso a la educación y la participación política.

En el Meta la vida social y organizativa conforma un mapa significativo en sus dinámicas comunitarias, sus procesos, iniciativas y respuestas frente a los conflictos estructurales de la realidad social y las posibilidades de lograr la paz en la nueva coyuntura de negociación. La caracterización siguiente presenta una mirada histórica de los actores sociales departamentales y focaliza los casos de La Macarena y alrededor de la experiencia del PNUD como referente interpretativo del estado del tejido asociativo en el territorio que ha vivido sin descanso el conflicto

social y armado.

Ciertamente, las organizaciones sociales son el principal actor en los procesos de guerra y paz. Esta afirmación merece ser explicada. En primer lugar, los grupos armados han victimizado y re-victimizado a las organizaciones, dirigentes y comunidades que han vivido los efectos de la violencia en un conflicto irregular de larga duración. Los repertorios de estos grupos han sido direccionados especialmente sobre la población civil que carece de los medios bélicos y jurídicos para defenderse y, en muchas ocasiones, les han llevado a tomar partido frente uno u otro bando ya sea por protección, por venganza, por necesidad o por presión y fuerza. La elección de bando, además, no es definitiva, puede alternarse por periodos y territorios. En segundo lugar porque los casos de victimización colectiva y reparaciones a organizaciones sociales, por efectos atinentes al conflicto, están por cumplirse, en la medida que avanza la aplicación de la ley 1448 de 2011. En tercer lugar porque, contra todos los pronósticos, las organizaciones sociales en el Meta han sabido renovar sus repertorios de acción y sus formas de movilización, con el fin de disminuir el impacto de las acciones violentas, y los han convertido en iniciativas de paz. Los nuevos repertorios de las organizaciones sociales llevaron a micro localizar los procesos comunales, generar nuevas asociaciones de tipo productivo, especialmente agropecuarias y a generar escenarios de interlocución interinstitucional con fuertes contenidos jurídicos y humanitarios. Actualmente, frente a la coyuntura de los diálogos de paz en la Habana, entre la guerrilla y el Estado emergen, en el Meta, antiguos liderazgos y organizaciones sociales de base, redes intermunicipales, departamentales y regionales que durante casi una década (1997-2006) estuvieron sumergidos en pequeñas redes de organización veredal o en la reconstrucción de sus procesos organizativos que fueron casi extintos por la violencia.

Hoy se ve que el mapa de organizaciones sociales no está tan disminuido se creía, a consecuencia de la avanzada paramilitar antes, durante y después de la vigencia de la zona de distensión. Se puede afirmar, por el contrario, que las organizaciones sociales en el Meta sobrevivieron, amoldando sus repertorios a realidades más locales, menos protagónicas y ahora exigen un lugar en el eventual escenario de paz. Para comprender la dimensión de esta afirmación se debe reparar, por lo menos, en dos tipologías de organizaciones sociales en tres escalas de la realidad social y política vigente; a saber: las asociaciones comunales y las asociaciones productivas, ambas con relaciones y actuaciones en escalas veredas, municipal y regional. La gran mayoría de ellas cuentan con conexiones nacionales y transnacionales materializadas en redes, filiaciones y apoyos jurídicos, políticos y económicos, con redes y organismos de

cooperación que les han permitido subsistir y blindarse de la estigmatización y la impunidad.

En esta tipología, las asociaciones comunales están representadas, a su vez, en por lo menos tres expresiones organizativas que cumplen los criterios anteriores y que cuentan con una estructura administrativa definida, un repertorio de acción consensuado en asambleas de afiliados y delegados a órganos superiores a los que se encuentra afiliada cada organización. La primera expresión, a escala veredal, es la Junta de Acción Comunal, que en el decir de una de las fuentes consultadas en campo

*“Las JAC en este municipio son las que montan los alcaldes y si quisiéramos podríamos montar un presidente”<sup>11</sup>*

Como es de dominio público, desde la ley 19 de 1958 los municipios y veredas cuentan con la potestad para crear y fortalecer los procesos de JAC. De hecho las Juntas fueron las grandes promotoras de la fundación de pueblos e inspecciones en amplios territorios de reciente colonización en los Llanos Orientales. En el Meta, en la medida que se iba conformando un poblado y cumpliendo con el requisito del número de asociados, se iban conformando las JAC, quienes ejecutaron los planes y las obras para dar una vida digna a caseríos y municipios. En promedio un municipio del Meta cuenta con Juntas de Acción Comunal similares o mayores al número total de veredas. Con la agudización del conflicto armado y el fenómeno del desplazamiento y los asesinatos selectivos, realizados por paramilitares y agentes del Estado en el Meta, las JAC fueron las primeras organizaciones afectadas. De estas historias se tiene noticia en todo el departamento, donde testigos vieron caer, uno tras otro, a presidentes de JAC que sin reparos asumían el cargo después de haber sido violentado su antecesor.

Así, las JAC han sobrevivido a cinco décadas de violencia y de su valerosa apuesta surge otra expresión comunitaria que amerita ser caracterizada por considerarse escenario clave para la construcción de la paz. Se trata de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), que nace a finales de los años 80, con lo cual se da un salto cualitativo a los procesos participativos locales en un momento decisivo para la vida nacional. Ciertamente, la mayoría de Asojuntas se da en el marco de la constitución de 1991 y fue resultado de las anteriores negociaciones entre las Farc-ep y el Gobierno en “La Uribe”. Parta decirlo en pocas palabras, es una iniciativa institucional

11 Narración de presidente de junta de acción comunal. Vista Hermosa. 2013.

que logró generar un escenario municipal para el encuentro y la coordinación de las dirigencias comunales y preparó a éstas para la interlocución con los entes administrativos territoriales. Tal como ocurrido durante los primeros años de las JAC, las Asojuntas se convirtieron en grandes promotores del desarrollo comunal y social y, en muchos casos, en importantes aliados de las administraciones municipales; sin embargo, en otros casos fueron aparatos cooptados por las redes tradicionales de poder político que generaron un nuevo sistema burocrático que se ha venido a pique de su propio peso.

Como también de dominio público, las JAC y las Asojuntas cuentan con un órgano nacional: la Confederación Comunal de Colombia, que viene realizando encuentros periódicos desde el año de 1970. Las JAC fueron también los promotores de otras expresiones organizativas, entre las que se puede mencionar a las Asociaciones Campesinas, que reúnen a las directivas de las Juntas y otras expresiones municipales y regionales. Para ilustrar la importancia de este proceso, podemos examinar el sur del Meta donde el conflicto armado ha sido implacable con todos los actores. En La Macarena existen, por ejemplo, más de 180 JAC, una Asojuntas y 4 asociaciones campesinas que se encuentran demarcadas por los límites geográficos y culturales de la microregión del Duda – Guayabero. De esta forma, Ascal-G es la Asociación Campesina Ambiental del Losada – Guayabero, situada en el interfluvio de los ríos que componen su nombre Losada – Guayabero, una organización que impulsa la protección del medio ambiente, la solución negociada de los conflictos y la participación ciudadana en estos territorios. Desde Ascal-G nace la propuesta de Zona de Reserva Campesina Losada – Guayabero, avalada por la ley 160 de 1996 y en espera de la aprobación final por parte del Incoder.

También, la zona del Yari, entre San Vicente del Caguán y La Macarena, cuenta con Corpoayari, la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de los Llanos de Yari, que incluye alrededor de 79 veredas, cuenta con una junta directiva y ha creado repertorios de acción colectiva que van desde la resolución de un problema de linderos, el arreglo de vías comunitarias, hasta la movilización y la protesta.

Astracagua, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Guayabero, es otra organización que comprende los territorios de la orilla derecha del Guayabero, la margen que conecta a La Macarena con Vista Hermosa. Astracagua adhiere las organizaciones de Juntas situadas entre los interfluvios de Caño Cabra, Caño indio, algunas con gran recorrido histórico como La Catalina o Yarumales, El Diamante y La Esmeralda 2, en el límite con el departamento de Guaviare.

Asopeproc, la Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina, es otra iniciativa de la Macarena que surge del seno de los comunales, articulando 21 veredas y siendo, en cierta época, una de las principales iniciativas agropecuarias del territorio. Miradas similares por cada uno de los municipios del Sur del Meta pueden dar una imagen aproximativa de los mapas asociativos de cada localidad. Después de conocer la fortaleza de este tipo de organizaciones, de actores, sujetos colectivos que han logrado pervivir en los tiempos de guerra y paz, es posible afirmar que los actores comunales son el escenario y el sujeto propicio para la construcción de paz.

Las Asociaciones Productivas son el otro tipo de actor comunal que representa grandes potencialidades en un posible contexto de paz, donde el desarrollo social y la participación política pueden jugar un papel central. Aunque para este tipo de iniciativas el país carece de la suficiente infraestructura vial, de servicios (crédito, asistencia, acompañamiento, suministros directos, energía, et.) y apoyo para las cadenas de comercialización de los pequeños productores, existen iniciativas a escala municipal que pueden considerarse como apuestas serias para el desarrollo local y regional. Este es el caso de Aggapam, la Asociación Gremial de Ganaderos y Productores Agropecuarios de La Macarena, que surge en el año 2008 buscando alternativas para el desarrollo rural que permitieran potenciar a los pequeños productores y remplazar los circuitos de la economía de la coca, que ya había dejado suficientes estragos en la economía local. Actualmente reúne a cerca de 20 asociaciones productivas de La Macarena que benefician a más de 800 hogares de productores en el municipio; una iniciativa que continua en crecimiento mientras espera que el Estado colombiano cumpla su labor de garantizar la infraestructura vial para la comercialización de sus productos y apoye este tipo de iniciativas con políticas sostenidas de desarrollo rural. Hasta el momento solo ha obtenido apoyo de los dineros que llegan al territorio por concepto de la Política de Consolidación estatal.

En el departamento, las asociaciones comunales y productivas han tejido importantes redes para la interlocución e incidencia con organismos del Estado, el sector privado y la cooperación internacional. Entre estas redes se destaca la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano –Mucapoc, que articula a organizaciones de nueve departamentos del Oriente colombiano en un magno esfuerzo por aunar propósitos de las más de 70 organizaciones que asistieron con sus delegados a su última asamblea realizada el 20 de marzo de 2013 en Villavicencio. No obstante las organizaciones siguen siendo victimizadas, durante la asamblea en mención, el día 24 de marzo del año 2013, el campesino dirigente Alonso Lozano coordinador de la Fundación por la Defensa de los Derechos

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente Colombiano, Fundación DHOC, e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del Río Guaviare, Asocatragua, fue desaparecido en las cercanías de la cabecera municipal de Mapiripán<sup>12</sup>. Este tipo de hechos lesionan las iniciativas de construcción de paz y resquebrajan los tejidos que pueden garantizar una posible reconstrucción social, cultural y política en Colombia.

También hay importantes procesos organizativos y de articulación, como la Mesa humanitaria del Meta, un espacio de encuentro de afros, indígenas, mujeres, jóvenes, niños y niñas, campesinos(as), población en situación de desplazamiento, víctimas del conflicto, y sectores como medios, ambiente y cultura de paz, expresados en diversas redes y movimientos sociales, y que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.

De otra parte, los pueblos indígenas cuentan en el Meta con una población de 13.760 personas, según los datos recopilados por la gobernación en el año 2009, distribuidos en 20 resguardos, 7 asentamientos, 2 cabildos y 1 ONG indígena; entre todos reúnen 18 etnias distribuidas en los municipios de Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Granada, Macarena, Mapiripán, Mesetas, Uribe y Villavicencio. En los últimos años las principales organizaciones indígenas se han integrado a iniciativas impulsadas por entidades como La Mesa Humanitaria del Meta, PNUD y Cordepaz.

En este sentido, se puede decir que el mapa de organizaciones sociales del Meta es mucho más amplio al considerar iniciativas que se gestan con grandes esfuerzos en todo el su territorio. Por solo mencionar algunas, se puede recordar a la Red de Mujeres del Meta, la organización Meta con mirada de Mujer, la Asociación de Usuarios Campesinos de Guamal (Amucg), la Asociación de productores de Puente Abadía (Appa), la Fundación para el desarrollo del Calvario (Fundecal), el Capítulo Meta Mesa Humanitaria, el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz), Fundación Proyecto Vida Anthoc, la Coordinadora Nacional de Desplazados Meta (CND), la Unión Social Comerciantes Informales, la Asociación de Desplazados zona Güejar (Asodesgüejar), la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asamudem), la Mesa Departamental de Jóvenes, la Red Departamental de Mujeres y Organizaciones, la Mesa de Tierras e Iniciativas Productivas, la Plataforma de Organizaciones Afro, la Mesa

12 Ver denuncia completa en <http://www.actionpeace.org/?p=1036> Consultado en diciembre de 2013.

de Ambiente y Cultura de Paz (Macupaz), la Corporación Retoños (Corporetoños), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Sede Meta (Anuc Meta), la Asociación de Cabildos Indígenas del Meta (Acim-Unu- Ma), la Unión de Trabajadores del Llano (Utrallano), el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), entre otras muchas iniciativas de desarrollo y paz que se vienen encontrando para socializar, visibilizar, retroalimentar los proceso y construir alternativas de vida digna y paz duradera.

### Instituciones oficiales

Estas instituciones se inscriben en el marco del Estado Social de Derecho, así la actuación de sus funcionarios, en ocasiones, contradigan el mandato constitucional por verse involucrados en situaciones que traspasan la frontera de la legalidad<sup>13</sup>. De entrada, se puede decir que éste ha sido un actor de correlaciones diversas y de presencia diferencial en el territorio. Sus dinámicas han estado ligadas a las relaciones con el centro administrativo en Bogotá; las tendencias hegemónicas en la economía internacional y el control territorial (militar y político). Cada tipo de dinámica contiene, a su vez, circuitos de correlaciones entre actores que generan repertorios diferenciados por los intereses y fines en que convergen. Así, las relaciones administrativas han llevado a la reconfiguración de las espacialidades caracterizadas hoy por la existencia de centros de poder (Villavicencio, Puerto López, San Martín, Granada y Acacias), ligados a los circuitos que permiten conectar el Oriente con el centro del país y, especialmente, con Bogotá. En este sentido la lenta consolidación administrativa y política de los gobiernos locales, desde la década de 1980, y la ampliación y modernización del aparato estatal, desde 1991, han permitido la aparición de instituciones tan diversas en sus objetos y funciones como la Defensoría y las Personerías, Corporinoquia, Incoder, o las Unidades de Restitución de Tierras, las Corporaciones Autónomas Regionales (Cormacarena, Corpoorinoquia), entre tantas otras entidades oficiales que indican el avance administrativo efectivo del Estado sobre el territorio.

Por lo menos en teoría, el principal interés que moviliza a este actor es la consolidación de una institucionalidad acorde a los parámetros constitucionales del Estado Social de Derecho que, en el Meta, se ha visto seriamente afectado por las interferencias de actores políticos, económicos y del conflicto, de fuerte arraigo y poder local y regional y se han apropiado de significativas instancias de institucionalidad territorial. La inexistencia de una administración municipal consolidada, eficiente y articulada

13 Fue el caso de algunos funcionarios de Incoder en el Meta que se prestaron para compraventas fraudulentas y apropiación ilegal de baldíos.



a una política pública nacional que contemple y asuma los problemas locales, genera una institucionalidad segmentada y determinada por alianzas políticas y burocráticas que o subsumen los lineamientos centrales de la planeación del desarrollo o son incapaces de darles cumplimiento<sup>14</sup>. En 2007 aparece, como se mencionó, otro factor determinante en los intereses y actuaciones de las instituciones del estado: El Plan de Consolidación Integral de La Macarena PCIM, que tiene sus orígenes en la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe Vélez, el Plan Patriota, el Plan Colombia y, con más anterioridad, en el Plan Nacional de Rehabilitación. Aquella estrategia, que en el año 2011 se convierte en Política Nacional, generó un aparato burocrático “inter-agencial” paralelo a las alcaldías con claros rasgos contrainsurgentes, fundamentada en tres pilares: la lucha anti-drogas, la consolidación institucional oficial en los territorios, considerados como bastiones históricos de la insurgencia y la ofensiva antisubversiva contra las guerrillas de las Farc-ep.

Sin embargo, su carácter inter-agencial y de acción burocrática y militar paralela en los municipios generaron por lo menos dos situaciones que afectan la consolidación de la democracia y la gobernabilidad civil en el territorio. En primer lugar, la imbricación de la política social con la estrategia contrainsurgente que llevó a la presencia desproporcionada de militares en escenarios clave de la vida civil que, por cierto, habían ganado los gobiernos locales frente a los grupos armados. De esta forma, las denominadas campañas cívico-militares terminaron por movilizar y, en algunos casos, vincularon a sectores de la población civil en territorios de confrontación armada; sectores que como se señaló, también habían encontrado la manera de no vincularse a ningún grupo armado. Hasta hoy, esta problemática persiste en los municipios del Ariari – Guayabero, donde las redes de informantes, las ofertas de recompensas, los señalamientos, los retenes y las restricciones a la circulación de personas y productos de consumo han generado crisis de seguridad alimentaria y han lesionado Derechos Humanos básicos.

Como se adelantó, la segunda situación es la aparición de una estructura burocrática paralela a las administraciones municipales, en los territorios señalados en la colorimetría de la consolidación<sup>15</sup> como objetivo de la estabilización militar

---

14 Así, por ejemplo, las instancias de participación ciudadana en los gobiernos locales raramente han operado o en una época (1997-2005) el trabajo de las personerías estaba bloqueado por los grupos armados. En contraste, es poco lo que las alcaldías pueden hacer frente a la política antidrogas o a las concesiones mineras a particulares.

15 En los mapas del PCIM era habitual encontrar veredas o zonas tinturadas

y social. La Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT) cuenta en el Meta con la Regional Macarena – Caguán, encargada de direccionar, desde Villavicencio, la política de acción integral para Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico. En estos municipios, la gobernabilidad de la institucionalidad local, lejos de verse fortalecida, ha sido relegada por las iniciativas de la UACT dado que cuenta con mayores capacidades técnicas, económicas, administrativas y gerenciales por su conexión directa con los entes departamentales y nacionales. Así, las potencialidades locales que pueden generarse a partir de una política pública que consolide las democracias municipales son menoscabadas por el imponente despliegue de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, con mayor capacidad de decisión que los alcaldes. Al mismo tiempo, el contenido del plan de desarrollo municipal o el plan de ordenamiento territorial queda determinado por las orientaciones o inversiones de la consolidación territorial, con lo cual se pierde la oportunidad de fortalecer los procesos locales de participación ciudadana.

Con todo, existen otros actores institucionales con funciones y objetivos, al parecer, más sintonizados con los propósitos de la paz y el desarrollo regional. En primer lugar, se encuentra el Programa de Desarrollo y Paz del Meta, Cordepaz, de carácter mixto, público-privado, que desde 1999 adelanta un conjunto de intervenciones tendientes a mejorar el nivel de vida y las capacidades sociales, y públicas de organizaciones civiles e instituciones en distintos municipios del Meta. En segundo lugar se pueden reseñar algunas Unidades Administrativas (UA), como la UA Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y es, por consiguiente, vital para la solución de los problemas estructurales de la paz, si se considera que la tierra y el territorio son el centro de la disputa social y militar. Sin embargo, su consolidación se encuentra lejos de la plena eficiencia debido a las limitaciones de recursos técnicos, económicos y a cierta ambivalencia de voluntad política, necesaria para armonizar todos los entes que en su gestión participan. Hay otras unidades administrativas creadas por la ley 1448, que inician una labor importante para la gestión del gubernamental en un proceso de paz y pos-conflicto.

Así mismo está el Incoder, que tiene como objeto constitucional tareas de impacto principal en los conflictos por la tierra. Este

---

de rojo, amarillo y verde. Las primeras eran zonas donde, supuestamente, no había presencia la fuerza pública y se libraba una lucha contra la guerrilla; sin embargo, estas mismas zonas rojas eran el lugar de residencia de decenas de hogares o de trabajo de la población civil.

ente ejecuta la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilita el acceso a los factores productivos, fortalece las entidades territoriales y sus comunidades, mejora los procesos de coordinación interinstitucional, facilita a pequeños y medianos el acceso a tierras, regula la ocupación y el aprovechamiento de tierras y concede la constitución formal de zonas de reserva campesina.<sup>16</sup>

También el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) aparece en el mapa rural con la responsabilidad de desarrollar las políticas y los planes que el gobierno nacional tenga en materia catastral, geográfica, agrologica y cartográfica para apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial; de gran urgencia en el departamento donde la informalidad de la tenencia de la tierra es un obstáculo visible para las comunidades más pobres que no tienen respaldo legal para acceder a créditos, bienes o servicios.

En la misma lógica está la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, ligada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que juega un papel significativo en el Meta desde su creación (artículo 19 de la ley 99 de 1993). Los funcionarios de esta dependencia son, quizás, quienes más contacto han tenido con la problemática realidad del colono en los parques naturales Tinigua, La Macarena, Los Picachos, Sumapáz y las demás áreas protegidas. Aunque las dificultades administrativas y la ausencia de claridades legislativas sobre los habitantes de los parques naturales han impedido que se promuevan respuestas de más impacto, esta entidad juega un papel fundamental para la planificación de los territorios donde por décadas habitan colonos que proponen la consigna de “Parques con Gente”.

Finalmente, dentro de las entidades del Ministerio Público hay dos actores que adquieren gran relevancia en eventuales tiempos de negociaciones de paz. En primer lugar, la Procuraduría Ambiental y Agraria, que tiene entre sus responsabilidades solicitar a las entidades competentes que se adelanten las acciones encaminadas a recuperar las tierras de la Nación indebidamente ocupadas, la reversión de baldíos y la extinción del derecho de dominio, entre otros aspectos que dispone la ley 160 de 1994 y otras reglamentaciones inherentes como agente del Ministerio Público. Este actor en el departamento es indispensable para un conflicto que se espera superar modificando la estructura de la propiedad de la tierra y para lo cual muchos propietarios tendrán que justificar la legalidad de su pequeña o gran tenencia.

<sup>16</sup> Ver Decreto 1300 de 2003 en sus artículos 2, 3 y 4 principalmente, entre otras disposiciones.

La Defensoría del Pueblo y las Personerías en cada municipio cierran el mapa de los actores oficiales que juegan un papel principal o secundario en el teatro de la paz. La Defensoría es la responsable de impulsar la efectividad de los Derechos Humanos, no obstante su desempeño, aunque constitucional, ha estado en desproporción frente al tamaño de la crisis humanitaria en el Meta. Aun así, es posible que sus actuaciones adquieran la relevancia y el interés que merecen en un escenario de paz y cese al fuego.

### Partidos y movimientos políticos

Desde 2003, el escenario político-electoral del Meta ha conocido transformaciones significativas. Los partidos y movimientos políticos han variado sus representaciones, dinámicas, estrategias y actuaciones en un contexto de conflicto armado y de cambios en las políticas de guerra y paz. Igualmente han readecuado sus nexos con nuevas o antiguas estructuras de poder económico y social (gremios de la producción, expresiones ciudadanas, empresas multinacionales, tendencias internacionales, países limítrofes etc.). Como se mostró, los vínculos de algunos políticos con grupos de paramilitares y narcotraficantes, en coyunturas y procesos electorales específicos, también han hecho parte de la reconfiguración de los partidos y movimientos en el Oriente.

El Partido Liberal Colombiano fue la fuerza electoral mayoritaria en el departamento. Hasta aquel año (2003) manejó buena parte de los asuntos atinentes al gobierno del territorio en sus distintos niveles ejecutivos. Desde la década de 1980, por ejemplo, obtiene la mayoría de las administraciones locales y departamentales consecutivas. Se destaca también su papel en coyunturas importantes en el Meta y el país, como las negociaciones de paz que han tenido epicentro precisamente en este territorio. Así, durante 1988, en el marco de las negociaciones de La Uribe, el Partido Liberal obtuvo nueve curules en la asamblea departamental del Meta, frente a cuatro del Partido Conservador y dos de la Unión Patriótica. En 1990, para la misma representación, el liberalismo obtuvo la mayoría de 11 curules. En 1997, poco antes del inicio de las negociaciones del Caguán, se realizaron elecciones para la Gobernación y la Asamblea, municipalidades y consejos, y en ellas, por ejemplo, el Partido Liberal obtiene la gobernación del Meta con el candidato Alan Jara Urzola, quién ejercería por segunda vez el cargo después de haber oficiado como gobernador por decreto en 1990. Como es de conocimiento público, Alan Jara, después de soportar casi ocho años un cautiverio por las Farc-ep, llega nuevamente a la Gobernación del Meta, en las elecciones de octubre del 2011, a nombre del movimiento político “Vamos Pa’Lante”.



En las elecciones al Congreso de 2010 y 2014 es evidente que el Partido Liberal sigue siendo una fuerza importante, como se observa en la tabla 11.

**Elecciones Cámara de Representantes 2010 y 2014**

PARTIDO	VOTOS	
	2014	2010
Partido Liberal	86.195	41.397
Partido de la U	71.343	89.468
Centro Democrático	46.317	
Partido Conservador	10.387	8.431
Movimiento Mira	8.976	6.547
Polo Democrático	6.366	5.047
UP	2.977	
Cambio Radical		6.998
PIN		2144
Partido Verde		1604

Fuente: Registraduría Nacional

También se conoce en el Meta una larga tradición conservadora, nacida con las sucesivas olas de migrantes llegados de otros departamentos donde este partido tuvo marcada influencia (Cundinamarca, Huila, Antioquia). De manera similar a lo sucedido con el Partido Liberal, distintas vertientes del conservatismo han ocupado cargos de primer orden en el Meta. Su nombre ha estado asociado, por ejemplo, en los últimos veinte años, a figuras públicas como Omar Armando Baquero Soler o Narciso Matus Torres. Algunos municipios mantienen hasta hoy fuertes nexos históricos y electorales con este partido, incluso en zonas donde opera la guerrilla, es el caso de La Macarena.

Al examinar su presencia para la Cámara de Representantes en los comicios del Congreso de 2010 y 2014 (ver tabla 11) se evidencia que los conservadores se mueven con caudales de baja intensidad que les permiten sostenerse en la escena política pero que les impiden ser una opción significativa en el departamento y en la propia Gobernación.

Otro partido es el Partido de la U, una coalición que ha ido tomando fuerza en el departamento y que incluso en las elecciones del 2007 ganó la Gobernación y en 'para la Cámara de Representantes también ha logrado una importante votación, como la obtenida en los comicios del 2010 y 2014 (ver tabla 14).

Adicionalmente a estos partidos está Cambio Radical, que aparece en el teatro político en 2003, cuando gana las elecciones a la Gobernación con el candidato Edilberto Castro Rincón. Este año, el mismo partido asume cinco alcaldías (Barranca

de Upía, Guamal, Cumaral, Mapiripán y Puerto Rico) y cinco curules en la asamblea departamental. Un suceso audaz en términos electorales, con una presencia que aún persiste. En los comicios de Congreso de 2010 (ver tabla 11) tuvo candidato propio mientras que en las elecciones del 2014 hizo parte de la coalición del Partido de la U y su candidato al Senado tuvo una importante votación en el departamento.

Al lado de Cambio Radical, otros partidos hacen su debut en el Meta en los últimos años, con aspiraciones para Gobernación, alcaldías y otros cargos de elección popular. Se puede mencionar a Equipo Colombia, Oxígeno Verde, Movimiento nacional, Formamos Ciudadanos y, más recientemente (2010) a PIN, Mira y Partido Verde. En las elecciones a la Cámara en el 2010 y 2014 sin duda estos son los que más sobresalen en su votación.

En los comicios a la Cámara del 2014 sobresale la fuerza de Centro Democrático, un nuevo partido creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que fue la tercera votación en el departamento, después de los partidos de la U y Liberal (ver tabla 14).

Con relación a los movimientos y partidos políticos de izquierda, desde la década de 1970 han sido actores importantes en el panorama departamental y regional. Fue en el Meta donde expresiones políticas como la Unión Patriótica (UP) adquirieron gran relevancia y juego político. Se recuerda todavía el triunfo electoral de Pedro Nel Jiménez, quien, en 1986, alcanzó la mayor votación para Senado en todos los Llanos Orientales. Lamentablemente poco después este senador fue víctima de la violencia política, que le impidió ejercer su representación. El mismo año, la UP alcanza figuración en la Asamblea. En 1988 obtiene cuatro alcaldías y dos curules en la Asamblea. Tras, la arremetida paramilitar, se sostiene, en 1990 y en 1992, con una curul en la asamblea y 21 curules en consejos municipales. Para 1994 la UP obtiene la alcaldía del El Castillo y postula a Pedro Malagón para la Asamblea. Tanto la alcaldesa elegida en El Catillo (María Mercedes Méndez) como Pedro Malagón, sería asesinados luego. Hechos como estos sacaron del escenario electoral del Meta a la Unión Patriótica. Esto también se evidencia en las elecciones a Cámara de los últimos años, aunque es importante tener en cuenta que en los comicios de la Cámara del 2014 la UP tuvo un candidato propio, luego de recuperar su personería jurídica (ver tabla 11).

Hoy en día, es muy tímida la presencia y visibilidad pública de nuevas agrupaciones de izquierda, como el Polo Democrático –que en las urnas mantiene un caudal de votos (ver tabla 14)- y Marcha Patriótica, habida cuenta de ese pasado de terror y de estigmatización contra muchos de sus integrantes.

Hasta hace poco, las relaciones del poder político en el Meta se caracterizaron por mantener algunas redes dentro de la ilegalidad y la violencia. El mencionado exterminio de la UP, los secuestros a candidatos como Alan Jara; los asesinatos de políticos, como fue el caso de Omar López Robayo, liberal, ex alcalde de Villavicencio, y los nexos de gobernadores y candidatos con grupos paramilitares, como sucedió con Edilberto Castro, son indicadores fehacientes de este fenómeno. Es una constante sociológica que se hunde en las formas primarias de entender el poder dentro de una comunidad política. Aquí hay también un gran escollo para construir un escenario de paz en el territorio.

Este es, en breve, el teatro donde se despliegan los actores políticos en el Meta. Las formas para resolver los intereses y las diferencias políticas se han visto determinados por dinámicas sociales económicas y bélicas, poco institucionalizadas o abiertamente ilegales. Más grave aun, esta “lógica de actuación” ha ocasionado graves crisis humanitarias y deja como resultado el exterminio o destierro de sectores sociales y actores enteros de oposición. Un pésimo mensaje para la paz. Pero quizá en las memorias mismas de esta historia se encuentren alternativas y el camino para hacer posible la reconciliación.

### Instituciones no gubernamentales

Reúnen a las Agencias y Organismos de Cooperación Internacional instaladas en el Meta, las instituciones religiosas católicas, evangélicas y protestantes que cuentan con redes, escenarios y organizaciones menores con repertorios y procesos, más o menos, sistemáticos; también la comunidad académica que avanza desde los centros de investigación y universidades en preguntas por el desarrollo regional y la ciencia. En estos ámbitos se han incentivado redes y escenarios con actores políticos, gremios económicos, entidades territoriales y centros del pensamiento. Las instituciones no gubernamentales han ganado muy rápido reconocimiento, credibilidad y legitimidad en sus propuestas. Se podrían mencionar muchas otras de estas instituciones que, sin duda, serán también importantes en los procesos de pos-conflicto que demande el Oriente colombiano.

El PNUD es uno de los principales actores de la cooperación internacional que promueven el desarrollo y las iniciativas de paz en el departamento del Meta. Varios programas e iniciativas se tejen a partir de su intervención en Colombia y el Meta, entre ellos está el Programa REDES, un programa estratégico para trabajar por el desarrollo en medio del conflicto, y que se consolidó como un espacio de encuentro y de construcción de confianzas entre los actores de la sociedad civil 10 municipios: Vista Hermosa, Mesetas, Puerto Lleras, San Martín, Cubarral, El Dorado, San Juan de Arama, Granada y El Castillo.

También el Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA ha contribuido en el departamento al fortalecimiento de las capacidades locales de 10 municipios del Meta (Acacias, Castilla la Nueva, Cumaral, Fuente de oro, Granada, Guamal, Puerto López, Restrepo, San Juan de Arama y Villavicencio) donde se han desarrollado proyectos desde los componente de salud sexual, población y desarrollo, género y derechos, políticas públicas, entre otros esfuerzos que sin duda contribuyen a la construcción de paz y dignidad.

La Embajada de Suecia y ASDI, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, han impulsado -en conjunto con PNUD y la Unión Europea -la tercera versión del Laboratorio de Paz III que abarca 18 municipios del Meta: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Cabuyaro, Puerto Gaitán, Cubarral, Guamal, San Martín de los Llanos, El Dorado, El Castillo, Granada, Lejanías, Fuente de Oro, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico, donde se adelantan acciones entorno a los ejes estratégicos de Paz y Derechos Humanos, Gobernabilidad y Democracia y Desarrollo Integral Sostenible, articulados a proceso formativos con comunidades y actores estratégicos de los municipios y la región con la dirección de Cordepaz.

La Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ impulsa en el territorio el proyecto “Fortalecimiento de Medidas de Confianza para un Ordenamiento Territorial y Ambiental participativa en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMENA) SerMacarena”, que se ejecuta en alianza con los entes territoriales y los actores del territorio buscando ser catalizadores de soluciones y propuestas que permitan construir criterios comunes entre los actores que pueden buscar una alternativa de desarrollo ambiental de la región del sur del Meta.

Los centros académicos, universidades y sus grupos e institutos de investigación, son un actor que adquiere cada vez mayor relevancia en el panorama regional. Esto en la medida que las mismas instituciones y su conocimiento se acercan a sus problemas y realidades sociales que exigen una mirada técnica, científica y social para las posibles acciones, soluciones y respuestas. La Universidad de los Llanos -Unillanos ha sido uno de los actores que ha impulsado alianzas y encuentros entre los diferentes sectores de la sociedad metense. Entre éstos se destaca el Foro Visión de Desarrollo Sostenible de la Región Llanos Orientales de Colombia realizado en Acacias, el 5 de Octubre de 2013. Allí aparecen dos aspectos relevantes. El primero, la Universidad sale a la región con un repertorio que convoca a los sectores académicos, políticos, productivos y sociales para pensar los principales aspectos del desarrollo regional y esbozar las propuestas de cada sector sobre la Orinoquía. El segundo,

se ponen en la mesa las apuestas y modelos de desarrollo de los distintos actores y se propicia el debate para buscar alternativas comunes y puntos de encuentro. Este y otros ejercicios de la comunidad académica pueden propiciar la rigurosidad necesaria para construir una paz y un desarrollo con argumentos y democracia.

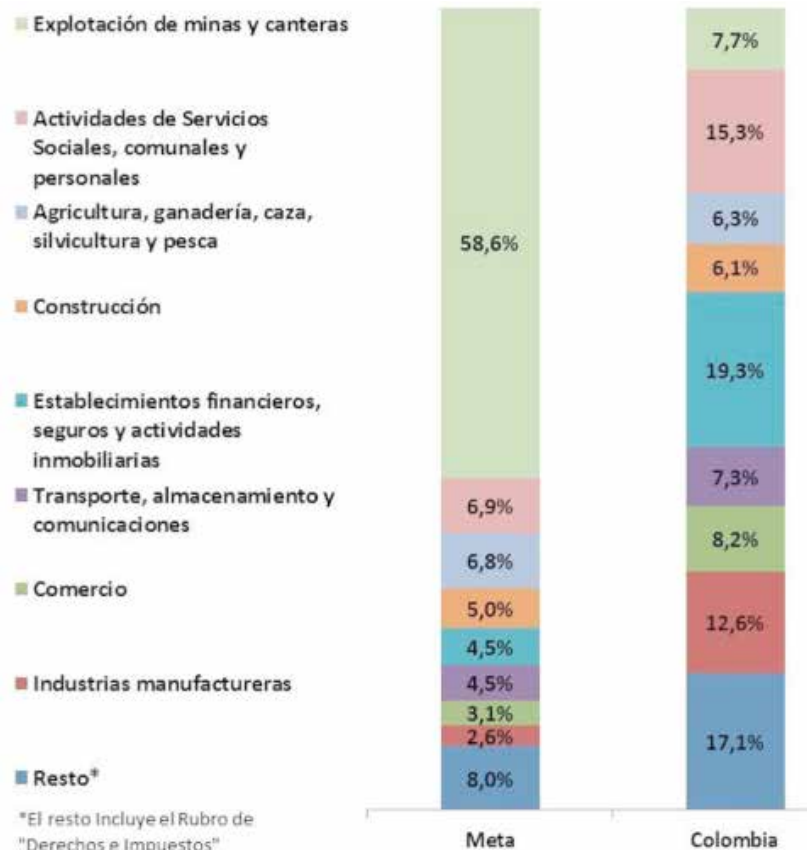
**Los gremios económicos**

Son actores decisivos para la transformación de los problemas estructurales de la producción económica del Meta que debe enfocarse en la construcción de un modelo de desarrollo armonioso con los objetivos del milenio y la sustentabilidad de los recursos naturales que han sobrevivido a un modelo exportador de alta intensidad. Los sectores económicos, sus asociaciones, agremiaciones y redes de cooperación y producción son, además del motor del desarrollo económico, la garantía de sostenimiento para una vida digna, incluyente, humana y una paz duradera para todos los colombianos.

Los gremios económicos, de acuerdo con los sectores de su producción<sup>17</sup>, pueden diferenciarse en siete grandes grupos de productores: a) sector Agropecuario, Silvicultura y pesca, b) sector Minero, c) Sector Industrial, d) Comercio, e) Construcción e Inmobiliaria, f) Transporte y Turismo, g) Sistema Financiero, todos con menor o mayor participación en el PIB. Entre ellos, el que mayor representación ha alcanzado, en los últimos diez años, es el sector de explotación de minas y canteras que para el 2012 representó el 58.6% del PIB del Meta; seguido por el sector servicios, con el 6,9%; el sector agropecuario, con el 6,8%; la construcción, con el 5%; el sistema financiero y transportes, ambos con el 4.5%; comercio, con el 3.1% y las industrias manufactureras, con el 2.6%. Así lo muestran las siguientes barras comparativas entre el Meta y la Nación:

17 Los gremios económicos en el Meta pueden distinguirse desde los sectores y las actividades productivas que cada uno desarrolla con mayor o menor impacto en el PIB, de acuerdo con la tipificación realizada por el Banco de la República.

**Estructura PIB por sectores**



Fuente: DANE - Cuentas Nacionales Departamentales, octubre 2012

Fecha de actualización 16 de agosto de 2013

En gran medida, la capacidad productiva y comercial de las fuerzas económicas del Meta depende de su posición en el contexto de la economía nacional. Este hecho obvio, no necesariamente guarda relación con el peso político y social de los mismos sectores dentro del departamento. Sus posiciones con respecto, por ejemplo, del proceso de paz con las guerrillas, difieren notablemente de un sector a otro. Por lo pronto, se mencionan a continuación las agremiaciones más destacadas.

En primer lugar, el Grupo Económico Fenalco, seccional Meta y Llanos Orientales; la Cámara de Comercio de Villavicencio; la Caja de Compensación Familiar del Meta – Cofrem; la Caja de Compensación Regional Meta, se vinculan para dar surgimiento al Centro Gremial, un escenario que agrupa las otras corporaciones, comités, asociaciones y proyectos de especial importancia como: Creatur, el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, Cotelco, Bancoldex, Dane, Prodelmeta, Ecopetrol, el Comité Cívico de Villavicencio, el Comité Intergremial, el Comité de Conectividad del Meta, el Fondo Nacional de Garantías, el Consejo Departamental de Planeación, Asorinoquía, el Proyecto de Desarrollo Económico Local para el Meta (DEL), el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (CSIR), Amevezllanos, el Pacto por la transparencia Asomevilc. Entre sus metas de este entramado económico está constituir una agenda común para el trabajo estratégico de los entes empresariales que contemple, entre otros, un programa único de capacitación acorde con las necesidades de la región. También, definir cuáles son los mega-proyectos de la región en los cuales se debe participar, aportar y defender los intereses regionales. Igualmente, retomar las veedurías con el fin de vigilar la transparencia en la contratación e inversión de los recursos públicos; establecer las líneas de orientación empresarial para direccionar las inversiones en la región; crear un fondo de capital semilla para acompañar planes de negocios con proyección; constituir Centros de Atención Integral con participación de las tres entidades para apoyar a comerciantes y empresarios y, finalmente, identificar los procesos agroindustriales que son posible desarrollar en el Meta para impulsarlos entre empresas y empresarios.

En segundo lugar se puede mencionar a Asorinoquía, que es una entidad privada creada por empresarios, en el año 2010, para promover y apoyar iniciativas estratégicas que alcancen el bienestar y el desarrollo regional. El área de influencia de la Asociación es toda la Orinoquía, que comprende siete departamentos: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Entre sus asociados se encuentran empresas como Del llano S.A., Pacific Rubiales, Rio Paila Castilla, Reforestadora del Rio S.A.S., Petrobras, Palmera la Carolina S.A.S, Aceites Manuelita S.A., Promotora Palmas de Puerto

Gaitán, Poligeow, Fasenda – Aliar S.A., Indupalma, Forestal el Vergel S.A.S., Coviandes, Inmunizar del Llano, Coseagro, Autopistas de los Llanos S.A., Empresa de Alumbrado Público, Hacienda la Cabaña S.A., Cámara de Comercio de Villavicencio, el grupo comerciante Vital, el Comité Cívico de Villavicencio, Urbana Construcciones y la Universidad de los Llanos Unillanos. Con esta alianza, Asorinoquía pretende ser el gremio empresarial que impulse la región hacia un modelo de desarrollo estratégico para la gran industria de los departamentos de la Orinoquía.

En tercer lugar, Fedegan, la Federación Colombiana de Ganaderos, cuenta en su estructura de regionalización con la eco-región del Piedemonte Orinocense, donde se destaca su presencia e incidencia en los municipios de Acacias, Castilla la Nueva, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, San Carlos de Guaroa y San Martín, todos territorios con una significativa producción bovina de hatos de hacendados con profundas redes de influencia en la política local y la producción regional. Fedegan es un actor que por sus características económico-políticas y su amplio posicionamiento a nivel nacional y local puede jugar un papel importante en los temas de paz y desarrollo rural. La postura de sus altos representantes hacia el proceso de paz es desfavorable sin que ello indique que en sus asociados menores, el criterio de oposición a los diálogos de paz sea coherente con su dirigencia.

En cuarto lugar, la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tiene presencia significativa en la región desde el año 2011 cuando se inauguró la seccional Llanos Orientales y Orinoquía, con sede principal en Villavicencio, pero con cobertura en los departamentos de Vichada, Arauca, Casanare, Meta y Putumayo. Su propósito ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad que permita generar las condiciones necesarias para el desarrollo empresarial de alta competitividad. La Seccional cuenta con afiliados de los sectores de hidrocarburos, biocombustibles, construcción, caucho, granos, maderables y alimentos destacándose como una agremiación diversa en sus sectores y compacta en sus intereses económicos y políticos, especialmente en los que se refiere a la paz y a la terminación del conflicto armado.

Con todo, el mapa de actores departamentales, sus intereses, composiciones, impactos y capacidades para un eventual escenario de paz, cese al fuego y pos-conflicto propone varios dilemas que deben reflexionarse si el deseo es el de encontrar rutas y estrategias apropiadas para la paz. Desde una primera mirada a las estructuras de organización e interacción de los distintos actores podría pensarse que dicha variedad y las profundas diferencias les imposibilitan para encontrar escenarios en común donde se puedan buscar alternativas a los conflictos de

intereses que ahondan las crisis sociopolíticas que vive el país desde hace muchas décadas, no obstante existen respuestas e intervenciones de todos los actores que ya se encuentran en desarrollo y que quizá pueden ser los terrenos fértiles

para empezar a posicionar temas y proyectos que ameriten reflexionarse públicamente y con la rigurosidad técnica y política que merecen tratar los asuntos estructurales para una paz duradera y con desarrollo en Colombia.





## 2 Intervenciones y respuestas de los actores regionales.

El complejo mapa de actores regionales presentado hasta ahora difícilmente proyectará un mapa de respuestas e intervenciones unidireccional y sin conflictos de intereses. Por el contrario, las apuestas, enfoques y alternativas de cada actor están direccionadas hacia la defensa de sus intereses gremiales e institucionales. El gran resultado, que potenciaría el acercamiento entre los actores de la región, se puede encontrar en los procesos intrínsecos y extrínsecos de cada actor. Es decir, en el desarrollo interno de cada organización y en las relaciones externas o geopolíticas de sus estructuras.

Internamente los actores regionales están conformados por una serie de propuestas, entidades, organizaciones o sujetos económicos, sociales y políticos con intereses, propósitos y tensiones particulares que actúan en el marco de lo corporativo (entiéndase en el ámbito de lo político, lo gremial, lo asociativo, lo productivo o lo institucional y militar) allí, cada vez más, las personas naturales o jurídicas buscan la participación, la incidencia y la deliberación de los problemas que afectan los intereses locales y regionales.

Lejos estamos de las estructuras autoritarias (exceptuando los grupos armados) de antaño donde no se permitía los disensos

o las contradicciones, ahora, por lo menos en los escenarios formales, las estructuras burocráticas y, más aun, las horizontales permiten la correlación entre propuestas, la discusión de los objetivos y la planeación estratégica, victorias más o menos logradas por los procesos de modernización institucional del Estado, la sociedad civil y la empresa privada que ha debido renovar sus procedimientos más ortodoxos para cumplir con estándares de competitividad, productividad e integración a los mercados internacionales y las lógicas occidentales.

En caso contrario, cualquier tipo de actor tiende a desmoronarse y a generar disfuncionalidades que segmentan su propia estructura. Un caso similar aconteció en el año 2013 cuando uno de los gremios más representativos del país, el Comité de Cafeteros, ignoró las voluntades de sus productores desatando un paro nacional que se desbordó a otros sectores agropecuarios dejando en jaque la economía nacional durante el primer y el último trimestre del 2013. Una situación similar vive Fedegan desde donde ya se escuchan propuestas que llevan a la diseminación del gremio y a la creación de nuevas estructuras capaces de asumir las nuevas realidades de los asociados.

Así, pues, en la dimensión interna de los diferentes actores están aconteciendo transformaciones cualitativas que pueden ser propicias para las transformaciones estructurales que garanticen la paz en el Meta y Colombia. En la órbita externa de los actores se localizan los contextos regionales cargados de intereses que se mueven a toda escala: municipal, departamental e internacional, y los escenarios donde los actores despliegan sus actuaciones acordes a las relaciones de cooperación, confrontación o captura de los otros roles dentro del teatro regional. Aquí radica una segunda potencialidad en este sistema de oportunidades que se abre con los diálogos de paz: se trata de una especie de conciencia o necesidad de interacción regional, integral e inter-agencial donde los propósitos estatales, comunales y gremiales se conjuguen para construir estrategias mancomunadas que promuevan en bloque el desarrollo del Meta y la Orinoquía colombiana.

Estamos hablando de un momento donde las divergencias políticas pueden sucumbir ante la urgencia de competitividad regional frente a otros mercados nacionales y latinoamericanos que pueden arrasar la economía del Orinoco, si no logra vertebrarse en una agenda común a mediano y largo plazo.

Los gremios económicos, como se percibe en la caracterización anterior, han sido los primeros en preverlo, quizá por los grandes riesgos en que ven sus apuestas económicas, que difícilmente lograrán hacerle frente al mercado global con una economía diseminada, desarticulada y resquebrajada por la incompetencia de un mercado interno que no logra incrementar la demanda, ni mejorar el nivel adquisitivo de los trabajadores, ni muchos menos la calidad de vida. La respuesta a ello puede ser incipiente pero de grandes potencialidades y su representación más significativa se ha dado desde intervenciones de tres tipos fundamentalmente: Estatal, Intergremial y Social-Popular, como se desarrollará más adelante. Todas estas respuestas cuentan con escenarios reconocidos legítima y jurídicamente, con ejercicios más o menos exitosos de articulación, planeación y acción en propósitos específicos y voluntades que se han quedado cortas para asumir los retos que detrás de estos escenarios pueden existir para potenciar algo más allá de lo económico y transaccional, algo más trascendental y humano como es la paz con dignidad y justicia social.

La mayoría de estas respuestas han convergido en figuras como Mesas, Consejos, Comités o Alianzas que han logrado dar el primer paso hacia la búsqueda de soluciones a problemas estructurales. Este primer paso es el sentarse en la mesa con los demás interlocutores aliados o contradictores en temas específicos. El segundo paso, quizá el más pausado, es el de movilizar sistemáticamente las voluntades y los recursos para

garantizar que los escenarios de interacción e interlocución continúen desarrollándose de acuerdo con lo pactado entre los actores o lo reglamentado entre las instituciones, esto como garantía de cumplimiento de lo pactado entre los actores y la puesta en marcha de las agendas que se concreten.

Así dentro del mapa de respuestas e intervenciones de tipo estatal se encuentran:

### Los Consejos Seccionales de Desarrollo Rural (Consea)

Es una instancia de articulación en el nivel departamental presidida por el Gobernador, los secretarios de agricultura y planeación, con la participación especial del Ministro de Agricultura y el Ministro del Trabajo o sus delegados y los alcaldes de cada municipio, quienes se articulan en este escenario con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, Incoder, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, la Unidad Administrativa de Acuicultura y Pesca, el Banco Agrario- Banagrario, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro, las corporaciones de abastos, los fondos ganaderos, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Corpoica, el director regional del Sena, los representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los centros provinciales y representantes de organizaciones campesinas, gremios, asociaciones de profesionales, entre otros actores que el gobernador considere pertinentes.

Este órgano es, quizá, el escenario que reúne las autoridades públicas, privadas y mixtas que pueden incidir ampliamente en la construcción de la inclusión social, el desarrollo rural y la paz en los departamentos, incluido el Meta. Esta estructura fue la delegada por el Gobierno nacional para dar cumplimiento al pacto nacional por el agro y el desarrollo rural firmado en las mesas de concertación creadas en el año 2013; para dar solución a las reivindicaciones por las cuales se movilizaron centenares de miles de campesinos y productores agrarios en la jornada de protesta más grande que ha vivido Colombia en los últimos 30 años.

Sin embargo los Consea carecen del compromiso interinstitucional y la voluntad política para ser un escenario efectivo y eficiente en la transformación de los problemas estructurales del campo donde radica el mayor conflicto colombiano que ha potenciado la prolongada guerra que se negocia en la Habana.

En el Meta, el Consea ha merecido toda la atención de la administración departamental, quien promueve desde allí la creación de un Pacto Agropecuario, que recogerá las necesidades,

prioridades y propuestas de todas las veredas y municipios del departamento, con el fin de formular la política pública del sector agrario y de desarrollo rural en el marco de la solución negociada al conflicto y una paz.

### Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR)

Esta iniciativa es una instancia de concertación y control social reglamentada por la ley 101 de 1993 que propende por concertar entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas todo lo concerniente al desarrollo rural. Estos consejos están conformados, según lo estipula la ley, por el alcalde y representantes del Consejo Municipal, las entidades públicas, las asociaciones de campesinos, gremios y otras comunidades que deben conformar la mayoría en la participación y deliberación del consejo. Los CMDR están habilitados para establecer comités de trabajo en temas concretos de acuerdo con la realidad rural municipal y a los proyectos que requieren la veeduría ciudadana. Aquí es donde principalmente se deteriora esta iniciativa debido a la falta de dinamización de los comités y de interés de las partes responsables de promover el escenario bajo la legalidad que le inviste por la ley 101. La gran mayoría de los municipios del departamento del Meta no cuentan con este escenario activo y algunos inician su reactivación a partir del año 2012, como es el caso de La Macarena.

### Consejos Territoriales de Planeación (CTP)

Los CTP representan a la sociedad civil en la planeación del desarrollo nacional, departamental y municipal de acuerdo con el mandato del artículo 40 de la Constitución Política y las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997. Estos consejos tienen a cargo una función jurídica de vital importancia para diseñar y ejecutar las políticas públicas que pueden propiciar la solución de los problemas locales y departamentales ya que es este organismo el encargado de formular los Planes de Desarrollo y el seguimiento y evaluación de las metas que allí se planteen. Los CTP son espacios de participación comunitaria para la planeación y el control social de las políticas de desarrollo económico, social, político, cultural y territorial en todas las escalas de la administración pública (ley 152/94). Este escenario posibilita la participación ciudadana en temas estratégicos como la planeación del desarrollo que adquieren una dimensión significativa en la búsqueda de la paz en Colombia. Sin embargo, a pesar de ser una entidad con amplios potenciales para la participación y las incidencias políticas, los CTP carecen de inclusión de sectores amplios y democráticos y funcionan en la mayoría de municipios del Meta como órganos creados para cumplir los mandatos más no para potenciar la planeación local. Esto se presenta, entre otros motivos, por la cooptación que grupos políticos realizan de estos escenarios donde se arraigan cuotas burocráticas que

se aprovechan de criterios legales de los CTP que permiten, por ejemplo, que la mitad de sus integrantes permanezcan por ocho años (dos periodos de gobierno) sin ser reemplazados.

### Los Comités Municipales Ambientales

Son espacios para la participación de la ciudadanía en las decisiones y ejecuciones que en materia de ordenamiento territorial ambiental se desarrollan en el Meta con el impulso de Cormacarena. A partir del Plan de Gestión Regional de la corporación se promueven los sistemas de gestión ambiental municipales que procuran articular las organizaciones sociales y las entidades gubernamentales para diseñar e implementar estrategias de protección del medio ambiente e incidir en la política pública ambiental a nivel municipal y departamental. Este escenario tiene la posibilidad de generar estrategias de intervención interinstitucional de gran impacto en los conflictos ambientales del departamento, sin embargo, hasta la fecha son organismos que fueron creados en los municipios pero que poco han sido potenciados por las administraciones en el Meta. A pesar de ello son figuras que pueden servir como escenarios de participación política en temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo de los ecosistemas estratégicos del departamento.

### Los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada

Son organismos encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia de acuerdo con los mandatos de la ley 387 de 1997. En estos comités participan el gobernador o el alcalde y representantes del Ejército, la Policía, el ICBF, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Iglesia y de la población desplazada. Las acciones que despliegan estos comités son de carácter jurídico, preventivo y asistencial. Aunque los comités representan una alternativa para la búsqueda de soluciones de las necesidades y problemáticas de la población desplazada la efectividad del organismo está seriamente cuestionada, entre otras cosas, por la falta de incidencia de las organizaciones sociales y la alta presencia e incidencia de las instituciones armadas -como Ejército y Policía, entidades que se han visto involucradas en el desplazamiento de comunidades y otras graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Otro factor que dificulta las gestiones y acciones de este organismo son el debilitamiento de las organizaciones de víctimas que han sido permeadas por clientelas y prebendas y, en algunos casos, la utilización de esta condición para acceder a derechos sociales.

### Los Consejos Municipales de Paz

Esta respuesta institucional se constituyen dando cumplimiento a la ley 434 de 1998. Su artículo primero reza que “La política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los periodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional...” Estos consejos están vinculados al Consejo Nacional de Paz donde la sociedad civil tiene la potestad de ser el órgano asesor y consultor del gobierno nacional en temas de paz. Su misión es la de propender por el logro y mantenimiento de la paz y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. En el Meta los Consejos de paz a nivel departamental y municipal fueron una de las propuestas impulsadas por el Gobernador Alan Jara en su primer mandato por elección popular, en el año de 1998. En dicha administración se creó la Consejería de Paz que promovió la creación de los consejos municipales de paz y la conformación del denominado “Bloque Oriental por la Paz” integrado por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare. Entre otras acciones desplegadas por este organismo, en el marco de los diálogos del Caguán, están la gestión de la liberación del alcalde de Mesetas, Olmes Lucio Pulgarín, secuestrado por las Farc-ep en 1998.

Los Consejos de Paz son una respuesta institucional exitosa para el caso del Meta, sin embargo esta fue desestimada después del fin de los diálogos del Caguán, en febrero de 2002, y en muchos municipios sus integrantes fueron estigmatizados durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, conllevando así a su desaparición. En la actualidad esta respuesta adquiere gran relevancia y se presenta como una alternativa para la participación de la sociedad civil en temas de paz con un enfoque territorial. Incluso en un eventual fin de las hostilidades e inicio de un proceso de pos-conflicto puede ser el escenario adecuado para replicar los diálogos de la Habana a escala departamental y municipal, pensando incluso en la presencia de futuros excombatientes de las partes en conflicto.

### El Comité Inter-gremial del Meta

Es una respuesta impulsada desde los sectores productivos del Meta para la articulación y cooperación interinstitucional en temas de desarrollo estratégico regional, productividad y competitividad. Allí tienen asiento los representantes de los sectores productivos, asociaciones y gremios para la interlocución

y planeación estratégica con los entes administrativos locales y departamentales e instituciones universitarias y centros de investigación. La visión de este escenario es la de generar las alianzas necesarias para la competitividad regional del oriente colombiano frente a los retos del mercado local e internacional. Promueve además la vinculación económica, política y social de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare. Actualmente el comité impulsa estrategias de cooperación con los departamentos del piedemonte amazónico Caquetá, Huila, Cundinamarca, Putumayo y Tolima. A nivel gremial e intersectorial este comité puede representar una oportunidad para el desarrollo regional en un posible escenario de pos-conflicto siempre y cuando su estructura se abra a sectores minoritarios de pequeños agricultores, asociaciones productivas y organizaciones sociales que puedan ser vinculadas a las alianzas para la productividad que interconecte las pequeñas economías con las economías regionales e internacionales.

### Respuestas e intervenciones de la sociedad civil

Las iniciativas de la sociedad civil para la paz, el desarrollo rural y los derechos humanos conforman un importante mapa de respuestas, propuestas e intervenciones que se han venido gestando desde la base como alternativas para la construcción de una vida digna, el respeto a los Derechos Humanos, la convivencia y la búsqueda e implementación de proyectos y procesos que permitan a comunidades y ciudadanos construir una vida en igualdad, con inclusión y reconocimiento de los aportes que han realizado los sectores trabajadores, campesinos, las mujeres, los jóvenes y todas las organizaciones que han recibido por décadas los efectos directos del conflicto armado. Estas respuestas son verdaderas iniciativas de paz que han logrado sobrevivir a las acciones de los armados que han arrebatado la vida de líderes, familias y organizaciones. Algunas de ellas hacen parte de este mapa de respuesta de los actores del Meta y constituyen los avances más significativos en materia de experiencias para el pos-conflicto.

### Mucapoc- la Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano

Es una iniciativa que nace en el año 2011 desde las organizaciones campesinas y comunitarias de los departamentos del Oriente: Guaviare, Meta, Arauca, Guainía, Vaupes, Vichada, Casanare y parte del oriente de Boyacá y Cundinamarca. Su objetivo es ser una organización de segundo grado que articula a 75 organizaciones de base entorno a la defensa de los Derechos Humanos, la movilización social y el fortalecimiento de los procesos campesinos del Oriente colombiano. Esta Mesa de unidad está estructurada a partir de una secretaria técnica



y una comisión política, que impulsa la concertación entre organizaciones en procesos como las constituyentes por la paz y las zonas de reserva campesina para aportar a las negociaciones de paz y a la resolución de los problemas estructurales del país.

### Mesa de Tierras e Iniciativas Productivas de la Mesa Humanitaria

Es un espacio de reflexión de los campesinos en el tema de tierras, iniciativas productivas, de encuentro permanente, interinstitucional y gremial, de concertación con las entidades públicas responsables de la ejecución de políticas institucionales dirigidas a garantizar el acceso a la tierra y al desarrollo rural, con el acompañamiento de las entidades de control y protección<sup>18</sup>. La Mesa de Tierras es impulsada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) del Meta y la Mesa Humanitaria, quienes reciben el apoyo del PNUD y donde participan también entidades como el Incoder, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Ambiental Agraria, entre otros representantes de la institucionalidad que son convocadas por las organizaciones sociales que allí dialogan. A diferencia de las Mesas y Consejos interinstitucionales impulsadas por el gobierno, donde las organizaciones sociales tienen un papel secundario, en la Mesa de Tierras las organizaciones de la sociedad civil tienen la dirección y la coordinación de los procesos que allí se desarrollan. Sin duda esta Mesa es una de las respuestas más significativas en el Meta que puede convertirse en referente para la construcción de alternativas y soluciones a los fenómenos que dieron origen al conflicto armado, como son la desigualdad en la distribución de la tierra, la exclusión política y la pobreza.

### Comités de Conciliación y Derechos Humanos en JAC y ASOJUNTAS

Son los organismos comunitarios que han construido, durante más de cinco décadas, la autoridad y la legitimidad para tramitar y resolver los conflictos sociales y políticos de las regiones en sus centros urbanos y rurales. Las JAC se han convertido en un referente de convivencia y protección de los Derechos Humanos además de impulsar estrategias de desarrollo rural que garanticen la vida digna de las poblaciones frente a la ausencia del Estado Social de Derechos y las vulneraciones de los grupos armados ilegales. Dentro de sus estructuras organizativas existen los denominados comités de conciliación y derechos humanos que se encargan de resolver los problemas y conflictos que se presentan en las cotidianidades de los territorios que padecen el conflicto armado. Son estas, quizá, las experiencias más solidas en construcción de paz desde la base.

18 GIZ. (2012) Ordenamiento territorial y ambiental en el área de manejo espacial de la Macarena. Colombia. Pág. 79.

Las Juntas y Asojuntas cuentan con instrumentos que regulan la convivencia en las comunidades donde difícilmente existe la potestad de una autoridad civil del Estado, por ello han debido diseñar manuales de convivencia que son aprobados comunitariamente y son cumplidos a cabalidad para lograr generar ambientes de paz que solo se ven perturbados por las acciones de los actores armados, legales e ilegales. Estos comités son respuestas que nacen desde las comunidades para resolver en el día a día las manifestaciones de los conflictos estructurales del país y la región. El Meta, particularmente, cuenta con una amplia experiencia en conciliación, resolución alternativa de conflictos y defensa de los Derechos Humanos y el DIH, esto se puede evidenciar en municipios como Uribe, Mesetas, Vistahermosa, La Macarena, Puerto Concordia, entre otros, que frente a las graves dinámicas del conflicto armado han diseñado las alternativas para construir una paz con enfoque territorial. Debe saberse además que los mayores riesgos y amenazas a estas respuestas comunitarias han sido las violaciones a los derechos humanos mediante la estigmatización, los asesinatos, las capturas masivas, las desapariciones de presidentes de juntas y directivos de Asojuntas que han sufrido estos flagelos, como se comprobó en los trabajos de campo realizados para esta investigación.

### La Mesa Humanitaria del Meta

Es un ente de articulación de diferentes sectores de la sociedad civil que nació en el 2005 con el objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el departamento. Sus metas principales son contribuir en la visibilización de los grupos de población vulnerable más afectados por la violación de sus derechos humanos (mujeres, campesinos, desplazados, indígenas, infancia, afros, víctimas y jóvenes) y en sus acciones de empoderamiento y defensa de sus derechos; incidir en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas; y construir sujetos sociales a partir de procesos de formación en y para los derechos humanos y procesos de movilización social. Dentro de la Mesa funcionan otras Mesas como la de Tierras –que se mencionó anteriormente–, la de Jóvenes, Mujeres y Medios.

### Intervenciones de tres tipos: estatal, intergremial y social-popular

Las hojas de ruta no son una idea nueva en la historia de la resolución de conflictos del sistema mundo, incluso suelen tener características comunes y experiencias exitosas pero largas y a veces traumáticas e incurables después de procesos históricos de violencia como los vividos en Colombia, Nigeria, Afganistán y

otros pueblos que se han desangrado y no ameritan redundar en este texto. Las experiencias estudiadas para el Meta, como un caso singular pero significativo para toda Colombia, tienen otras características como el hecho de haber surgido en medio del agudo conflicto y desde enfoques diversos y divergentes, como los Gremiales–Estatales y los Sociales-Populares.

La categoría de un tipo de respuesta/intervención de carácter Estatal – Gremial se refiere al conjunto de iniciativas desplegadas por el Estado en cumplimiento de sus mandatos constitucionales y por los gremios económicos como actores productivos y políticos, ambos con redes de poder y sistemas de oportunidades que en alianza e interacción pueden generar nuevas realidades desde las ya dadas, impulsadas, debe decirse, por intereses económicos y voluntades políticas. El criterio político de este tipo de respuestas es dicotómico, cohesiona y fragmenta los escenarios y las intervenciones de acuerdo con las coyunturas electorales y los procesos políticos, donde el peso de las ideologías, las filiaciones y militancias o las prebendas se superponen a las agendas comunes o las hojas de ruta creadas en los escenarios de actuación Empresa – Estado. Así mismo, los cambios administrativos y burocráticos dentro del aparato del Estado, ya sea por el transcurso de gobiernos y los relevos de los cargos, impiden que los procesos de planificación se desarrollen con cierta continuidad y coherencia. Esto se evidencia en los diálogos con funcionarios y delegados de los Comités y Consejos, quienes afirman que los continuos relevos de los funcionarios o delegados a los escenarios obstaculizan el avance de los procesos de concertación y las agendas de trabajo intersectorial. Este es un pequeño reflejo de los gabinetes de los últimos gobiernos donde difícilmente los ministerios inician y terminan sus periodos cumpliendo las metas de sus mandatos. Este tipo de situaciones atienden a falencias en los criterios de eficiencia organizativa y a los criterios políticos de tendencias partidistas que se oponen al cambio estructural, como las ideologías liberales, o incluso al cambio paulatino, como las ideologías conservadoras.

Las respuestas de tipo Social-Popular tiene un enfoque diferencial, territorial, diverso y humanitario. Aunque se diferencia del enfoque transaccional y vertical, también presenta tintes ortodoxos y burocráticos, quizá por la incidencia de estructuras históricas como los partidos comunistas, socialistas, obreros o expresiones clasistas y, sin duda, por los conflictos de intereses y de poderes entre las organizaciones y sectores sociales, populares, democráticos y de izquierda en Colombia. Son también conocidos los conflictos y rivalidades entre los sectores progresistas y de oposición como también son referidos todos los incumplimientos de los acuerdos firmados entre los sectores sociales y los movimientos populares (indígenas, afros,

campesinos, estudiantes, etc.) con el Estado y los representantes de gremios y partidos. Es tal vez este perpetuo incumplimiento de los acuerdos a toda escala de los conflictos y negociaciones lo que ha desesperanzado a algunos sectores de la sociedad colombiana y los ha hecho escépticos de un acuerdo de paz. Esto se refleja cada fin de año en las negociaciones del salario mínimo en Colombia, que nunca cumple las expectativas de los más pobres del departamento y el país.

Los conflictos inherentes a los diversos enfoques políticos y económicos en el juego de los actores estatales y gremiales y los actores sociales y populares son el reflejo de dos modelos de sociedad que cohabitan, se confrontan y se superponen en una misma realidad y un territorio común. Aquí radica uno de los principales aspectos que complejizan los conflictos colombianos que no encuentran la manera de negociar un modelo de país donde coexistan los diferentes paradigmas propios de una sociedad diversa y pluricultural. Sin embargo, también allí se esconden las alternativas para la construcción de una Colombia heterogénea que comprenda la existencia de múltiples realidades territorializadas y arraigadas a formas identitarias diferenciales que pueden subsistir armoniosamente, si encuentran formas alternativas a la violencia para mediar los conflictos de intereses y los idearios de desarrollo, gobernabilidad y autonomía que reclama cada sector en Colombia. La gran dificultad está en entender que los modelos y enfoques de desarrollo pueden hallar nodos de encuentro y concertación para realidades que no pueden ser homogenizadas sino, más bien, complementadas para edificar una sociedad con un enfoque de género, un enfoque diferencial y un enfoque territorial.

### Algunas acciones de los actores para la creación de paz

Las acciones de construcción de paz en Colombia se definen en gran parte por el enfoque de los actores y la comprensión e interpretación que tiene los mismos sobre las causas y los efectos del conflicto armado. Sus respuestas en este sentido tienden a ser vivo reflejo de los idearios políticos y económicos que representan a cada actor. Así, por ejemplo, de acuerdo con el enfoque que los partidos de gobierno tengan sobre el conflicto son las políticas implementadas que han girado, desde más de dos décadas, entre las alternativas de la guerra y la paz. Cada periodo de gobierno los colombianos ensayan una fórmula distinta para terminar con el conflicto armado, por ejemplo, durante los periodos consecutivos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el enfoque guerrillero basado en la tesis de la derrota militar del enemigo y de la política de la acción integral contrainsurgente desplegó todas las acciones posibles encaminadas a resolver los conflictos por medio de la vía militar, es decir finalizar el conflicto aumentando el conflicto. Antes y

después de estos gobiernos, durante los periodos presidenciales de Andrés Pastrana (2008 - 2002) y de Juan Manuel Santos (2011 - 2014), el enfoque negociador se postuló como la estrategia para finalizar la guerra. No obstante la voluntad de las partes, en el primero de los casos se fracasó en la posibilidad de acabar con la guerra; y en el segundo, que se refiere al actual proceso de paz, aún continúan los diálogos de paz y persiste la negativa de un cese bilateral del fuego, lo que dificulta la creación de un entorno propicio para la paz.

Otra de las manifestaciones de los actores -que además vulneran el proceso de paz de la Habana- es la reiterada violación a los Derechos Humanos de los sectores de oposición que se manifiesta, principalmente, en los asesinatos selectivos de los dirigentes de movimientos políticos como la Marcha Patriótica a nivel nacional y departamental, los asesinatos a los miembros de Mucapoc, durante los años 2012 y 2013, y las capturas masivas a dirigentes sociales de La Macarena, Mesetas y Uribe. En este último municipio fueron detenidos arbitrariamente (2013) el Alcalde Marcelino Chacón (2011-2015) y varios miembros de su gabinete de gobierno acusados de ser auxiliares de la insurgencia en un intento por desestructurar un proceso comunal que llevó a los líderes campesinos a ganar la alcaldía municipal y varias curules en el consejo. Como era de esperarse, el alcalde detenido tuvo que ser liberado casi un año después de su captura al comprobar su inocencia. Sin embargo el daño hecho a las organizaciones sociales fue tan alto que difícilmente lograrán reponerse del estigma y los daños físicos y morales causados por esta acción que amenaza los procesos democráticos que se construyen desde las bases sociales en el Meta.

Adicionalmente, otras manifestaciones de los actores son las estigmatizaciones, como ocurrió durante una movilización a Bogotá, realizada el 9 de abril de 2013, cuando fue acusado el movimiento Marcha Patriótica de recibir apoyo de la guerrilla. Después muchos de sus principales líderes fueron encarcelados luego de liderar jornadas de movilización, como fue el caso del dirigente campesino Huber Ballesteros.

A pesar de todo, las comunidades continúan apostándole a la paz, diseñando estrategias que favorezcan un entorno y un contexto propicio para la solución negociada del conflicto armado y, para ello, se han acogido a instrumentos constitucionales que aportan a la construcción de la paz duradera con dignidad y desarrollo rural. Dos de estos instrumentos se han convertido, para unos, en la esperanza para edificar territorios de paz y, para otros, en amenazas a sus intereses de poder. Estos instrumentos son las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) y las Constituyentes por la Paz.

### Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

*Son un instrumento de ordenamiento consagrado en la ley 160 de 1996 que les define como un mecanismo encaminado a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento regulando la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. Sus objetivos son fomentar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. Asimismo, buscan crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas rurales; crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y de decisión local y regional; superar las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden social y económico; la preservación del orden público y, apoyar la sustitución de los cultivos ilícitos (acuerdo 24 de 1996. art.29.)*

Lamentablemente estos objetivos han encontrado grandes detractores que señalan a la alternativa constitucional como “Repúblicas” refiriéndose al estigma de “Repúblicas independientes”, que fue utilizado en los años de 1960 para argumentar el intento de exterminio de poblaciones campesinas y que llevaron al surgimiento de las autodefensas campesinas, que posteriormente se denominarían Farc-ep. En el Meta existen dos Zonas de Reserva Campesina de hecho, es decir que solo falta la aprobación del Incoder para que sean reconocidas legalmente. Estas son: la ZRC del Losada – Guayabero, situada en la zona de litigio entre los municipios de La Macarena – Meta y San Vicente del Caguán – Caquetá y, la ZRC de la región bajo Ariari – Güejar – Cafre, en las inmediaciones del municipio de Puerto Rico. Además, actualmente se encuentra en proceso de constitución la Zona de los Llanos del Yarí en el Municipio de La Macarena. Las dos primeras, a pesar de haber cumplido los requisitos desde hace más de 10 años, el Incoder aun no aprueba la resolución final “por falta de voluntad política de la junta directiva”, según los campesinos.

### Las Constituyentes por la paz con justicia social

Son una iniciativa de la sociedad civil, que como constituyente primario pretende sentar las bases para la construcción de la

solución política y la paz con justicia social en Colombia. Basados en el antecedente de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución Política de Colombia de 1991, la ciudadanía se ha venido reuniendo en regiones, municipios y veredas para construir mandatos que dirección en las decisiones políticas para así garantizar que se firme una paz duradera y estable con las garantías inherentes a un Estado Social de Derecho. Desde el 20 de febrero de 2013, cuando se realizó el lanzamiento nacional de las constituyentes por la paz en todo Colombia, hombres y mujeres asumieron el reto de realizar en cada localidad el ejercicio deliberativo que diera como resultado propuestas y agendas de movilización para la búsqueda de las soluciones identificadas para los problemas que les aqueja en

cada territorio. Esto se realizó a pesar de las voces que señalaron la iniciativa como una estrategia de la subversión para cooptar las organizaciones sociales. Tales señalamientos provenientes de los representantes de partidos políticos tradicionales, miembros de las Fuerzas Armadas y grupos armados al margen de la ley.

Las acciones señaladas son alternativas que aportan a la construcción de un entorno propicio para la paz en el Meta y Colombia y su éxito depende de las garantías que promueva el Estado y las veedurías que se extiendan desde los países amigos para evitar que este nuevo intento por firmar la paz y poner fin al conflicto termine como otros.

### 3 Análisis de vacíos y brechas – posibles estrategias y recomendaciones.

Para facilitar la comprensión del análisis de los actores regionales, asociado a posibles estrategias y recomendaciones, se ordena la información en matrices, que se detallan más adelante. En las columnas verticales aparecen los nombre genéricos de los actores y en las columnas horizontales sus posiciones, expectativas y vacíos según los componentes de la metodología CDA. Importante tener en cuenta que se presentaron recomendaciones sobre cada particular en el capítulo anterior y en este se amplían con mayores precisiones.

#### Organizaciones sociales

La principal recomendación al respecto se refiere se refiere a la necesidad de integrar a la institucionalidad formal ese gran acumulado de conocimientos y prácticas entorno a la participación política, la vida comunitaria y social, la economía y el medio ambiente de las organizaciones sociales del Meta. Esto constituiría una verdadera reinserción social e institucional de territorios y comunidades marginadas. De paso ayudaría a superar una carga de estigmatización, nacida y acrecentada con el conflicto armado.

El apoyo que las organizaciones sociales del Meta han realizado al proceso de paz y la salida negociada al conflicto armado no ha estado exento de señalamientos por parte de personalidades políticas, funcionarios y medios de comunicación. Mientras los líderes sociales y sus comunidades participan activamente de los foros, asambleas y movilizaciones convocadas en el marco del proceso de paz, como una iniciativa que pretende respaldar el fin del conflicto, otros sectores sindicados a las organizaciones de ser infiltradas por la guerrilla y sus dirigentes son judicializados por el mismo señalamiento

En algunos círculos oficiales y sociales, las iniciativas ciudadanas y los diferentes repertorios empleados para apoyar el proceso de paz son considerados una amenaza. Estos círculos perciben todavía la realidad colombiana desde la perspectiva del “enemigo público”, que ha contribuido a la agudización del conflicto y la radicalización de las partes. Por el contrario, se debe insistir en considerar las iniciativas ciudadanas como una fortaleza del proceso de paz y como un actor decisivo en los temas de negociación, en la transición al pos-conflicto y la construcción de una cultura de paz. El primer paso para ello es reconocer iniciativas como las Constituyentes por la paz que se han venido realizando en el Meta.



## Meta: análisis de la conflictividades y construcción de paz

Así mismo, las organizaciones sociales tienen enormes acumulados que pueden cimentar una cultura de paz. Éstas han elaborado, por ejemplo, instrumentos para la regulación de conflictos locales (manuales de convivencia) y han puesto

en práctica procesos de conciliación y reconciliación como los gestores humanitarios, las secretarías y comités de derechos humanos, que lamentablemente han sido asociados a la guerrilla por coexistir en un mismo tiempo y espacio.

En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Organizaciones Sociales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han diseñado diversas estrategias para la participación política, que van desde la movilización y la protesta hasta la cooperación con partidos políticos y cogestión gubernamental.</li> <li>- Han sido permanentes víctimas de la violencia socio política cometida por todos los actores.</li> <li>- Han tenido experiencias de gobierno en municipalidades durante la década de los 80 en Vistahermosa Mesetas, El Castillo, Lejanías con la UP y en la actualidad en La Uribe, donde ganaron las elecciones de 2011 con una coalición de comunales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poseen mecanismos alternativos de justicia y resolución de conflictos que les ha permitido superar la ausencia de justicia estatal y la radicalidad de la justicia militar de los actores armados legales e ilegales.</li> <li>- Han construido protocolos y códigos para regular su vida comunitaria, plasmados en manuales de convivencia municipales y veredales que han servido para construir una cultura de paz en medio de la guerra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se encargan de la cohesión y el desarrollo social y humano de las comunidades frente a la ausencia de garantías de derechos en regiones donde el conflicto hace que el Estado tenga una presencia discontinua.</li> <li>- Cuentan con repertorios de actuación cristalizados por los años que sirven para tramitar sus demandas sociales y resolver sus principales necesidades.</li> <li>- Poseen rupturas en sus tejidos asociativos y comunicativos que han dificultado el desarrollo de las organizaciones sociales y sus planes de vida.</li> <li>- El contexto de miseria y exclusión ha llevado a la descomposición de sus comunidades, lo que impacta negativamente en las organizaciones sociales, especialmente las urbanas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carecen de infraestructura y recursos logísticos y humanos para el logro de sus fines.</li> <li>- Algunas promovieron procesos productivos y alianzas comerciales en áreas como ganadería, arroz, cacao, frutales y café en la zona cordillerana, pero los efectos del conflicto armado llevaron a la desaparición de la gran mayoría de estas iniciativas. Algunas tratan de reconstruirse en la actualidad.</li> <li>- Entre las afectaciones del conflicto y la crisis social se cuentan los patrimonios de las organizaciones sociales que han sido violentadas por los actores del conflicto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han logrado generar mecanismos de protección de los recursos naturales</li> <li>- Se han convertido en alternativa para resolver los conflictos por la tierra entre colonos y Estado en Parque naturales y bosques baldíos.</li> <li>- Su última intervención en la resolución de los conflictos ambientales y territoriales fue la participación en la aclaración del conflicto en la zona de litigio Meta-Guaviare y Caquetá.</li> <li>- Existen expresiones organizativas de tipo ambiental en todo el territorio departamental articulados a iniciativas municipales y nacionales.</li> </ul>

### Instituciones oficiales

La principal recomendación al respecto sería promover para que se les otorgue mayor protagonismo y responsabilidades en temas de paz y desarrollo. Los municipios y las gobernaciones se han descargado en el Gobierno nacional con sede en Bogotá para la definición de asuntos clave para el bienestar de sus habitantes. No ha existido la complementariedad ni la subsidiaridad previstas por la ley. Durante los últimos diez años la problemática emblemática han sido los cultivos de uso ilícito. Los gobiernos seccionales tampoco opinan mucho en asuntos de desarrollo territorial y se limitan a dar cumplimiento protocolario de los escenarios e instrumentos que podrían posibilitar nodos

esenciales de la política local, como son los derechos de las víctimas, la justicia transicional y la cultura de paz.

Para superar esta limitada actuación de las instituciones oficiales regionales es necesario reactivar escenarios como los Consejos Municipales de Paz, los Consejos Territoriales de Planeación, los Consejos Municipales y seccionales de desarrollo rural, mediante la designación de funcionarios competentes, con capacidad de decisión, voluntad política y recursos humanos y económicos que puedan convertir estos espacios en verdaderos caminos incluyentes e integrales para el desarrollo territorial y la paz duradera.

El apoyo al proceso de paz debe ser una directriz general para la institucionalidad nacional, departamental y municipal, en coherencia con los propósitos y la planeación estatal que no deberían ser fracturados por intereses políticos o partidistas

regionales que obstruyen la voluntad del Gobierno nacional y ponen en riesgo los acuerdos que se puedan generar en la Habana.

En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor Clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Instituciones Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuentan con sistemas de subordinación de jefes políticos nacionales – departamentales y municipales.</li> <li>- La mayoría de los casos se han sido permeadas por las redes de clientelas que caracterizan el sistema político del Meta.</li> <li>- Fueron penetradas por el narcotráfico y el paramilitarismo especialmente antes del año 2006</li> <li>- Algunos municipios y otras instituciones oficiales lograron mantenerse intactas ante la incursión de la ilegalidad vivida en el departamento.</li> <li>- La última administración de Alan Jara ha logrado depurar la institucionalidad de vicios de ilegalidad en todas las escalas de actuación institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mayor de las veces habían sido inoperantes en materia de justicia.</li> <li>- La representación del ministerio público en los municipios fue amedrentada o corrompida por los grupos paramilitares.</li> <li>- Con frecuencia las fiscalías locales, los juzgados municipales y las inspecciones de policía estaban ligados a intereses políticos emanados de las alcaldías. Y en algunos lugares presionados por los grupos armados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Con algunas excepciones, se caracterizan por su baja capacidad de planificación y de integración de la población civil a sus actividades de gobierno.</li> <li>- En la mayor parte de los municipios persisten visibles niveles de pobreza y bajos niveles de inversión en salud, educación y saneamiento básico.</li> <li>- Han puesto en marcha planes y estrategias para la superación de la pobreza y la exclusión con importantes logros en los municipios con algunas excepciones como es el sur del Meta.</li> <li>- Han implementado escenarios para la interacción de institución – ciudadanía – empresa pero se han visto obstaculizados por la ineficiencia de funcionarios y la falta de voluntad política de muchos actores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuentan con alta dependencia presupuestal del nivel central que les impide generar una dinámica propia de inversión municipal y departamental.</li> <li>- Muestra de la tendencia anterior es el impacto de la política de regalías que sustrajo partidas considerables del PIB de muchos municipios.</li> <li>- No logran consolidar una estrategia o política pública regional para el desarrollo económico y humano que incluya los sectores pequeños y medianos a la economía nacional y la competitividad departamental.</li> <li>- En algunos municipios promueven alianzas productivas a nivel departamental como iniciativas de competitividad y desarrollo local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -En ocasiones, los planes de desarrollo o de ordenamiento territorial han sido nominales y muchas veces inoperantes; no han guiado la intervención y la inversión pública en los municipios.</li> <li>- En ocasiones, han carecido de voluntad o capacidad de actuar como autoridades ambientales frente a asuntos tan complejos como el auge de la producción coquera, ganadera, petrolera o el deterioro de las fuentes hídricas.</li> <li>- Existen conflictos de injerencia entre las entidades encargadas del manejo ambiental del orden nacional, departamental y local quienes se superponen y dificultan la resolución de conflicto como los de Parque naturales y los colonos que les habitan.</li> </ul>

### Partidos y movimientos políticos

En el Meta, muchos de los partidos políticos han estado de espaldas a la realidad social de amplios territorios donde prima la pobreza. Su dinámica ha girado en torno a los procesos electorales y al acceso a las administraciones municipales por cuanto esto implica manejo de apreciables recursos para la contratación. Hoy en día, el crecimiento de la actividad petrolera

impulsa aun más esta tendencia. Se recomienda, entonces, apoyar los procesos organizativos y de participación ciudadana en los municipios, como forma de contrarrestar esta tendencia. Aquí los nuevos movimientos sociales y políticos del Meta (jóvenes, mujeres, grupos étnicos, ecologistas) pueden jugar un papel clave.

## Meta: análisis de la conflictividades y construcción de paz

La apertura que pueda lograr el sistema político en el marco del proceso de paz contribuiría a definir una estructura democrática que garantice un real Estado Social de Derecho; la justicia transicional que promueva la reinserción a la vida civil de los combatientes legales e ilegales y la construcción de una cultura de paz, de la verdad y la no repetición. Para ello la inclusión de sectores minoritarios, el reconocimiento de movimientos alternativos, de sectores populares y de oposición debe ser prioridad de las políticas de Estado. De igual forma los partidos y movimientos políticos tradicionales deben ser regulados y fiscalizados para evitar que sean permeados por

estructuras ilegales, como ha ocurrido en el pasado, en altos cargos de la administración pública en el Meta. En este sentido, los directorios y colectividades deben ser depurados del manto de ilegalidad que actualmente les cubre al tener representantes investigados y judicializados por diferentes delitos que empañan la legitimidad de los partidos. Esta es una recomendación crucial para evitar el surgimiento de alianzas con grupos armados y redes delincuenciales que históricamente han sido impulsados y auspiciados por las redes políticas de departamentos como el Meta, así como del Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia, Magdalena o Córdoba.

En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor Clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Partidos y Movimientos políticos	<p>- Cuentan con estructuras cerradas, burocráticas y clientelares con redes nacionales y locales que, muchas veces, se conjugan con la ilegalidad para el favorecimiento de sus campañas y partidos.</p> <p>- Se ha generado la emergencia de nuevas expresiones políticas como movimientos y coaliciones que buscan alternativas de participación frente al agotamiento de los partidos tradicionales.</p> <p>- Se han instaurado en el departamento casas políticas como el Liberalismo, que han gobernado repetidas veces pero fueron debilitados por nexos de algunos de sus representantes con la ilegalidad</p>	<p>- Existen en el Meta representantes de partidos políticos investigados por la justicia por contraer nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes y otros hechos que han afectado en el orden municipal y departamental.</p> <p>- Así mismo muchos casos de líderes de oposición y dirigentes campesinos han sido condenados o detenidos arbitrariamente al ser sindicados de pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo. Muchos de ellos son absueltos por su inocencia.</p>	<p>- Ha sido la bandera de sus campañas y plataformas políticas que identifican los problemas y reformas pero fracasan en la gestión y ejecución de los proyectos sociales.</p> <p>- Las redes sociales de los partidos políticos actúan como sistemas de prebendas y clientelas basados en barones electorales y grandes inversiones en campañas que impactan la voluntad de voto de los sectores menos favorecidos.</p> <p>- Han surgido movimientos y organizaciones sociales con nuevas reivindicaciones (étnicas, de género, jóvenes, ecológicas) en el departamento.</p>	<p>- Existen nexos históricos entre las casas políticas y económicas para gobernar en el departamento del Meta.</p> <p>- Estas alianzas, en su mayoría, fueron permeadas por los dineros del narcotráfico que perjudicaron muchos políticos que hoy son investigados.</p> <p>- Existe una constante al crecimiento de los costos de campaña en cada certamen electoral.</p>	<p>- Existen referentes de favorecimiento de políticos a empresas nacionales y multinacionales para la explotación de los recursos naturales y la adquisición de tierras públicas y privadas.</p> <p>- Existe alta incidencia de partidos políticos sobre las corporaciones autónomas y otras instituciones encargadas del ordenamiento ambiental.</p>

### Organizaciones no gubernamentales

Sería deseable que entre estas entidades existiera mayor comunicación e interlocución, en momentos en que se avecina un periodo de pos-conflicto; que entre ellas se propiciaran debates y repuestas en torno a lo que significará este periodo en la vida de los metenses. Ojalá obraran de manera más abierta e incluyente con nuevos sectores sociales y políticos que comienzan a solicitar mayor participación y visibilidad pública.

Las ONG pueden propiciar la interlocución y facilitar la constitución de alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, la academia, los sectores productivos y los gremios económicos. Hasta el momento, existen escenarios regionales de interacción donde la participación de las organizaciones sociales de base es mínima; sin embargo, en un nuevo contexto de pos-conflicto se convierten en un potencial para generar procesos de desarrollo local y una cultura de paz que garantice el fin del conflicto y el no resurgimiento

de expresiones armadas y de la violencia política. Así mismo en estas organizaciones la construcción de una paz duradera debe ser prioritaria en sus metas y propósitos y para ello deben fortalecerse los escenarios institucionales oficiales y de la sociedad civil, al tiempo que se desestimula la participación en alianzas que propician la guerra, como ocurre con las unidades de consolidación territorial que concentran la gestión de la cooperación internacional y la intervención en los territorios del Sur del Meta.

Así mismo la actuación de las ONG debe procurar no remplazar o invisibilizar las organizaciones y procesos de base que, en ocasiones, se ven afectados dado que las intervenciones externas despojan a los dirigentes locales de su capacidad de negociación e interlocución directa con organismos internacionales o con entidades oficiales. Esta situación lejos de empoderar a las comunidades y contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, termina permitiendo que las ONG hagan las veces de intermediarios sociales en proyectos, programas e inversiones nacionales y multilaterales.

En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor Clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Instituciones No Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han construido estrategias para la intervención en aspectos primordiales para la solución de los problemas estructurales como la pobreza, la paz, el desarrollo y la reconciliación.</li> <li>- Han propiciado la creación de escenarios de participación ciudadana y la interlocución entre actores interinstitucionales.</li> <li>- Las respuestas e iniciativas a los conflictos en el Meta han generado Mesas, Consejos, Redes, Alianzas y otros espacios que promueven el diálogo y una cultura de paz y desarrollo local.</li> <li>- Algunas ONG han remplazado los liderazgos locales, acaparado recursos de cooperación y ejecutado proyectos con irregularidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algunas instituciones no oficiales y ONG han contribuido al fortalecimiento de la justicia y la seguridad humana en la región.</li> <li>- Han desarrollado procesos de fortalecimiento de la justicia local y la protección de los DH y el DIH.</li> <li>- Existen procesos de vigilancia y veeduría para el fortalecimiento de la justicia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han puesto en marcha planes y programas para el desarrollo social en las comunidades más vulnerables del departamento.</li> <li>- Promueven alianzas estratégicas entre la sociedad civil y el Estado aunque los niveles de eficacia de estos espacios sean aun muy bajos.</li> <li>- Han contribuido con recursos económicos y humanos a la atención de Derechos Humanos y la gobernabilidad.</li> <li>- Existen grandes inversiones realizadas en el componente social que han fracasado de acuerdo con la mirada de las comunidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han contribuido con recursos económicos y humanos a la superación de la pobreza y la creación de alianzas productivas por medio de iniciativas estatales como el Plan de Consolidación.</li> <li>- Formulan programas para estimular los sectores productivos.</li> <li>- Construyen escenarios para el diálogo regional en temas de competitividad y productividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las respuestas e intervenciones de algunas de estas instituciones se focalizan en la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos del Meta.</li> <li>- Existen ecosistemas como la Serranía de La Macarena que han puesto al Meta en las prioridades mundiales de protección natural donde las ONG de carácter ambiental formulan estrategias de intervención.</li> </ul>

**Gremios económicos**

Con este sector se debería llevar a cabo una estrategia encaminada a acercarlos a temas sociales y desarrollo regional. También ganar de ellos un mayor compromiso con la paz en el departamento. Son determinantes en las posiciones que puedan asumir los gobiernos departamentales y municipales de turno.

Los gremios económicos pueden contribuir al desarrollo territorial sostenible para la paz mediante la práctica de políticas

de responsabilidad social empresarial que propendan por la disminución de la pobreza, el aminoramiento de la brecha tecnológica, el mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y la inversión social en las áreas de influencia de las empresas del Meta. Esta iniciativa requiere la voluntad y decisión de los empresarios e industriales para fortalecer los procesos de paz e impedir que se repitan episodios donde empresas nacionales e extranjeras han financiado o se han beneficiado de las actuaciones de grupos ilegales, del despojo y acaparamiento de tierras y el desplazamiento o asesinato

## Meta: análisis de la conflictividades y construcción de paz

de líderes sindicales en todo el país. En el departamento, las empresas minero energéticas y la agroindustria tienen gran responsabilidad en la protección de los ecosistemas estratégicos y de las riquezas naturales, que se han visto vulnerados por la explotación industrial sin responsabilidad social, sustentabilidad y con bajos estándares de calidad y tecnología.

Los gremios económicos del Meta deben contribuir en los procesos de memoria histórica, verdad, reparación y no repetición para que se puedan resarcir los daños causados a la población civil por participar en alianzas con grupos armados ilegales o por beneficiarse directa e indirectamente del accionar de los mismos.

En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor Clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Gremios Económicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Están estrechamente ligados al orden creado por las élites políticas en la Orinoquía.</li> <li>- Los procesos políticos electorales están seriamente influenciados por los sectores económicos y gremiales que resultan determinantes en la configuración del poder político departamental.</li> <li>- De alta importancia simbólica dentro del orden regional.</li> <li>- Han sido importantes a la hora de apoyar las políticas de paz o de seguridad de los gobiernos de turno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algunas de estas instituciones fueron coaccionadas o sirvieron a los intereses temporales de los grupos armados irregulares (en especial paramilitares).</li> <li>- Históricamente están ligados a la generación de aparatos de seguridad privada (Convivir), muchos terminaron siendo grupos de autodefensas y paramilitares.</li> <li>- Aun así, se desconoce su grado de implicación en el fenómeno paramilitar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Han puesto en marcha importantes políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo en el Meta y la Orinoquía; sin embargo, sus resultados no han sido muy perdurables.</li> <li>- La crisis social y agraria que ha vivido el país en los últimos años ha perjudicado el mercado laboral y el bienestar social de los trabajadores, la productividad y la competitividad de las empresas.</li> <li>- Algunas empresas utilizan las políticas de responsabilidad social para la exoneración de impuestos más que por los compromisos sociales con otros sectores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula las grandes directrices de desarrollo y estimula al sector privado.</li> <li>- Formula política, programas, planes y proyectos atendiendo a los intereses más dinámicos y poderosos de la economía privada.</li> <li>- Algunos sectores han acaparado mercados en perjuicio de los pequeños productores.</li> <li>- La coexistencia de un modelo de desarrollo agroindustrial y un modelo de desarrollo campesino es el principal conflicto en el desarrollo histórico del Meta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El principal conflicto ambiental del departamento se genera por la explotación de los recursos naturales y el avance de la agroindustria sobre zonas de reserva, parques naturales y bosques de galería.</li> <li>- El incumplimiento de las licencias ambientales por parte de algunas empresas ha generado grandes crisis dentro de los gremios económicos del Meta, especialmente en la explotación de hidrocarburos.</li> </ul>

### Actores armados

Es clave mantener el monitoreo de sus comportamientos e incidencia dentro de un eventual proceso de paz. En un futuro no muy lejano, ex combatientes de la guerrilla podrían hacer parte de iniciativas civiles y públicas.

Para asegurar el desarme y la reintegración de los combatientes a la vida civil son fundamentales las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito y la erradicación concertada con las comunidades rurales. Sabido es que los ingresos que genera la economía ilegal en los territorios de conflictos se convirtieron en el principal cuello de botella que detiene la iniciativa del desarme de muchos grupos y combatientes. Éstos se pueden resistir a abandonar los réditos de la economía de la guerra en

un contexto de incertidumbre, pobreza y falta de oportunidades. También se deben considerar posibles escenarios donde los excombatientes se adapten gradualmente a la civilidad en un proceso de reinserción integral e interdisciplinar. Para otros excombatientes la alternativa puede ser la de integrarlos al sistema castrense oficial, en entidades como el Inpec o en actividades como la erradicación manual de cultivos ilícitos o la producción agrícola en zonas de reserva campesina.

Por otra parte, debe pensarse en estimular, en las filas de combatientes del Ejército colombiano, la dejación de armas, la reintegración a la vida civil de los soldados profesionales y la erradicación del servicio militar obligatorio que promueve la cultura de la guerra y la violencia.



En la siguiente tabla se amplía y sustentan estas recomendaciones.

Actor Clave	Componentes Estratégicos				
	Político	Justicia	Social	Económico	Ambiental
Actores Armados	<p>- Las estructuras de poder político han sido permeadas por los actores armados especialmente después de 1997 con la incursión de los grupos paramilitares a la región del Ariari</p> <p>- Los riesgos electorales por presencia de actores armados ha sido constante en los comicios departamentales y municipales. Los paramilitares han cooptado muchos de los poderes políticos municipales y departamentales y la guerrilla ha constreñido al elector en sus zonas de influencia, exceptuando los comicios del año 2011 cuando permitieron el ejercicio electoral en sus zonas de influencia.</p> <p>- Las amenazas, secuestros y asesinatos de dirigentes políticos en el departamento ha sido una manifestación histórica de los actores armados sobre la política.</p>	<p>- En muchos territorios han sido los encargados de impartir justicia militar sobre la sociedad civil generando crisis en la gobernabilidad de los municipios y el departamento.</p> <p>-La intervención de los grupos armados en la justicia ha llevado al debilitamiento de las estructuras del Estado, lo que genera una falta de garantías para el acceso a la justicia en los territorios de control insurgente o paramilitar.</p> <p>-La zona de distensión permitió la implementación de un modelo de justicia guerrillera, que terminó agravando la crisis humanitaria en el Meta. Posteriormente, la retoma militar del área despejada por el ejército se convirtió en escenario de re-victimización a partir de capturas masivas, falsos positivos y asesinatos selectivos</p>	<p>- Han sido determinantes en todas las relaciones sociales que se construyen en los territorios del Meta.</p> <p>- La vida social, cultural y asociativa ha sido marcada por las prácticas e imaginarios de la guerra que definen los conflictos sociales contemporáneos.</p> <p>- Las actuaciones de los actores armados y el control territorial han generado múltiples vínculos de la población civil, especialmente niños, niñas y jóvenes con los actores armados a partir de programas de cooperación o mediante el reclutamiento forzoso a la guerrilla y el Ejército nacional.</p>	<p>-Su presencia en los circuitos económicos y productivos ha tenido un efecto de doble filo: el crecimiento económico y el acceso a bienes por los réditos de la economía ilegal y la vinculación e investigación de empresarios que comprometieron su patrimonio apoyando o beneficiándose de algún grupo armado.</p> <p>- El auge de la agroindustria en la región se ha dado de manera paralela a la presencia de grupos paramilitares, con lo cual se dio una concentración de tierras a partir del desplazamiento y despojo de pequeños agricultores.</p> <p>- La economía del narcotráfico es el principal impulso de los grupos armados que se confrontan para controlar los corredores de la droga e implantar los impuestos a propietarios, comerciantes y narcotraficantes</p>	<p>- Los impactos de las hostilidades sobre el medio ambiente han causado efectos irreversibles sobre los ecosistemas y parques naturales del Meta.</p> <p>- La guerrilla ha regulado la explotación forestal en las regiones de influencia instaurando sanciones sobre la población civil y controlando actividades como la pesca y la caza de animales silvestres.</p> <p>- Han generado nuevas configuraciones de la estructura agraria que van desde la concentración de tierras con testaferrros hasta la reasignación de predios improductivos a pequeños campesino.</p> <p>- Los Parque naturales y otros bosques son lugares de retaguardia para los actores armados.</p>

## Meta: análisis de la conflictividades y construcción de paz

En razón de lo dicho arriba sobre los actores armados y, en especial, para el caso de los grupos guerrilleros, se adelanta la siguiente matriz teniendo en cuenta los puntos abordados en la

Mesa de Conversaciones de la Habana (columnas horizontales) y a las especificidades que podría tener este proceso dentro del territorio del Meta.

Actor	Ejes de Negociación para la Terminación del Conflicto Armado Colombiano					
	Política de Desarrollo Agrario Integral	Participación Política	Fin del Conflicto	Solución al Problema de las Drogas Ilícitas	Víctimas	Implementación, Verificación y Refrendación
Actores Armados (Grupos guerrilleros)	<p>- Las respuestas a los conflictos agrarios del país son la garantía para la reinserción de los combatientes de grupos armados legales e ilegales en un contexto que posibilite el acceso a la tierra, los incentivos a la productividad y el desarrollo rural y humano, el trabajo y el acceso a derechos y servicios, infraestructura y adecuación de tierras y un sistema de seguridad alimentaria. Estos son los aspectos principales de la negociación en este punto.</p> <p>- De acuerdo con el tipo de garantías que se puedan generar a partir de las conversaciones será importante el nivel de aceptación de la política de reintegración, que garantice el desarme y evite el resurgimiento de expresiones armadas.</p>	<p>- La terminación del conflicto exige la existencia de estrategias que garanticen la participación política de los grupos armados legales e ilegales a escala nacional, departamental y municipal, además de la apertura del sistema político y la cultura política, que permitan el acceso al debate y la representación política.</p> <p>- Debe considerarse como escenario de actuación las instituciones locales y los instrumentos como los Consejos Municipales de Paz.</p> <p>- Para la guerrilla son cruciales las garantías de no repetición del genocidio de la Unión Patriótica. El indicador al respecto a tener presente es la creciente victimización de las organizaciones y movimientos sociales y de oposición, que amenaza la posibilidad de fin del conflicto armado.</p>	<p>- Las estrategia pactada para el fin del conflicto determina los tiempos y las garantías para el cese bilateral del fuego y las hostilidades, la dejación de armas y la reintegración de los combatientes, la situación penal de los presos y retenidos de las partes en conflicto, las garantías de seguridad para los desmovilizados y la eficacia del Estado para combatir las organizaciones criminales que pueden atentar contra los desmovilizados o servir como catalizadores de la guerra, ampliando sus ejércitos con los excombatientes.</p> <p>- Este es quizá uno de los aspectos más críticos donde las faltas de garantías en un proceso de fin de conflicto puede terminar agravando la crisis humanitaria y configurando nuevos ejércitos y redes criminales que catalicen el terreno que sale del control de las Farc-ep.</p>	<p>- El narcotráfico es el principal financiador de la guerra en Colombia. Mientras no exista una política que permita erradicar el cultivo y la comercialización de la droga, el narcotráfico seguirá generando nichos de ilegalidad y fuentes de financiación de los grupos ilegales.</p> <p>- Dentro de las Farc-ep la renuncia a los beneficios de la droga es una de las grandes debilidades de los mandos medios, en los frentes que controlan los territorios productores de hoja de coca, lo que representa un riesgo en cuanto a la desestructuración que pueden sufrir los mandos que no asuman lo acordado y desconozcan la unidad de mando del Secretariado o los comandantes de Bloques.</p>	<p>- Para las Farc-ep las víctimas representan un factor adverso sobre su legitimidad en la sociedad colombiana, que reclama la verdad sobre muchas victimizaciones que la guerrilla se ha negado a reconocer.</p> <p>- En una posible política de verdad con los grupos guerrilleros, los niveles de victimización van a disparar los índices de violaciones a los Derechos Humanos en temas como la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado, los "ajusticiamientos" en sus propias filas y las desapariciones forzosas.</p> <p>-Para el gobierno y muchos partidos políticos las víctimas son "instrumentos" de presión sobre el proceso de paz al poner en duda el carácter político de esta guerrilla por las prácticas de guerra que justifican el calificativo de terroristas. Lo más neurálgico de este punto de la agenda es la política de la verdad y la memoria, que ha avanzado lentamente por la falta de voluntad de los desmovilizados y los riesgos de declarar sin garantías eficaces para la protección del informante</p>	<p>- Aun es incierta la figura que refrendará el acuerdo, aunque el país ha tenido experiencias significativas de negociación y refrendación que ha dejado a los ciudadanos instrumentos tan valiosos como la Constitución Política de 1991.</p> <p>- La insurgencia le apuesta a la iniciativa ciudadana de las constituyentes por la paz, que ha sido impulsada por la sociedad civil. El gobierno tiene su apuesta en un referéndum. Sin embargo la falta de garantías para el ejercicio electoral en Colombia impiden desarrollar cualquier tipo de comicios sin el riesgo electoral constante en las elecciones del país y del Meta.</p> <p>- En el Meta particularmente las iniciativas de constituyentes por la paz se vienen realizando en veredas y municipios desde el año 2013 y debería ser un referente a tener en cuenta.</p>

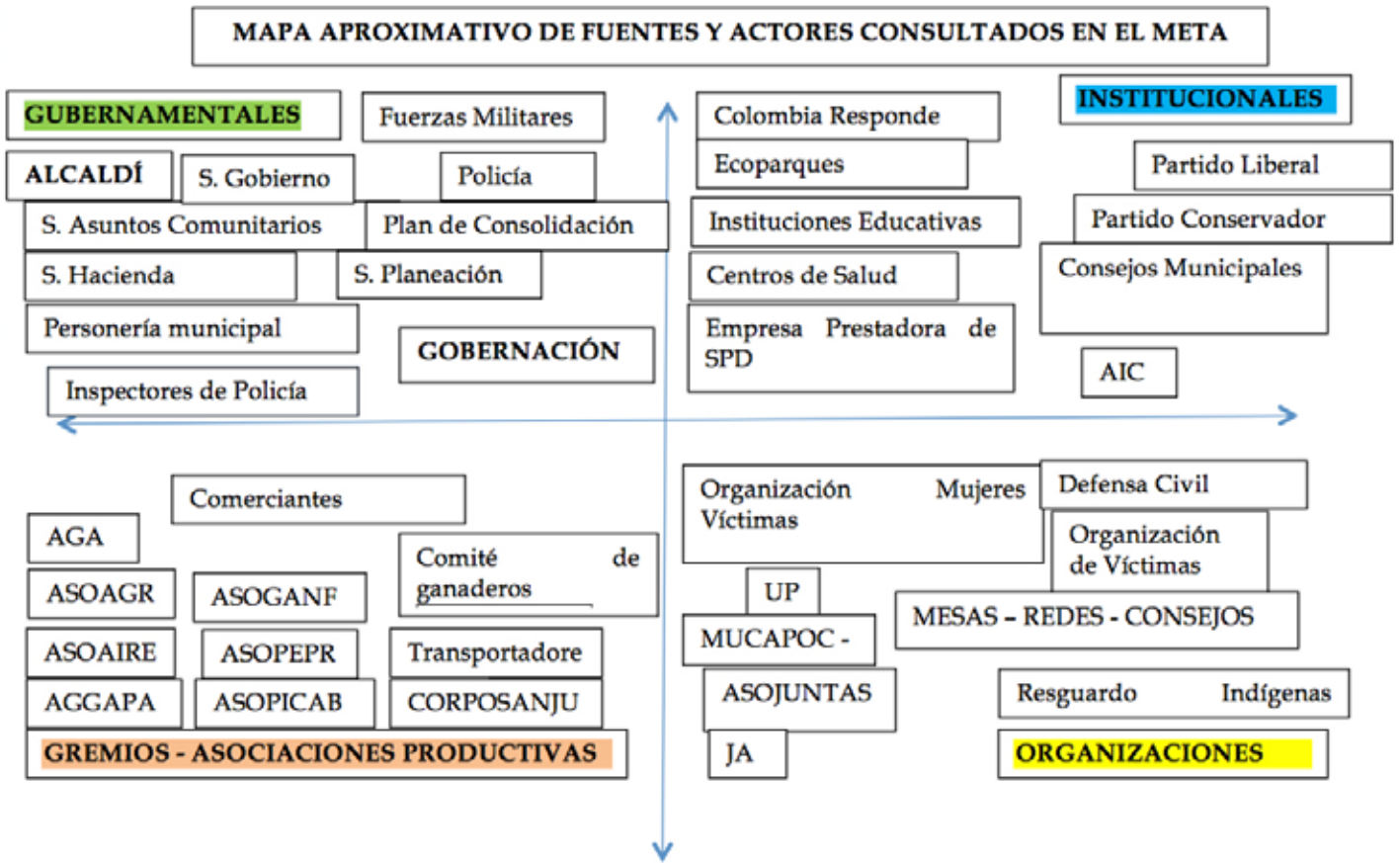
# Anexos.

## Anexo 1

I. Recolección de información secundaria: Teórica, periodística, institucional, gubernamental, comunitaria.

Fuentes consultadas	
Meta	Info
<b>Gubernamentales</b>	
✓ Fuerzas Militares	Diálogo
✓ Comandante de Policía	Diálogo
✓ Alcaldes Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa	Diálogo
✓ Secretarios de Gobierno	Diagnóstico de seguridad y convivencia
✓ Inspectores de Policía San Martín , Acacias	Información documental
✓ Secretarías de Hacienda Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa	Información de estructura predial (Archivos de Excel) Información de Activos y Pasivos
✓ Secretario de Planeación Villavicencio	Mapas Diálogo
✓ Personería municipal Villavicencio	Conversación y Cifras de reportes de DH (despojos, otras)
✓ Plan de Consolidación Caguán Macarena	información de proyectos,
✓ Archivo municipal Villavicencio	Documentación de Histórica, Planes de desarrollo, Esquemas de Ordenamientos Territorial (impresos físicos)
<b>Institucionales</b>	
✓ Colombia Responde	Diálogo con funcionarios
✓ Ecoparques Macarena	Documentación ambiental
✓ Partido Liberal	documentación
✓ Partido Conservador	Entrevista Josefina Uribe Macarena
✓ Iglesia Católica	Conversación
<b>Organizaciones productivas</b>	
✓ AGGAPAM	Documentación y entrevista
✓ Transportadores	Entrevista Audio
✓ Comité de Ganadero	Información
<b>Organizaciones sociales</b>	
✓ Organización de Víctimas	Participación en Reunión
✓ Organización Mujeres Víctimas	Participación en Reunión
✓ Resguardo Indígena	Participación en Reunión
✓ ASOJUNTAS - Macarena	Conversación

**Identificación del mapa de actores y fuentes de investigación**



**Salidas de campo: registro y recolección en terreno de informaciones primarias y secundarias**

El proceso metodológico fue realizado a partir de dos estrategias de investigación que articulan el conocimiento territorial y etnográfico con el estudio bibliográfico, periodístico y documental. La comisión de campo buscó interactuar con los actores y fuentes en dos niveles: uno desde Villavicencio como el eje departamental donde la institucionalidad de todos los

actores tiene sus representaciones y despliegan sus iniciativas desde una perspectiva geopolítica que vincula los municipios y procesos locales a la región y sus gremios departamentales. En esta medida el segundo nivel de interacción se focaliza a territorios casos como son el Sur del Meta y el Alto Ariari donde las dinámicas de conflicto, organización sociales, desarrollo local tiene experiencias significativas e interpretaciones de las realidades históricas y contemporáneas que se comparten en este informe.









**META**

**Análisis de  
conflictividades y  
construcción de paz**

